

Autoritarismo y democracia (1955-1983)

Marcelo Cavarozzi





Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
Kahle/Austin Foundation

<https://archive.org/details/autoritarismoyde0000cava>

Autoritarismo y democracia (1955-1983)

Macmillan Cavarozzi

ADIDAS

BIBLIOTECA
POLITICA
ARGENTINA

Autoritarismo y democracia (1955-1983)

Marcelo Cavarozzi



CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA

Dirección: Oscar Troncoso

Secretaría de redacción: Margarita B. Pontieri

Asesoramiento artístico: Oscar Díaz

Diagramación: Gustavo Valdés, Alberto Oneto,
Diego Oviedo

Coordinación y producción: Natalio Lukawecki,
Juan Carlos Giraudo

© 1983 Centro Editor de América Latina S. A. Junín 981,
Buenos Aires.

Hecho el depósito de ley. Libro de edición argentina. Impreso
en julio de 1983. Pliegos interiores: compuesto en Gráfica In
tegral, Av. Pueyrredón 538, 4º A, Buenos Aires; Impreso en
los Talleres de Gráfica Patricios S.C.A., Juan C. Lemos 246,
Buenos Aires. Distribuidores en la República Argentina: Capital:
Mateo Cancellaro e Hijo, Echeverría 2469, 5º C, Buenos Aires.
Interior: Distrimeco SRL, Av. La Plata 2138, Capital

ISBN 950 25 0020 2

INTRODUCCION

El período abierto a partir de la insurrección militar que puso fin al gobierno peronista, en 1955 se caracterizó por la inestabilidad política. Ninguno de los tres gobiernos constitucionales del período llegó a completar su mandato, mientras que las tres administraciones militares anteriores a la actual fracasaron ostensiblemente en el cumplimiento de los objetivos que se propusieron y tampoco tuvieron éxito en imponer sus candidatos a la sucesión. Tampoco parece que el actual gobierno militar vaya a constituir una excepción a esta regla, e incluso el descalabro de 1981 y 1982 sugiere una repetición, a escala mayor, del apresurado repliegue que las fuerzas armadas protagonizaron diez años atrás. La superficie de la política argentina, al reiterarse los ciclos de ascenso, crisis y desintegración tanto de los gobiernos constitucionales como de los militares, ha ido adquiriendo una textura de uniformidad en la que, aparentemente, casi el único atributo que distinguió a cada ciclo del anterior fue la mayor intensidad y violencia de las turbulencias políticas. Estas circunstancias han contribuido a generar explicaciones en las que se ha puesto el énfasis en caracterizar a la sociedad argentina como una situación de equilibrio entre fuerzas sociales de peso relativamente parejo y, como resultado de ello, capaces, a la vez, de

bloquear los proyectos políticos de sus antagonistas e incapaces de imponer los suyos propios. Así, las imágenes de bloqueo recíproco y empate social son comunes a un conjunto de interpretaciones entre las cuales la más profunda y sugerente es la que O'Donnell propone en su *"Estado y Alianzas en la Argentina"*.¹

Este trabajo se ubica en un nivel de análisis diferente. En él, se parte de la premisa de que las orientaciones, intereses y valores de las fuerzas sociales no se manifiestan en un vacío, sino en un campo específico, que es un sistema político históricamente definido. Cada sistema político tiene leyes propias, que no constituyen un simple resultado de la interrelación de los atributos de las distintas fuerzas que actúan en él. El descifre de esta legalidad requiere, por ende, una aproximación que reconozca esta eficacia propia del sistema político y que se proponga develarla no reduciéndolo a la condición de mero reflejo de los "factores estructurales" ni considerándolo un campo inerte.

El análisis de la convulsiva conformación de nuevas maneras de hacer política a partir de 1955 exige reconocer la complejidad de un proceso que incluyó, pero que no se redujo, a una serie de ciclos de desarticulación y recomposición de alianzas sociales que generaron una sucesión de equilibrios precarios alternativamente rotos y restablecidos. Sobre todo, porque las imágenes de equilibrio y empate pueden llegar a sugerir la ausencia de cambios y, desde la perspectiva de la *longue durée**², una situación de inmovilidad en la que reiterativamente se retorna al punto inicial.

Lo que sí caracterizó a la sociedad argentina con posterioridad a 1955 fue una situación de equilibrio dinámico en la que deben distinguirse dos etapas. La primera, de 1955 a 1966, correspondió al establecimiento de una fórmula política dual, que contribuyó a generar un equilibrio político en el que, si existió un empate, éste se materializó no tanto como resultado de que la alternancia civil-militar representara alternativas antagónicas, sino más bien porque cada gobierno fue, en sí mismo un compromiso. En otras palabras, cada gobierno del período, se caracterizó por el hecho de que

* El autor se refiere al concepto de larga duración en los procesos históricos, de Fernand Braudel (N. de la E.).

su perdurabilidad estuvo en jaque desde el momento mismo de su inauguración y a que, en la práctica, implementó mecanismos que fueron, sobre todo, límites a las capacidades de acción de los distintos contendientes sociales; es decir, el empate fue interno a cada gobierno en la medida que estuvo condicionado por presiones externas y limitado por su heterogeneidad interna. La segunda etapa, de 1966 en adelante, fue dominada, en cambio, por los sucesivos intentos de unificar el campo de la política —campo que, precisamente, se había escindido durante la década anterior. El fracaso de estos intentos también generó un cierto equilibrio, pero más bien de carácter conmocional o catastrófico ya que el empate se produjo a raíz del aborto de los sucesivos intentos para desempatar; el despliegue y el posterior bloqueo de las sucesivas iniciativas trajeron como consecuencia un desgarramiento del tejido social, es decir la alteración, erosión, e incluso el colapso de patrones básicos de organización e interacción social.

Las dos secciones del trabajo exploran las características de cada una de las etapas. En la primera predominaron gobiernos “débiles”, tanto civiles como militares, que intentaron fundar un régimen semi-democrático —imponiendo, en algunos casos, y no cuestionando, en otros, la proscripción del peronismo. El despliegue de los sucesivos proyectos de establecimiento de una semi-democracia tuvo un par de consecuencias que quiero destacar. En principio, proveyó el marco para la definición de un estilo de funcionamiento de la sociedad, en la cual los procesos más profundos, económicos, culturales y corporativo-institucionales, fueron bastante autónomos de las iniciativas de transformación “desde arriba”; las tendencias sociales dominantes, más bien, fueron la resultante de la interrelación de impulsos, resistencias y forcejeos de los distintos actores de la sociedad civil. Los distintos actores sociales, en consecuencia, fueron perfeccionando en cada nuevo ciclo su capacidad para hacer naufragar las irrupciones desde arriba. Todo ello, finalmente, contribuyó a la constitución de un sistema político dual. En este sistema funcionaron, por un lado, los partidos no peronistas y el parlamento. Ni los unos ni el otro, sin embargo, canalizaron los intereses y orientaciones de los actores sociales fundamentales. Por el otro lado, operó un sistema de negociaciones y presiones

extra-parlamentarias y extra-partidarias; en él se llegó a acuerdos y se celebraron compromisos pero, para llamarlo de algún modo, por descarte. Es decir, los distintos actores generalmente se avinieron a aceptar recortes de sus demandas y pretensiones originales. Sin embargo, dichos actores dejaron traslucir que sus preferencias eran otras, que su apoyo a los acuerdos sobre normas y sustancia era un apoyo a regañadientes y de carácter precario y que no vacilarían, de serles posible, en romper estos acuerdos —aún a costa de provocar la ruptura del sistema institucional. Consecuentemente, la esencia del sistema político dual residió no sólo en que el parlamentarismo y el sistema de partidos generaron su polo contradictorio —al proscribir al peronismo y condenarlo a actuar “por fuera”— sino que, asimismo, los participantes de las negociaciones y presiones extraparlamentarias necesitaron del parlamento y de los partidos como arma de chantaje, es decir para utilizar precisamente como un recurso de ultima ratio la desestabilización o caída del gobierno, civil o militar, de turno.

En la segunda etapa predominaron gobiernos “fuertes”, o al menos gobiernos que se inauguraron y/o autodefinieron como tales, que se propusieron transformaciones radicales de la política, e incluso de la sociedad, argentinas y que, al momento de su instalación (a diferencia de los gobiernos del período anterior) se basaron en consensos de terminación —de los gobiernos que los precedieron— bastante extendidos. Invariablemente, estos gobiernos fuertes terminaron catastróficamente; ésta no fue una circunstancia uniformemente negativa, pues dichos fracasos expresaron, casi sin excepciones, la capacidad de la sociedad argentina para bloquear proyectos autoritarios y represivos.² Pero a diferencia del período anterior, los “éxitos” en impedir la consolidación de los sistemas autoritarios tuvieron costos que fueron mucho más allá de los sobresaltos provocados por la inestable dualidad política del período 1955-1966.

¿Por qué se pagaron precios políticos y sociales mucho más elevados después de 1966? ? Las razones fueron dos. En primer lugar, como ya se sugería más arriba, los reformadores y “revolucionarios” posteriores a 1966 fueron mucho más radicales que quienes los precedieron en la ocupación de la cúpula del Estado. Es-

te radicalismo se exacerbó a partir de 1976 cuando se diagnosticó que el problema argentino trascendía la circunstancia de un sistema político al que, de todas maneras, se calificó de inadecuado, y que en realidad, se trataba, sobre todo, de sanear una sociedad enferma. Pero ya desde 1966 predominaron enfoques "quirúrgicos" en los que, si bien las enfermedades que se detectaron fueron de signo diferente, —la crisis de autoridad (en la sociedad y no simplemente en el Estado), el desorden laboral, la indisciplina de las clases— se coincidió, de todos modos, en que para "curar" a esa sociedad enferma, había que calar en ella muy profundamente. La sociedad argentina, fue sometida, entonces, a tratamientos brutales en los cuales la generalización y extensión de la represión estatal las más de las veces ejercida en transgresión de las propias normas legales fue sólo uno de los "remedios" aplicados. A ella se sumaron el drástico enrarecimiento que experimentó la vida cotidiana en los diversos ámbitos de la sociedad civil —en gran medida debido al miedo que impregnó las relaciones interpersonales—, la destrucción de vastos segmentos de la estructura productiva y el desmantelamiento de una serie de fundamentales circuitos culturales, profesionales, técnicos y académicos. Debe señalarse, sin embargo, que la imagen de la necesidad del "tratamiento shock" como única receta viable para superar los problemas argentinos no fue simplemente el producto de una imaginación política febril y bárbara. Fue también realimentada eficazmente por una sociedad que, crecientemente, se concibió a sí misma como incapaz de generar autónomamente soluciones consensuales a través del juego de intereses y orientaciones contrapuestos. Esta renuncia colectiva de la sociedad civil argentina estuvo a menudo vinculada a ilusiones casi mágicas en el sentido de que las soluciones a los problemas se lograrían simplemente mediante el despliegue de la voluntad política de algún actor o actores providenciales. Desde 1966 los protagonistas cambiaron —los militares, los guerrilleros, los tecnócratas liberales, Perón e incluso los impulsores de la trasnochada aventura bélica de 1982, fueron elevados temporalmente a esa posición por distintos sectores de la sociedad argentina—, sumando fantasías políticas que ignoraron el conflicto o pretendieron resolverlo voluntaristicamente, minimizando la capacidad de otros actores

sociales (generalmente de los adversarios de los portadores de la fantasía de turno) para resistir y bloquear dichas fantasías.

La segunda razón de la tragedia de la última década y media tuvo que ver con la índole de las conclusiones que los actores políticos dominantes extrajeron de sus correctos diagnósticos de la dualidad que había caracterizado a la política argentina hasta 1966. En efecto, las fórmulas políticas intentadas a partir de ese año se propusieron superar dicha dualidad pretendiendo fusionar la escena política y canalizar hacia el interior del marco institucional los procesos de negociación y conflicto que en el período anterior se habían desarrollado extra-institucionalmente. El efecto de dichos intentos no fue el deseado: en el caso de los gobiernos militares no se logró embretar por mucho tiempo la política dentro de esquemas corporativos o propios de una sociedad de súbditos paralizados y atomizados; tampoco el gobierno peronista logró que el parlamento y el Pacto Social canalizaran, más o menos ordenadamente, las presiones y los intereses sociales. Sin embargo, el despliegue de los proyectos de 1966, 1973 y 1976 tuvo como consecuencia que, en buena medida, se cerraran los espacios y se obturaran los intersticios por los cuales la política se había colado hasta 1966 sin que se produjeran grandes estallidos. Por ende, se tornó a seguir haciendo política extra-institucionalmente, pero de manera cada vez más salvaje, con el resultado de que los distintos actores fueron aceleradamente dejando de lado los límites que se habían autoimpuesto en sus interacciones sociales, adoptando estrategias en las cuales la consideración por las consecuencias destructivas de sus comportamientos individuales (en relación a "los otros" y al conjunto de la colectividad) fue reduciéndose progresivamente en cada nuevo ciclo.

Examinemos, entonces, las características de las dos etapas apuntadas.

I

EL FRACASO DE LA “SEMI-DEMOCRACIA” Y SUS LEGADOS

En 1955 una insurrección cívico-militar puso fin al gobierno peronista. La insurrección no sólo produjo el derrocamiento de Perón: asimismo tuvo éxito en desmantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores. El modelo peronista, basado en la relación directa entre líder y masas, había hecho de Perón el depositario único de la representación del pueblo. Este fenómeno tuvo como efecto que los canales parlamentarios y partidarios fueran permanentemente relegados y perdieran relevancia en la escena política. Además, el peronismo en el poder tendió a considerar las actividades de los partidos de oposición (y de las organizaciones profesionales y sindicales no peronistas) como manifestaciones de intereses sectoriales ilegítimos. Consecuentemente, el gobierno obstaculizó en forma creciente tales actividades, tanto dentro como fuera del parlamento.

Los líderes del golpe de estado de 1955 caracterizaron al régimen peronista como una dictadura totalitaria y, en consecuencia, levantaron los estandartes de la democracia y la libertad, proponiéndose como objetivo el restablecimiento del régimen parlamentario y el siste-

ma de partidos. Este objetivo, sin embargo, se frustró recurrentemente: en 1957, la asamblea constituyente, controlada por los partidos no peronistas, no pudo acordar una nueva constitución y se disolvió sin lograr una reforma del anticuado texto del siglo pasado; en 1962, los militares –con el apoyo de varios partidos, derrocaron al presidente Frondizi, elegido constitucionalmente cuatro años antes; en 1966, los militares volvieron a intervenir para derrocar a otro gobierno constitucional, esta vez el del presidente Illia.

Tanto en 1955-1958 como en 1962-1963, los interregnos entre gobiernos constitucionales fueron ocupados por administraciones militares. Las mismas, sin embargo, no se propusieron reemplazar la democracia parlamentaria por un régimen político alternativo ni posponerla para un futuro distante, al que se arribaría sólo *después* que ciertos cambios económicos o sociales fueran logrados. Más bien, el principal y autoproclamado objetivo de estos gobiernos temporarios fue la imposición de mecanismos proscriptivos del peronismo, mientras, al mismo tiempo, intentaban erradicarlo. El peronismo era percibido como un fenómeno inherente e irremediablemente adverso a las instituciones y valores democráticos, a los cuales, de haberle sido permitido actuar libremente, hubiera deformado e incluso destruido.

El despliegue de una nueva fórmula política, después de 1955, fue en verdad un proceso convulsivo y frustrante. Pero los fracasos en la tarea de lograr estabilidad institucional no impidieron que durante esos años se configuraron nuevos modos de hacer política que implicaron una profunda redefinición de los patrones de procesamiento de los conflictos y relaciones socio-económicas. Estos nuevos modos de articulación política se desplegaron gradualmente durante la década siguiente a la caída de Perón; si bien no dieron lugar al surgimiento de una fórmula institucional que produjera estabilidad política, su relevancia trascendió al período 1955-1966. En efecto, los nuevos modos dejaron un legado político-ideológico con el cual tuvieron que lidiar necesariamente los diferentes actores políticos, viejos y nuevos, cada vez que se esbozaron fórmulas políticas alternativas a partir de 1966.

Los puntos de esta sección analizan la forma en que

se fueron definiendo estos modos de hacer política. Para ello se exploran tres de sus elementos más importantes: a) el surgimiento de desfasajes significativos entre el nivel de los intereses socio-económicos, por un lado, y el de los bloques políticos, por el otro; b) la formación de un movimiento sindical peronista con características nuevas, que se constituyó en un actor político autónomo y articuló progresivamente una estrategia defensiva y de oposición; c) el ingreso de los militares a la arena política, asumiendo, primero, un rol tutelar en el marco de regímenes semidemocráticos, y expandiendo, más tarde, su esfera de intervención con el objetivo de acabar con las prácticas democráticas y las instituciones parlamentarias.

Argentina post 1955: Una comunidad política desarticulada

El derrocamiento del gobierno peronista en 1955 fue promovido por un amplio frente político que incluyó a todos los partidos no peronistas, los representantes corporativos e ideológicos de las clases medias y las burguesías urbana y rural, las fuerzas armadas y la Iglesia. Los miembros del frente antiperonista persiguieron objetivos dispares. Sin embargo, el frente pudo mantenerse unido durante un cierto tiempo bajo la bandera de la “democracia”, que fue levantada oponiéndola al carácter dictatorial y totalitario atribuido al régimen peronista.

Muchos antiperonistas compartieron la noción, un tanto ingenua, que los peronistas habían sido convertidos a ese credo político mediante una combinación de demagogia, engaño y coerción. En consecuencia, creyeron que la mera denuncia de los “crímenes de la dictadura”, acompañada de un proceso de reeducación colectiva, resultaría en una gradual reabsorción de ex-peronistas por partidos y sindicatos “democráticos”. Esta ilusión no duró mucho; el peronismo sobrevivió la caída de su gobierno y se constituyó en el eje de un vigoroso movimiento opositor. Sin embargo, en el corto plazo, dicha ilusión tuvo el efecto de permitir a los antiperonistas proclamar que la proscripción del peronismo –una medida que implicaba segregar políticamente entre un tercio y la mitad de la ciudadanía argentina– era en realidad una

acción democrática. Naturalmente, una consecuencia adicional de la proscripción del peronismo fue su exclusión del gobierno.

El corolario de la exclusión del peronismo, tanto del plano electoral como del correspondiente a la acción política legal, fue particularmente complejo. En primer lugar, introdujo una profunda disyunción entre la sociedad y el funcionamiento de la política en Argentina, que resultó en la emergencia paulatina de un sistema político dual. En el mismo, los mecanismos parlamentarios coexistieron, de manera conflictiva y a veces antagónica, con modalidades extra-institucionales de hacer política. El principal resultado de este dualismo fue que los dos "bloques" principales de la sociedad —es decir, el sector popular y el frente antiperonista, compuesto por los sectores burgueses y de clase media— rara vez compartieron la misma arena política para la resolución de conflictos y el logro de acuerdos basados en mutuas concesiones. El sector popular y especialmente la clase obrera, que se había expresado principalmente a través del peronismo, quedó privado de toda representación tanto en las instituciones parlamentarias semidemocráticas como en la maquinaria institucional del Estado. En contraste, su adversarios sociales —quienes, por otra parte, habían sufrido una exclusión política parcial durante la época peronista— tuvieron la posibilidad de recurrir tanto a los mecanismos parlamentarios como a los extra-institucionales. Gozaron de un acceso privilegiado al Estado y ejercieron una influencia decisiva sobre las políticas y los impactos de las acciones estatales.

Las presiones ejercidas por el sector popular fueron, en su gran mayoría, de carácter extra-institucional. El movimiento sindical peronista se transformó progresivamente en la expresión organizada más poderosa del aquel sector. En última instancia, sin embargo, la presión popular se redujo a la capacidad de desestabilizar, desde afuera del escenario político oficial, a cada uno de los regímenes civiles y militares que se sucedieron durante el período. Tal desestabilización se logró tanto a través del planteo de demandas económicas que contradijeron y socavaron la viabilidad de las políticas de estabilización lanzadas entre 1956 y 1963 como mediante el apoyo a candidatos anti-oficialistas en elecciones nacionales, provinciales y locales.

A la limitada correspondencia que existió entre, por un lado, los conflictos y los alineamientos sociales y, por el otro, las modalidades institucionales de hacer política, fenómeno al que hemos caracterizado como de "disyunción", se agregó un segundo factor que la acentuó. Este podría ser considerado como una "disyunción dentro de la disyunción" y afectó al antiperonismo. Originalmente, el bloque social que enfrentó a los sectores populares se expresó plenamente a través del frente formado por los partidos no peronistas y los militares "democráticos" triunfantes en 1955. Poco a poco, sin embargo, esta situación se fue alterando y partidos no peronistas y militares comenzaron a expresar contenidos disímiles, y a veces antagónicos. Esto se debió a dos razones. La primera fue que los militares "democráticos" de 1955 fueron perdiendo progresivamente su "vocación democrática", para concluir respaldando el establecimiento de regímenes de carácter autoritario. Este "deslizamiento" autoritario de los militares los llevó a enfrentarse crecientemente con los partidos, pues a pesar de que éstos por lo general no renegaron de su antiperonismo, su razón de ser estaba obviamente ligada al funcionamiento de un sistema democrático-parlamentario y al mantenimiento de un mínimo de libertades públicas. La segunda causa que complicó las relaciones entre militares y políticos fue que los partidos no-peronistas se transformaron en el principal canal de expresión de una compleja interacción entre dos controversias que dominaron la escena política argentina luego de la caída de Perón. En 1955 el frente antiperonista se había coaligado en torno al estandarte "oposicionista", es decir, el proyecto de destrucción del régimen peronista. Esta unidad, sin embargo, comenzó a desvanecerse cuando llegó el momento de ejercer el poder desde el Estado y hallar vías de resolución a las aludidas controversias.

La primera de estas controversias se definió en torno al rol de gobierno con respecto a la erradicación del peronismo. Las diferentes posiciones en ese sentido comprendieron un espectro que iba desde el "integracionismo" —el cual postulaba una gradual reabsorción del peronismo a la vida política, aunque sin desconocer la necesidad de una purga de sus aspectos más "dañinos", como el mismo Perón— hasta el "gorilismo", con su nunca abandonado propósito de "extirpar com-

pletamente el cáncer peronista" de la sociedad argentina. La segunda controversia estuvo vinculada al modelo socio-económico que, presumiblemente, reemplazaría al que había prevalecido durante el período 1945-1955. En 1955 el victorioso frente antiperonista se unificó en torno a la denuncia de los problemas económicos que Argentina había enfrentado desde fines de la década de 1940; inicialmente, resultó relativamente fácil para los distintos integrantes del frente coincidir en la condena de una conjunto de políticas poco efectivas y de una administración corrupta, como principales fuentes de las dificultades que enfrentaba el país. Sin embargo, esta transitoria unidad pronto se hizo trizas al aflorar diagnósticos opuestos de la crisis económica argentina. El perfilamiento de estos diagnósticos se tradujo en la formulación de recomendaciones alternativas acerca del curso a seguir en materia de política económica.

A partir de 1956 fueron emergiendo gradualmente tres posiciones divergentes en el campo del antiperonismo, la del populismo reformista, la desarrollista y la liberal. La primera no cuestionó las premisas básicas del modelo impulsado durante la década peronista.³ Por el contrario alentó la posibilidad —y conveniencia— de promover simultáneamente los intereses de la clase obrera y la burguesía urbana, y propuso una política naciona-lista moderada, que impidiera, o al menos limitara, la presencia del capital extranjero en sectores tales como energía, comunicaciones, y la producción de bienes de capital. Esta posición combinaba elementos reformistas y populistas y, en realidad, sólo formuló dos críticas importantes a las políticas económicas del gobierno peronista. Por una parte, el *populismo reformista* sostuvo que las políticas de Perón habían desalentado la producción agropecuaria, acusación que quedaba corroborada por el estancamiento de la producción en ese área a lo largo del gobierno peronista. Por otra parte, esta posición argumentó que se había fracasado en la promoción de la industria pesada y el desarrollo de la infraestructura económica, y que el Estado había expandido desproporcionadamente sus gastos corrientes, retrasando la inversión en obras públicas.⁴

Las consignas del populismo reformista fueron promovidas por el radicalismo, que se había transformado en la única oposición partidaria organizada después de

1946.⁵ En 1956 el partido se dividió; un ala, la Radical Intransigente o frondizista, era partidaria de una gradual legalización del peronismo; la otra, los Radicales del Pueblo, permanecieron cercanos a la posición proscriptiva, más dura, de los militares. En todo caso, las facciones mayoritarias de los dos nuevos partidos mantuvieron su adhesión al programa de Avellaneda, que proponía en lo económico una serie de medidas de carácter nacionalista y reformista.

Sin embargo, cuando el líder de los Intransigentes, Arturo Frondizi, fue elegido presidente en 1958, redefinió radicalmente la orientación económica del partido, articulando una posición enteramente distinta, la “desarrollista”, y fue la otra fracción, es decir los Radicales del Pueblo, quienes mantuvieron su apoyo a los postulados del populismo reformista.

Los desarrollistas, en cambio, sostuvieron que el estancamiento económico de la Argentina se debía principalmente a un retardo en el crecimiento de las industrias de base. Tal debilidad, según esta postura, sólo podía superarse mediante un proceso de “profundización” que abarcara la expansión de los sectores productores de bienes de capital e intermedios, y de la infraestructura económica. Asimismo, la posición desarrollista postuló que el modelo de conciliación de clases del período 1945-1955 tenía, al menos en el corto plazo, una contradicción ineludible. La misma sólo podía ser resuelta disminuyendo el salario real de los trabajadores para aumentar la renta de los industriales; tal aumento era, a su vez, considerado un requisito indispensable para una elevación significativa del nivel de inversión. Finalmente, los desarrollistas abogaron por un cambio sustancial en las políticas relacionadas con el capital extranjero, aplicadas en el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollismo sostuvo que, dado que los recursos locales de capital eran insuficientes para lograr la deseada “profundización”, se requería una incorporación masiva de capital extranjero a la economía. El desarrollismo recién se terminó de articular en 1958, cuando Frondizi cambió de curso y tiró por la borda el programa “nacional y popular” que había contribuido significativamente a generar los apoyos sociales que le permitieron alcanzar la victoria en las elecciones de ese año.⁶

Como hemos visto, el desarrollismo no prestó un apoyo irrestricto al modelo de conciliación de clases, sino que propugnó la introducción de significativos ajustes del mismo. Tales modificaciones tuvieron por objeto inducir un cambio en la correlación de fuerzas en favor de la burguesía urbana. A pesar de ello, el programa desarrollista no cuestionó los aspectos centrales del proceso de industrialización sustitutiva inaugurado en los años treinta. Por el contrario, los políticos desarrollistas impulsaron tanto la aceleración como la ampliación cualitativa del proceso de industrialización.

Comparativamente, la última de las posiciones, la *liberal*, fue mucho más lejos en la crítica del proceso de industrialización iniciado en la década de 1930 y de las prácticas sociales y políticas asociadas al mismo. Los liberales no sólo criticaron el modelo de conciliación de clases; cuestionaron también la premisa según la cual el desarrollo industrial debía constituir el núcleo dinámico de una economía cerrada. Argumentaron en este sentido, que desde los años treinta —y particularmente desde 1946— la Argentina se había enfrentado con dos problemas críticos: el progresivo deterioro de la disciplina de los trabajadores y la ineficiencia de amplias franjas de la burguesía industrial. Tales problemas tenían su raíz, desde la perspectiva liberal, en las políticas que habían cerrado la economía, favoreciendo la proliferación de industrias “artificiales”, y en el excesivo crecimiento del Estado. La imagen del mercado pasó a constituir, en un doble sentido, la piedra fundamental de la posición liberal. Por una parte, implicaba la apertura de la economía argentina y su reintegración al mercado internacional, mediante la reducción de los aranceles y la eliminación de otras “distorsiones” que protegían a los sectores artificiales. Por otra parte, suponía una drástica reducción de la intervención del Estado en la economía y la restauración, mediante adecuados incentivos, de la iniciativa del sector privado.

Como fuera ya señalado, cada una de estas tres posiciones abogaba por políticas económicas disímiles y, con frecuencia, antagónicas. Obviamente, tales políticas tenían la capacidad potencial de afectar de manera diferente los intereses de las principales clases de la sociedad argentina. Sin embargo, la política de ese período se caracterizó por una circunstancia muy poco

común: los clivajes y alineamientos políticos no respondieron solamente a los cálculos que se hicieron del impacto que las políticas económicas producirían en cada clase social. Existió, además, otro factor que estuvo vinculado sólo en forma indirecta, cuando no contradictoria, a las respectivas evaluaciones de los intereses económicos particulares; ese factor no fue otro que la cuestión del peronismo. La presencia del proscripto movimiento peronista se expresó de un modo muy especial en la escena política. Dicha presencia, si bien implícita, fue uno de los factores determinantes de los modos en que las organizaciones políticas y sociales que encarnaron las tres posiciones descriptas más arriba definieron y resolvieron los conflictos surgidos durante este período.

A partir de 1955, los partidos políticos, organizaciones corporativas y corrientes ideológicas, a través de los cuales se expresaron el reformismo populista, el desarrollismo y el liberalismo, entraron en numerosas alianzas y conflictos. Como se adelantaba arriba, tanto los apoyos que tales partidos y organizaciones recibieron, como las oposiciones que suscitaron, tuvieron que ver con dos factores: 1) las predicciones de las consecuencias que previsiblemente tendría la implementación de las políticas económicas alternativas en relación a los intereses económicos de cada clase o sector social, y 2) el modo en que la retórica, las plataformas y la ideología de cada partido o corriente aludieron a la cuestión del peronismo. Tales alusiones, a su vez, hacían referencia a las dos principales manifestaciones político-institucionales de la identidad peronista de los sectores populares, la exclusión política que sufrían como ciudadanos, y su renovada adhesión a un movimiento sindical que continuó definiéndose como parte del peronismo y no meramente como una red de organizaciones corporativas de la clase obrera.⁷

La complejidad de la política argentina del período 1955-1966 se debió en gran medida a que las adhesiones y oposiciones políticas generadas, por una parte, por las predicciones acerca de los efectos que tendría la aplicación de las políticas económicas alternativas sobre lo que cada grupo percibía como "sus" intereses, y, por otra parte, las reacciones de los distintos grupos con respecto a las estrategias alternativas de exclusión o reincorpora-

ción del peronismo a la escena política legal, estaban relacionadas pero no fueron totalmente coextensivas. La lógica de esta compleja interrelación fue gobernada principalmente por las oscilaciones pendulares de aquellos partidos, organizaciones empresarias y sectores militares que expresaron y articularon la posición liberal.

¿A qué se debieron, y de qué modo ocurrieron las oscilaciones pendulares de los liberales? Dichas oscilaciones en parte respondieron a una circunstancia relativamente contingente: los programas concretos de los dos partidos que dieron cuerpo a las posiciones del populismo reformista y el desarrollismo —es decir, los Radicales del Pueblo y los Radicales Intransigentes— combinaron la política y la economía de una manera contradictoria y, desde la perspectiva de los liberales, totalmente insatisfactoria. Ya desde 1956 sectores significativos del Radicalismo del Pueblo habían defendido políticas económicas reformistas y nacionalistas que poco se diferenciaron de las aplicadas durante la primera etapa del régimen peronista.⁸ Sin embargo, con respecto al peronismo, los Radicales del Pueblo tendieron a asumir posiciones cercanas al “gorilismo”; más específicamente, apoyaron la proscripción electoral del peronismo hasta principios de la década del sesenta y abogaron por el establecimiento de un sistema de afiliación sindical que hubiera tenido como consecuencia la atomización de la organización corporativa de la clase obrera. Esto último, naturalmente, despertó la oposición de la conducción sindical, predominantemente peronista. La fórmula del Radicalismo Intransigente era, prácticamente, el reverso exacto de la posición de sus viejos correligionarios. Luego de la asunción de Frondizi como presidente, en 1958, los Radicales Intransigentes adoptaron un programa económico orientado a la expansión de las industrias productoras de bienes de consumo durable y de capital y a la modernización y privatización creciente de los sectores de energía, transportes y comunicaciones. Este programa reservó un papel estratégico al capital extranjero e impuso inicialmente una drástica reducción del salario real. Los Radicales Intransigentes, sin embargo, nunca abandonaron los objetivos “integracionistas” que anunciaron desde 1956. Trataron de reforzar el predominio peronista en el movimiento sindical, pero, al mismo tiempo, indujeron (e incluso forzaron) a los líderes

sindicales a actuar “responsablemente”, lo cual significaba a) contener las “excesivas” demandas salariales de las bases y b) distanciarse del liderazgo ejercido por Perón.

Excluido el peronismo, los dos partidos Radicales agotaban el espectro de fuerzas electoralmente significativas de fines de la década del cincuenta y principios de la del sesenta. La posición liberal carecía de la posibilidad de expresarse a través de un partido conservador fuerte, con posibilidades reales de ganar una elección presidencial o, siquiera, de obtener una representación parlamentaria significativa.⁹ La coherencia interna de los programa liberales se equiparaba a su tremenda debilidad electoral. La síntesis programática liberal, es decir, la propuesta de 1) erradicar definitivamente al peronismo y pulverizar el sindicalismo peronista, 2) producir una drástica reducción del intervencionismo estatal y 3) eliminar los sectores industriales ineficientes, obtuvo la adhesión de amplios sectores de la burguesía argentina. Empero, no sirvió para ganar votos. En consecuencia, luego de 1955, los liberales debieron enfrentar la dura realidad de que la derrota de su principal enemigo, el peronismo, no se tradujo en la resolución de sus problemas políticos. Así se vieron continuamente forzados a elegir entre lo que en última instancia percibieron como dos “males menores”: el desarrollismo y el reformismo populista. Sin embargo, la lógica de este juego político llevó a los liberales a modificar repetidamente su evaluación de cuál de esos “males” era realmente el “menor”.

Cuando eligieron dar prioridad a sus objetivos económicos, como entre 1959 y 1961, tendieron a aliarse con el desarrollismo. Pero esa alianza no fue fácil ni pudo alcanzar un grado satisfactorio de estabilidad. Si bien liberales y desarrollistas coincidieron en la necesidad de aplicar programas de estabilización basados en fuertes devaluaciones y congelamientos de salarios, no alcanzaron el mismo grado de acuerdo con respecto a la estrategia económica de largo plazo. Por lo tanto, el éxito mismo del programa de estabilización, sobre el que habían coincidido previamente, agudizó y puso más de manifiesto sus conflictos más profundos.¹⁰ Además, y debido a que los desarrollistas nunca abandonaron su postura “integracionista”, los liberales frecuentemente se sintieron ofendidos y perjudicados por las actitudes conciliatorias que tuvo el desarrollismo hacia los líderes

sindicales peronistas. Las negativas del gobierno frondizista a desmantelar la CGT y las idas y vueltas con respecto a la proscripción del peronismo en los comicios legislativos y provinciales agudizaron la tensión entre liberales y desarrollistas. En consecuencia, aquéllos se inclinaron a menudo por resaltar sus orientaciones anti-peronistas —como ocurrió en 1956-1958 y, menos claramente en 1962-1963, lo cual los llevó a unirse al populismo reformista. Pero, naturalmente, ésta también era una alternativa poco satisfactoria. Tanto en 1958 como en 1962 los Radicales del Pueblo ofrecieron una plataforma antiperonista y anti-integracionista aparentemente atractiva, pero que constituía la antípoda del liberalismo en términos de política económica. Cada vez que el populismo reformista tuvo oportunidad de aplicar su programa económico —como ocurrió parcialmente en 1956 y de un modo más claro entre 1963 y 1966— los liberales se sintieron profundamente contrariados por políticas que no dejaban de asemejarse a las del peronismo.¹¹

En consecuencia, uno de los rasgos sobresalientes de la disyunción que recorrió al antiperonismo a lo largo de este período fue que cada uno de los resultados sucesivos estuvo determinado por el sentido en que, alternativamente, oscilaron los liberales. Al mismo tiempo, sin embargo, los liberales ejercieron sólo una influencia mínima en el curso seguido por la política y la economía. Si bien inicialmente estuvieron en condiciones de imponer programas de estabilización, fueron más tarde obligados a renunciar a sus objetivos de largo plazo o, aún peor, forzados a abandonar las posiciones conquistadas en el gobierno. De tanto en tanto tuvieron éxito en lograr la proscripción del peronismo, pero fracasaron rotundamente en su objetivo de controlar el régimen semi-democrático que pretendieron fundar.

Los liberales, como cabía esperar, adquirieron una conciencia creciente de la futilidad de sus pendulaciones, en cuanto al logro de sus objetivos de largo plazo, es decir, la erradicación del peronismo (y de su espectro) y la rectificación de la orientación económica estatista y pro-industrialista. Hacia mediados de la década de 1960 esta progresiva toma de conciencia fue un factor decisivo que indujo a los liberales a optar por una estrategia abiertamente antidemocrática. Tal estrategia puso énfasis

en la necesidad de eliminar aquellas mediaciones políticas, los partidos y los mecanismos parlamentarios que, supuestamente, habían impedido por más de una década la implementación del programa liberal. Entre 1964 y 1966, a diferencia del período frondizista, el énfasis renovado puesto por los liberales en sus objetivos económicos no desembocó en otra alianza con el ala desarrollista del espectro político. A esa altura los liberales ya estaban convencidos de que para alcanzar sus objetivos económicos y políticos debían romper sus vínculos con el establishment partidario no peronista.

Los sindicatos peronistas en la oposición

El intento del régimen militar de 1955-1958 de fundar un régimen político basado en los partidos y en el fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios fracasó completamente. Sin embargo, el despliegue de tal intento tuvo consecuencias significativas para la sociedad argentina. Más allá de haber causado el colapso del régimen peronista, la intervención militar favoreció, a partir de 1955, el surgimiento de una especie de una especie de "parlamentarismo negro". Este estilo de política se fue conformando a raíz de la frustrada implementación de los proyectos pertenecientes a los militares "democráticos" y de la no prevista configuración de nuevos patrones de acción política que fueron prevaleciendo subsecuentemente. Hasta cierto punto, la misma situación se reprodujo en relación a las políticas hacia la clase obrera y las relaciones laborales. El régimen militar fracasó rotundamente en sus intentos de erradicar al peronismo de la clase trabajadora. Asimismo, el régimen no logró imponer su proyecto de crear un sistema de afiliación y representación sindical múltiple, destinado a reemplazar las pautas establecidas por la ley peronista de los años cuarenta. Sin embargo, a pesar de que no cuajaron, estos intentos produjeron cambios importantes en el interior del movimiento obrero a partir de 1955.

En primer lugar, el estilo de control político de la clase obrera establecido durante la época peronista fue radicalmente modificado. Este estilo se había basado en el tutelaje benévolos de la clase obrera por el Estado y en

la subordinación ideológica del movimiento sindical a Perón. Más aún, los líderes sindicales peronistas que habían controlado los sindicatos hasta 1955 se vieron, salvo contadas excepciones, efectivamente desplazados de la escena sindical, y nunca recuperaron su anterior influencia. En segundo lugar, el frustrado proyecto de los militares creó las condiciones para el surgimiento de un movimiento sindical peronista enteramente diferente que ganó cierta independencia frente a Perón y fue capaz de desarrollar su propia estrategia política.

Sin embargo, Perón no desapareció de la escena política argentina ni del peronismo luego de 1955. Su rol, eso sí, sufrió cambios significativos. Para empezar, la naturaleza de su vínculo con las masas populares cambió, ya que Perón dejó de tener la posibilidad de satisfacer sus demandas y de apelar periódicamente a ellas en forma directa. Alternativamente, la figura de Perón emergió como el principal símbolo del retorno. La imagen del retorno a un pasado mejor se constituyó en la base más importante del atractivo que el peronismo despertó permanentemente en las masas y, en particular, en la clase obrera. Otro cambio importante fue que Perón perdió, en parte, su poder de controlar a los líderes peronistas. Algunos políticos provinciales, sobre todo de zonas ajenas a las áreas metropolitanas de la región pampeana, y numerosos líderes sindicales, generaron bases propias de poder, lo cual les dio un espacio para desafiar ocasionalmente la autoridad del "líder". Si bien los desafíos más serios y explícitos a la autoridad de Perón fracasaron invariablemente, el poder para sancionar las expresiones de rebeldía, otra vez ejercido sin restricciones por el "líder", se vio reducido sustancialmente.

Los desafíos abiertos a la autoridad de Perón no constituyeron la única manifestación de las transformaciones que su liderazgo sufrió a partir de 1955. Otra circunstancia importante fue que las connotaciones ideológicas del peronismo se fueron librando en parte de su influencia. La siempre ambigua ideología peronista empezó a reflejar en mayor medida la correlación de fuerzas internas del movimiento. Un peronismo menos subordinado a la autoridad de Perón, y reflejando más directamente el peso relativo de las fuerzas sociales que lo constituía, se transformó en un peronismo crecientemen-

te proletario. Esta gradual transformación fue favorecida por un factor adicional: en cada ocasión que la proscripción electoral del peronismo fue levantada —aunque fuera de manera parcial— la esfera de acción de los líderes sindicales se vio considerablemente expandida al tener la oportunidad de incidir en la lucha política en torno a los comicios. El voto de los trabajadores se transformó así en un instrumento de presión y negociación, comparable a los paros y huelgas. Además, a diferencia de Perón y los políticos peronistas, los líderes sindicales tuvieron siempre la opción de replegarse a una esfera específica de acción: las negociaciones colectivas y las relaciones industriales. En consecuencia, los líderes sindicales del peronismo desarrollaron una aptitud de la que habían carecido hasta 1955, es decir, la capacidad de negociar con actores políticos no peronistas, tales como los partidos, las asociaciones empresariales y los militares.

El poder del movimiento sindical peronista se amplió después de 1955. Asimismo, este poder se apoyó en bases bastante diferentes. ¿Cómo empleó el sindicalismo su redefinido poder? Más arriba se sugirió que las acciones de los líderes sindicales fueron gobernadas, a partir de 1955, por una estrategia defensiva y de oposición. Esto estuvo estrechamente ligado al énfasis puesto por el peronismo en la imagen del retorno. Los sindicalistas peronistas de la época posterior a 1955 actuaron en una sociedad que cada vez se pareció menos a la Argentina del período 1945–1955. A partir de 1959 la economía fue gradualmente transformada por la expansión de los sectores industriales productores de bienes intermedios y de consumo durable. Dichos sectores eran, más intensivos en el uso del capital y estaban más penetrados por el capital extranjero que los sectores industriales desarrollados durante las dos décadas anteriores. Los nuevos sectores pronto desplazaron a estos últimos de su rol de núcleo dinámico del capitalismo argentino. Sin embargo, el discurso de los sindicalistas peronistas reclamó continuamente la restauración de los atributos prevalecientes antes de 1955. Estos atributos eran, en parte, rasgos reales de la Argentina de la década 1945–1955 y, en parte, una destilación de la visión ideológica del peronismo: la alianza entre la burguesía nacional y la cla-

se obrera bajo el tutelaje protector del Estado: políticas económicas redistributivas; nacionalismo; la definición de la oligarquía (agraria) como el principal adversario social de las fuerzas "nacionales y populares" y el poder arbitral de Perón.

El símbolo unificador de la recuperación de la época de oro perdida, la constituía, por supuesto, el retorno de Perón a la Argentina... y al poder. Sin embargo, el retorno de Perón, y de la Argentina peronista, dejó de ser objetivo político fundamental del movimiento sindical peronista. Se transformó, más bien, en una especie de mito que cumplía dos funciones. En primer lugar, permitió a los líderes sindicales interpelar a los obreros como obreros peronistas, y por lo tanto rescatar una de las raíces de su identidad colectiva, que no llegó a ser borrada por los sucesivos regímenes post-peronistas.¹² En segundo lugar, la proclamada adhesión a un objetivo político que, en el contexto de la Argentina de 1955-1966, era considerado inalcanzable por todos los sectores políticos importantes —peronistas incluidos— liberó a los sindicalistas de la responsabilidad de reconocer las consecuencias y corolarios políticos más concretos que tenía su estrategia. Dicho reconocimiento los hubiera forzado a autolimitarse en sus demandas económicas. En este sentido, el sindicalismo peronista no fue, como algunos han argumentado, un movimiento meramente economicista; en él, más bien, los objetivos económicos y políticos se entrelazaron de una manera muy peculiar.

Aunque las demandas impulsadas por los sindicatos peronistas eran de naturaleza económica y corporativa, contuvieron frecuentemente una invocación política. Los sindicatos argumentaron —a veces de un modo directo, otras de manera oblícua—, que las políticas económicas y laborales de los regímenes no peronistas no sólo perjudicaban los intereses inmediatos de los trabajadores sino que además socavaban la posibilidad del retorno a la época dorada del peronismo. Y, aunque la invocación estuvo dirigida a los trabajadores, fue "oída" también por otras clases: la burguesía argentina también hizo la conexión entre el programa económico y corporativo de los sindicatos peronistas, y la posibilidad de resurrección de una era acerca de la cual sus memorias eran enteramente diferentes a las de la clase obrera.

Las prácticas políticas del movimiento sindical com-

binaron dos elementos: 1) un patrón de esporádicas penetraciones en los mecanismos de representación parlamentaria que se manifestó a través de la limitada, aunque significativa, capacidad de los líderes sindicales para influir sobre la conducta electoral de los trabajadores; y 2) una acción de desgaste a largo plazo —algo así como un continuo e implacable asedio “desde afuera”— que se ejerció contra regímenes políticos que excluyeron al peronismo, al costo de ser altamente vulnerables a ataques cuestionadores de su representatividad y legitimidad.

Las administraciones del período 1955–1966, tanto civiles como militares, resultaron debilitadas por los efectos que produjo uno de sus propios axiomas operativos, es decir, la exclusión del peronismo de la escena política legal. En efecto, tal exclusión redundó en que la capacidad política de la clase obrera para obtener concesiones fue mayor toda vez que ésta se propuso quebrantar las reglas formales. En consecuencia, el movimiento sindical peronista se tornó, tal como se quejaban algunos de sus adversarios, una fuerza subversiva. Tal carácter subversivo, sin embargo, no estuvo asociado a un cuestionamiento de la naturaleza capitalista de las relaciones sociales. Reflejó, en cambio, que el sindicalismo —así como otros actores— recurrió, como último recurso, al quebrantamiento de las reglas formales del sistema. En realidad, al efecto desestabilizador de las acciones emprendidas por el sindicalismo fue siempre indirecto, como resultado del impacto que tales acciones produjeron en la conducta de otros actores, y en particular de las fuerzas armadas. Los sindicalistas contribuyeron a crear circunstancias que indujeron a los militares a depoñer a las administraciones civiles, o frustraron los objetivos de los regímenes militares, induciéndolos de ese modo a abandonar el poder para evitar situaciones que, al menos en la percepción de los militares, hubieran requerido como solución la aplicación de medidas de represión masiva.

La estrategia del movimiento sindical peronista tuvo una ventaja importante: su poder se materializó, en buena medida, a través de las acciones de otros actores. Esto permitió a los sindicalistas disociarse de las consecuencias indeseables de los ciclos de golpes y repliegues de los militares, como ocurrió reiteradamente entre 1955

y 1966. La estrategia sindical tuvo, además, otras dos características. Por una parte, que el movimiento sindical promoviera el logro de sus objetivos a través de otros actores dio lugar a que los objetivos de estos "intermediarios" interfirieran o modificaran parcialmente los propios del movimiento sindical. Por otra parte, que el poder del sindicalismo se manifestara principalmente a través de la imposición de restricciones a las acciones de otros actores, ocultó su incapacidad para formular un diagnóstico propio de la crisis estructural que afectaba a la economía argentina desde fines de la década de 1940 y para proponer respuestas.¹³

Finalmente, esta capacidad defensiva permitió al sindicalismo obstaculizar la implementación definitiva de las políticas de estabilización económica que se propusieron retrasar los salarios con respecto a los aumentos de otros precios, e inducir, de ese modo, un aumento de la inversión privada. A partir de 1959, el poder defensivo de los sindicatos fue ejercido con cierta "demora", materializándose sólo después que las políticas de estabilización lograran algunos "éxitos" con respecto a la reducción de los salarios reales y la represión de las demandas obreras.* En consecuencia, la capacidad defensiva del sindicalismo se manifestó principalmente a través de la articulación de "acciones de contraataque". Las mismas tuvieron el efecto de anular al menos parcialmente, el impacto negativo inicial que los programas de estabilización habían producido en los niveles de salario y empleo. Pero, aun así, la resistencia sindical no pudo revertir algunos de los cambios introducidos en la economía. Durante el período 1959–1961 –al igual que entre 1967 y 1969– se dio una importante expansión de los sectores industriales caracterizados por ser capital intensivos y contener una presencia predominante del capital extranjero. Luego de la década de rápido crecimiento inaugurada hacia fines de la guerra, el nivel de empleo industrial se estancó, hacia mediados de los años cincuenta; a su

* Los que aquí se categorizan como "éxitos" lo fueron con respecto de las políticas de estabilización y no del modelo desarrollado. Strictu Sensu, el modelo desarrollista no requería retrasos salariales. Estos, más bien, constituyeron requisitos políticos destinados a cimentar la confianza de los sectores dominantes.

vez, los aumentos de la productividad de la mano de obra industrial fueron sustancialmente mayores que los aumentos de los salarios reales. En resumen, el despliegue exitoso de las acciones de contrataque del movimiento sindical impidió la completa ejecución y consolidación de los proyectos de estabilización y crecimiento de fines de la década del cincuenta y principios de los años sesenta, pero no pudo revertir las significativas transformaciones sufridas por la economía argentina a partir de 1959.

Los militares del período posterior a 1955: nuevos estilos de intervención política.

Los militares constituyeron el tercer elemento importante de la fórmula política que emergió a partir de 1955. El éxito de la insurrección militar de ese año inauguró un nuevo patrón de intervención militar en la política argentina. Entre 1930 y 1955, las fuerzas armadas se habían constituido en guardianes de los gobiernos constitucionales, derrocando tres administraciones civiles. Sin embargo, a excepción del corto período entre 1943 y 1945, los militares se abstuvieron de participar directamente en la conducción del Estado a lo largo de esos veinticinco años. Durante los gobiernos conservadores de los años treinta y principios de la década de 1949, así como durante la presidencia de Perón entre 1946 y 1955, no tuvieron una participación significativa en el manejo de los asuntos públicos, más allá de su presencia al frente de algunas empresas del Estado.

Tampoco se propusieron institucionalizar régimenes no democráticos controlados permanentemente por las fuerzas armadas.

A partir de 1955, los militares modificaron gradualmente ese patrón de intervención. Durante una primera etapa, desarrollaron un estilo de intervención tutelar, que resultó en (1) la exclusión del peronismo del proceso electoral y de las instituciones representativas del Estado, y (2) el ejercicio de presiones y de su poder de veto sobre las medidas e iniciativas políticas del gobierno constitucional instalado en 1958, con el propósito de imponer sus propias preferencias en los asuntos públicos. Por lo tanto, durante el período de intervención tutelar,

los militares coartaron las prácticas y principios democráticos de dos maneras. Denegaron el derecho a elegir los candidatos de su preferencia a una porción significativa de la ciudadanía, y recurrieron repetidamente a la amenaza de deponer las autoridades constitucionales si las mismas no satisfacían sus demandas. Por supuesto, todo esto se hizo en nombre de la democracia. El peronismo y, luego de 1959, el comunismo fueron equiparados con la "antidemocracia". En consecuencia, las acciones emprendidas contra los peronistas, los comunistas y contra los políticos y funcionarios públicos que supuestamente los respaldaban o simplemente los toleraban, fueron justificadas con el argumento de que tales acciones estaban destinadas a proteger a la democracia de sus enemigos.

A principios de la década de 1960, importantes sectores de las fuerzas armadas comenzaron a darse cuenta que los beneficios obtenidos mediante la intervención tutelar eran inferiores a los costos ocasionados por ésta. La invocación militar a un respaldo de las organizaciones políticas "democráticas", había forzado a las fuerzas armadas a restringirse a las alternativas políticas que ofrecían los partidos así calificados. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas concluyeron que eran percibidas por la opinión pública como responsables de la distorsión de las prácticas democráticas, sin siquiera obtener el beneficio compensatorio de que sus objetivos se cumplieran. Además, el alto grado de compromiso de los militares con el manejo de los asuntos públicos, implicó que debieran asumir con frecuencia posiciones específicas con respecto a asuntos de política económica, represión política, legislación laboral y cuestiones semejantes, lo cual, como fue de esperar, contribuyó a generar una profunda fragmentación interna. En ciertas ocasiones tal fragmentación tuvo como origen el apoyo dado por algunos oficiales a la posición de determinados partidos políticos. Más a menudo, el disenso interno y la fragmentación, surgieron cuando distintos sectores de las fuerzas armadas no estuvieron de acuerdo en relación a cuestiones tales como el alcance y la naturaleza de las presiones que se ejercerían sobre las autoridades constitucionales, o las políticas que se aplicarían con respecto a los sindicatos y el partido peronista. La fragmentación militar alcanzó su punto más crítico entre los años 1959

y 1963, a raíz de confrontaciones entre facciones opuestas que, en dos ocasiones, culminaron en enfrentamientos armados. La victoria de una de estas facciones militares en 1963 —los “azules”, y la emergencia del general Onganía como indiscutido hombre fuerte del ejército—, abrió el camino a una profunda revaluación de la estrategia política de los militares.¹⁴ En consecuencia, las prácticas de intervención tutelar, que habían prevalecido desde 1955, fueron rápidamente abandonadas, en la medida que se las percibió como responsables de la pérdida de prestigio y unidad de las fuerzas armadas. A partir de 1963, con el advenimiento de los Radicales del Pueblo al poder, los militares suspendieron en buena medida su intromisión en los asuntos de gobierno. Sin embargo, tal como los eventos pronto lo demostrarían, ese cambio no significó que las fuerzas armadas repentinamente hubieran aceptado que debían autoconfinarse al cumplimiento de sus tareas específicas, con estricta subordinación a las autoridades constitucionales. Por el contrario, el interregno “profesionalista” de 1963–1966 —y la paralela reunificación del ejército, y del conjunto de las fuerzas armadas, alrededor de Onganía— precedió e hizo posible la articulación definitiva de la doctrina de la “seguridad nacional”. Uno de los principales corolarios de la doctrina emergente fue que las fuerzas armadas deberían asumir la responsabilidad única en el manejo de los asuntos públicos, con la consiguiente exclusión de los partidos políticos y la abolición de los comicios y los mecanismos parlamentarios.

En algún momento, hacia la mitad de los años sesenta, Onganía y sus asociados llegaron a la conclusión que el experimento semidemocrático iniciado en 1955 debía darse por concluído. La combinación que había prevalecido después del derrocamiento de Perón, es decir, un juego parlamentario permanentemente desbordado, pero no enteramente suplantado por las negociaciones y los enfrentamientos extra-institucionales, tenía, desde el punto de vista de los militares, dos inconvenientes. En primer lugar, como ha sido señalado, creó condiciones que incentivaban la fragmentación militar. En segundo lugar, los militares interpretaron que esa situación inducía a los políticos a no trascender las demandas sectoriales de corto plazo de los diversos sectores sociales, haciendo de este modo imposible el crecimiento

económico sostenido. A su vez, se sostuvo, la fragmentación militar y la proliferación irrestricta de conflictos sociales, proveían un terreno fértil para la subversión.

El diagnóstico formulado por las facciones militares predominantes en 1966, tuvo profundas resonancias en el conjunto de la sociedad argentina; los grupos liberales, en particular, recibieron con beneplácito la posición antipartidista adoptada por las fuerzas armadas, ya que tales grupos habían llegado a la conclusión de que, en el juego planteado por la política parlamentaria, les tocaba invariablemente elegir entre alternativas igualmente insatisfactorias. Por lo tanto, el golpe militar y la posibilidad de fundar un régimen no-democrático, permanente y estable, apareció ante los liberales como una opción tentadora. La misma no sólo parecía resolver el problema planteado por su endémica carencia de votos, sino también —ellos esperaban— les proveería los medios para dar un golpe final, decisivo, a los sindicatos peronistas que tan exitosamente se habían constituido en uno de los actores políticos centrales del período 1955–1966.

Lo que resultó en parte paradójico, sin embargo, en 1966, fue que las consignas de los militares liderados por Onganía fueron acogidas con beneplácito no sólo por los liberales, sino también por el actor a quien, precisamente, los liberales querían liquidar: el sindicalismo peronista y a la corriente hegemónica dentro de él, o sea el vandorismo.¹⁵ El hecho que tanto los liberales como los sindicalistas aparecieran apoyando el golpe militar de 1966 reflejó dos cosas: la ambigüedad inicial de las propuestas de Onganía en materia de política económica y el atractivo que tuvo para el vandorismo la posibilidad del establecimiento de un régimen político autoritario. Esta última circunstancia fue una consecuencia de la afinidad de los sindicalistas peronistas con las invocaciones al orden, la unidad, verticalismo, el anticomunismo y la tutela estatal ocuparon un lugar preponderante en la ideología esbozada inicialmente por Onganía y la corriente paternalista organicista de las fuerzas armadas.¹⁶ Si bien las acciones obreras durante la segunda mitad de la década del cincuenta —cuando los peronistas habían restablecido su redefinido predominio dentro de la clase— habían resultado en transgresiones muy serias a aquellas invocaciones, los dirigentes sindicales redescubrieron rápidamente ingredientes de la ideología peronis-

ta que resultaban consonantes con los esquemas de militares como Onganía. Dicha consonancia se expresó tanto en las visiones de organización social que inspiraron las estrategias del vandorismo como en las modalidades de estructuración del movimiento sindical que procuraron implementar. Uno de los principales dirigentes peronistas del período 1957-1966 sugería estas coincidencias de manera muy gráfica:

...el movimiento sindical en los países en vías de desarrollo debe ser verticalista como los cuerpos estructurados —la Iglesia, el Ejército, la familia—, pues es la única manera de aunar criterios con el fin de presionar efectivamente y evitar el desorden, que tanto puede ser provocado por el afán desmedido de lucro de parte de los empresarios como por las demandas incontroladas de los obreros. Además, en la Argentina, un movimiento verticalista recupera la tradición caudillesca. El sindicalismo, asimismo, debe actuar al calor oficial. El Estado debe ser el padre protector así como lo es de la industria, el comercio y el agro.¹⁷

Un acuerdo político con los militares golpistas se convirtió en una tentación cada vez mayor para dirigentes sindicales vinculados a un movimiento político cuya proscripción electoral renovada por los gobiernos semi-democráticos previos a 1966, se estaba transformando en un dato estable de la política argentina. La “intervención de los trabajadores en la orientación del futuro económico del país” que los sindicalistas peronistas venían demandando desde 1957 parecía poder llegar a materializarse sólo si se privilegiaban vías de participación alternativas al semibloqueado carril partidario electoral. La presencia de militares que, por una parte, condenaban el juego partidario *in toto*, y no simplemente al peronismo, y, por la otra, parecían responder a consignas de tono nacionalista, estatista y anti-gran capital fue, entonces, vista por los sindicalistas peronistas como el posible agente catalizador de un régimen político no parlamentario que sirviese para cimentar la alianza entre fuerzas armadas y sindicatos que, supuestamente, se había frustrado en 1955.

II

EL PREDOMINIO MILITAR Y LA PROFUNDIZACION DEL AUTORITARISMO

Como señalé en la introducción, las fórmulas políticas ensayadas a partir de 1966 tuvieron un carácter marcadamente más totalizador que las visiones y concepciones que subyacieron a los gobiernos militares y constitucionales del período 1955-1966. Durante la década posterior al derrocamiento de Perón, cada quiebra institucional no alteró, sino que, por el contrario, contribuyó a conformar una manera común de hacer política, al definir una fórmula que se basó en su propia crisis permanente dentro de los límites puestos por las pretensiones relativamente modestas de los actores predominantes: los políticos y los militares. Los primeros, que quisieron consolidar una democracia, pero la negaron permanentemente al no atreverse, o no poder, incorporar plenamente al peronismo, y los segundos, que pretendieron reservarse poderes de veto y de tutela, pero sin proponerse instaurar un régimen autoritario estable dominado por las fuerzas armadas.

A partir de 1966 subsistió el patrón de alternancia entre gobiernos militares y civiles; sin embargo, como ya se apuntó, la similitud con la década previa fue, en ese sentido, solamente superficial. En realidad, a pesar del

naufragio de los proyectos de 1966, 1973 y 1976, cada cambio de gobierno estuvo asociado a una ruptura con respecto a las modalidades previas de hacer política e introdujo novedades significativas. En otras palabras, el retorno a una situación de equilibrio relativo no ocurrió sin que el despliegue y el agotamiento de las respectivas fórmulas políticas produjeran efectos deseados e impactos imprevistos y desataran procesos que, en cada caso, contribuyeron a redefiniciones sustantivas de la escena política y social; ejemplos de estos procesos fueron las movilizaciones sociales del período 1969-1973, la militarización de la política y el estilo de represión estatal ilegal y masiva inaugurado en 1974 y acentuado en 1976 y la profunda crisis económica desatada a partir de 1981.

Desde 1966, entonces, no ha habido una manera común de hacer política como ocurrió en el período previo. A pesar de que, por supuesto, existieron continuidades desde ese año hasta aquí, cada corte institucional redefinió cualitativamente el material político a disposición de los actores fundamentales de la sociedad argentina. Esta circunstancia torna conveniente un ordenamiento diferente al de la sección anterior: cada período gubernamental será analizado por separado, y al final, a título de conclusión, se subrayarán algunas de las características centrales de la política argentina en el presente a fin de sugerir cuales son las posibilidades, y los límites, con que se enfrentarán en el futuro los actores de la misma.

El golpe de 1966: la suplantación de la política por la administración

El transcurrir de los años del gobierno Radical del Pueblo inaugurado en 1963 sirvió para reforzar las tendencias que habían sido preanunciadas por los episodios que rodearon la caída de Frondizi en 1962: la cada vez más decidida inclinación de la gran burguesía y de los sectores liberales a apoyar la instalación de un régimen no democrático; la escasa predisposición de los sindicalistas peronistas a contribuir a legitimar y estabilizar gobiernos semi-democráticos que continuaban proscribiendo a su movimiento y el progresivo "deslizamiento" autoritario de las fuerzas armadas.

En junio de 1966, la culminación de la tarea de "profesionalización" de las fuerzas armadas encarada por el líder triunfante de los enfrentamientos militares de 1962-1963, el general Onganía, coronó la coincidencia implícita de liberales y sindicalistas en apoyo al golpe militar que derribó a Arturo Illia. O'Donnell (1982; pág. 85) señala acertadamente que Onganía indujo la materialización del "factor ausente" entre 1956 y 1963 —la unidad militar— al conducir la
...reacción "profesionalista" (que apuntaba) a lograr cohesión interna, aumentar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y capacitarlas para la comprensión de problemas sociales desde la óptica de las doctrinas de seguridad nacional que comenzaban a prevalecer en el continente. Este intento se conectaba con el diagnóstico de que el fraccionamiento interno se debía a la constante intervención en la política nacional en alianza con, y en función de las metas de, partidos políticos y grupos civiles.

Los objetivos que se propuso la "Revolución Argentina" fueron congruentes con el aludido diagnóstico: por un lado, suspender sine die las actividades de los partidos políticos y de las instituciones parlamentarias, por el otro, consagrarse expresamente la desvinculación de las fuerzas armadas del gobierno disponiéndose que éstas "...no gobernarán ni cogobernarán".¹⁸ Todo esto no hizo sino reconocer, e intentar implementar, los corolarios del consenso que rodeó al golpe: la erradicación de la "partidocracia" y la presunción, y la esperanza, de que el líder de la exitosa operación de unificación de las fuerzas armadas se transformaría en una especie de monarca autocrático ocupando la cúspide de un régimen en el que el único que haría política sería el gobierno.¹⁹ En otras palabras, producida la unidad (militar y social) y superado el conflicto, la política dejaría el lugar a la administración con el resultante predominio de técnicos situados por encima de los intereses sectoriales y capaces de proponer e implementar las soluciones óptimas. La fórmula institucional de la "Revolución Argentina" se vio coloreada, asimismo, por una retórica corporativística que puso el énfasis en la gradual articulación de "consejos de la comunidad" encargados de canalizar las actividades de las organizaciones sociales y de servir como

mecanismos consultivos y asesores de las autoridades.

La centralidad que ocupó en la propuesta de Onganía la temática de la renovación (y simplificación) de la política argentina no fue casual. Respondió a la convicción de que el problema de la Argentina era un problema fundamentalmente político, y que de lo que se trataba era de barrer con la complicada, ineficiente, y eventualmente peligrosa, intermediación de los circuitos partidarios, parlamentarios y corporativos para que se desplegaran plenamente las potencialidades de crecimiento económico. En el plano de la economía la fórmula del gobierno de Onganía no resultó demasiado novedosa. Consistió principalmente en reeditar, con algunas modificaciones, y presumiblemente liberadas de los límites impuestos por las modalidades políticas prevalecientes hasta 1966, las recetas desarrollistas ensayadas entre 1959 y 1962. Los objetivos del desarrollismo habían sido los de reinsuflar dinamismo a la economía sobre la base de completar la integración vertical del sector industrial y el desarrollo y modernización de la infraestructura y, paralelamente restaurar el predominio de las unidades oligopólicas y más transnacionalizadas dentro de dichos sectores.²⁰

La política argentina pareció por un par de años transitar por los carriles prescriptos por Onganía y sus asociados. Aparte de los éxitos económicos alcanzados hasta la primera mitad de 1969 —una normalización sin costos sociales demasiados elevados, aumento de la inversión, descenso de la tasa de inflación, mejoría en la situación de la balanza de pagos— el gobierno se anotó una serie de importantes triunfos políticos: los partidos cayeron en un pozo de irrelevancia e inactividad, los sindicatos fueron forzados a aceptar sucesivamente la abolición, en la práctica, del derecho de huelga —a raíz de la sanción de la ley de arbitraje obligatorio de agosto de 1966— y la intervención gubernamental de los gremios industriales más importantes como resultado del rotundo fracaso del “Plan de Acción” de comienzos de 1967, y Perón fue convirtiéndose en una especie de muerto político aparentemente despojado de todas las armas que había utilizado tan eficazmente entre 1955 y 1966 para desestabilizar a gobiernos civiles y militares. Paralelamente, se generó por un lapso la impresión de que se estaba conformando un eficiente y armonioso

sistema de decisiones en el que los protagonistas principales, y casi exclusivos, eran aquellos que ocupaban los despachos gerenciales de las grandes empresas y los cargos jerárquicos de las instituciones estatales encargadas de diseñar e implementar la política económica.

Sin embargo, durante los dos años y medio transcurridos entre fines de 1966 y mediados de 1969 hubo dos espacios, sobre todo, en los cuales fueron dándose fenómenos novedosos cuyas repercusiones sobre la policía nacional solo se manifestarían a partir de mayo de 1969. El primero fue la creciente gravitación que fue adquiriendo el mayor perfilamiento de las corrientes internas dentro de las fuerzas armadas –paternalistas, nacionalistas y liberales– cuyas respectivas características e interrelaciones analiza magistralmente O'Donnell en su ya citada obra.²¹ Las causas subyacentes de las divergencias entre las corrientes no fueron nuevas; ellas, a menudo, giraron en torno a temas tales como la política a seguir con respecto al movimiento sindical, los objetivos de transformación económica a largo plazo, el modelo político a instaurar después de completadas las etapas de ordenamiento y depuración. Lo que sí cambió radicalmente a partir de 1966 fue que las disensiones internas de las fuerzas armadas se dieron dentro de un ordenamiento institucional en el que quedaba presuntamente excluida la permanente gimnasia conspirativa que los militares habían desarrollado entre 1955 y 1966 tanto frente a regímenes constitucionales como dentro de gobiernos de facto temporarios. A esto se agregó, como veíamos, que a las fuerzas armadas se les vedó expresamente la participación directa en tareas gubernativas; el efecto combinado de una y otra circunstancia fue que las tensiones y conflictos internos de los militares y los contactos con personajes externos claves perdieron legitimidad y pasaron a tener lugar cada vez más subterráneamente. La consecuencia previsible fue que el caudillo militar de los tres años previos fue quedando progresivamente aislado de sus camaradas de armas. Además, la rígida personalidad de Onganía contribuyó también a que se fueran evaporando las posibilidades de que éste respondiera a sugerencias o presiones de dichos camaradas a través de ajustes parciales o negociaciones. Como el “Estatuto de.. la Revolución Argentina” no había fijado plazos a la gestión del presidente ni había

previsto transiciones, el gobierno de Onganía no tuvo "fusibles", con lo que el riesgo de que ante una situación de crisis el juego adquiriera rápidamente un carácter de todo o nada era enorme.

El segundo espacio en el que se produjeron modificaciones significativas fue el de una serie de ámbitos de la sociedad civil que, hasta 1966, habían sido dominados, en buena medida, por la lógica de negociaciones y presiones extra-institucionales, pero controladas, descripta en la sección anterior. En ese sentido resulta conveniente precisar el significado del control al que se alude. Entre 1955 y 1966 algunas organizaciones fundamentales de la sociedad civil, como los sindicatos y las asociaciones empresariales, desbordaron permanentemente los canales institucionales gubernamentales; sin embargo, siempre lo hicieron procurando evitar el ser ellas mismas desbordadas por la movilización de sus propios miembros. Como este propósito fue generalmente alcanzado, las movilizaciones y las acciones colectivas de obreros y empresarios se subordinaron, casi sin excepciones, a una lógica de negociación de cúpulas que jerarquizó, particularmente en el caso de los sindicatos, la supervivencia de las respectivas organizaciones corporativas y la estabilidad de sus dirigentes. Dentro de este esquema, los dirigentes tendieron a utilizar las movilización como arma para el chantaje frente a otros actores y el Estado, valorizando no solo su capacidad de generar dichas movilizaciones, sino también la de encauzarlas, e incluso refrenarlas.

Las medidas antisindicales tomadas a partir de fines de 1966 no liquidaron a los gremios ni a sus dirigentes —tampoco era esa su intención— sino que los forzaron a aceptar dócilmente las políticas gubernamentales. El éxito de la estrategia oficial de intransigencia se sumó a otras causas que venían minando el poder y el grado de control de la dirigencia sobre las bases obreras desde antes del golpe de junio de 1966. Entre éstas pesaron preponderantemente la política de las grandes empresas en sectores de punta —como el automotor y el de los tejidos sintéticos— de promover la creación de sindicatos por empresa en desmedro de las uniones y federaciones que celebraran acuerdos salariales de alcance nacional, y la estrategia del gobierno Radical del Pueblo de favorecer el pluralismo sindical buscando, a través de una serie de

mecanismos, el debilitamiento de los sindicalistas peronistas.²² En 1968 comenzó a insinuarse un proceso, que se profundizó a partir de 1969, por el cual se resquebrajaron las complejas ligazones que, desde principios de la década, habían mantenido articulado un sindicalismo relativamente unificado con eje en el poderoso dirigente del gremio metalúrgico, Augusto Vandor.²³ Entre 1959 y 1966 el poder del vandorismo había resultado de su capacidad de subordinar a una lógica común a los restantes nucleamientos sindicales peronistas y no peronistas, a pesar de que éstos habían perseguido, a menudo, objetivos diferentes a los de Vandor. Durante 1968-1969 el vandorismo comenzó a perder buena parte de esa capacidad al ser flanqueado por la derecha y desbordado por la izquierda. Los "blandos", que inspirándose en la jerga oficial fueron rebautizados como "participacionistas", se fortalecieron significativamente en la medida que, favorecidos por el patrocinio estatal mantuvieron plenamente el control de la maquinaria y los recursos de los gremios en que predominaban. Asimismo, la ruptura por parte del gobierno del diálogo con los vandoristas privó casi totalmente a éstos de una de las dos patas en las que se apoyaba su estrategia, es decir la negociación con el Estado. Esto último desvalorizó el argumento vandorista de que una postura menos intrascendente (que la de los "duros" o "combativos") producía mejores resultados. Y fue, precisamente, la desvalorización de la estrategia vandorista lo que permitió que en marzo de 1968, en un congreso normalizador de la CGT convocado sin el reconocimiento gubernamental, una heterogénea combinación que incluía a peronistas duros —en muchos casos influidos por una ideología de "izquierda cristiana"—, "independientes" progresistas y a marxistas ajenos a la ortodoxia del partido comunista, se impusiera al vandorismo y designara a Raimundo Ongaro, un obrero gráfico, secretario general de la CGT. Inmediatamente Vandor desconoció los resultados y convocó a un nuevo congreso que nombró otra mesa directiva, con lo que, en la práctica, pasó a haber dos CGT. En parte debido a la represión oficial y en parte como resultado de sus tácticas erráticas, la CGT de los Argentinos —tal fue el nombre que adoptó la entidad dirigida por Ongaro— fue perdiendo rápidamente la adhesión de la mayoría de los sindicatos que originaria-

mente la habían integrado. Sin embargo, su discurso de oposición frontal al régimen de Onganía y de condena a las tácticas de los “blandos” y los vandoristas fue acentuando los contenidos anticapitalistas y mantuvo vigencia, a menudo, a nivel de planta y de algunas regionales del interior del país. El discurso de la CGT de los Argentinos, en definitiva, se constituyó en un material ideológico y “práctico” disponible para ser apropiado por otros protagonistas en acciones colectivas más masivas.

Las insurrecciones populares de 1969, que tuvieron su episodio más significativo en el Cordobazo, fusionaron a obreros, empleados, estudiantes y pobres urbanos, y, como acota O’Donnell,²⁴ *...expresaron, y en parte fueron, el disparador de las tensiones que se habían ido acumulando desde la implantación del (gobierno militar).*

El intento de Onganía de eliminar las trincheras del juego político, clausurando los múltiples mecanismos institucionales y extra-institucionales a través de los cuales el compromiso había predominado en la sociedad y en la política argentinas y pretendiendo canalizar y “ordenar” los diversos intereses y orientaciones sociales desde un estado supuestamente omnisciente y jerárquico, terminó por producir lo que, de alguna manera, había venido a erradicar como posibilidad en la Argentina. A la inesperada y espontánea explosión popular, que expresó, entre otras cosas, el aislamiento e ignorancia del gobierno frente a la sociedad, se sumó la renuncia de las fuerzas armadas a desencadenar una represión más sistemática y severa que la aplicada hasta entonces, como lo requería un Onganía que había perdido noción, asimismo, de lo que estaba ocurriendo, bajo la superficie, dentro de las instituciones militares.

La imagen de un Estado aislado, cuyo discurso autoritario de pronto perdió resonancia en la sociedad y se quedó sin soportes activos, sectoriales e institucionales, no solo socavó irremediablemente la legitimidad del gobierno de Onganía, sino que además impregnó a la misma sociedad atenuando la opacidad con que normalmente están recubiertos los fundamentos autoritarios de sus instituciones y de sus prácticas. A partir de 1969 se superpusieron, entonces, dos crisis: por un lado, la del

régimen militar autoritario, crisis cuyo despliegue pasó a ser gobernado por el entrecruzamiento de los conflictos internos de las fuerzas armadas y las interrelaciones entre un gobierno cada vez más acorralado y un frente de oposiciones políticas que fue progresivamente convergiendo en torno a la persona de Perón; por el otro, la crisis de la dominación social, que se expresó a través de la incertidumbre acerca de

*... la continuidad de prácticas y actitudes antes desconocidas como "naturales" de clases y sectores subordinados. Esto puede aparecer en la caducidad de ciertas pautas de deferencia hacia el "superior" social, en diversas formas expresivas "inusuales", en cuestionamientos de la autoridad habitual en ámbitos como la familia y la escuela y como una impugnación del mando en el lugar de trabajo.*²⁵ (Enfasis de M.C.)

Es en ese sentido que se puede afirmar que en 1969 se abrió un período inédito en la historia argentina, en el que resultó profundamente cuestionada y corroída la autoridad de muchos de aquellos "que dirigían" las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en los casos de quienes aparecían más directamente "garantizados" por el Estado. Dentro de esta categoría quedaron incluidos los dirigentes sindicales más propensos a la negociación y más dependientes de la tutela estatal, los profesores y autoridades de universidades y escuelas que se habían respaldado en, y habían sido promovidos por las orientaciones tradicionalistas y jerárquicas del gobierno de Onganía, la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y los gerentes y empresarios que, debido a las limitaciones impuestas a la acción de los jefes sindicales, las comisiones de fábrica y los delegados obreros, se habían sentido con mayor respaldo para reorganizar procesos de trabajo, "racionalizar" la producción y restaurar la disciplina laboral.

Desde el Cordobazo hasta la defenestración del efímero sucesor de Onganía, el general Levingston, la agudización de la crisis del régimen militar jugó de modo de acentuar la seriedad de las amenazas a las bases mismas de la denominación social. El empecinamiento de Onganía en procurar el imposible salvataje de su esquema, primero, y el intento de Levingston de "profundizar" la "Revolución Argentina" dándole un carácter más nacio-

nalista y movilizacional, después, no solo terminaron por alienarles definitivamente el apoyo del grueso de sus camaradas, sino que, además, sirvieron para acentuar la crisis social al superponer, y a veces fusionar, las contestaciones anti-autoritarias con las primeras manifestaciones de otros tres tipos de cuestionamientos: (1) aquellos centrados en las políticas económicas "liberales" y que comenzaron a exigir cada vez más audazmente la satisfacción de las reivindicaciones de los sectores más postergados a partir de 1967, como los empleados públicos y privados de niveles de calificación más bajos, los pequeños y medianos empresarios (afectados por medidas tales como la liberación de los alquileres urbanos y las restricciones impuestas a las cooperativas de crédito), los trabajadores de industrias y servicios más tradicionales especialmente perjudicados por el programa modernizante del gobierno militar, y la población de aquellas regiones, como Tucumán, que resultaron afectadas por programas de racionamiento económica; (2) aquellos que, en un primer momento, reclamaron la liberalización política del régimen militar, para pasar luego a exigir una plena democratización con la celebración de elecciones sin proscripciones ni condicionamientos, y (3) aquellos que, sobre todo desde el ámbito de la incipiente guerrilla peronista, plantearon el objetivo de promover la insurrección popular armada para instaurar un orden social y político alternativo de carácter no parlamentario y "socialista nacional".

La agudización de la crisis tuvo como efecto que se desarticulara lo que podría denominarse, y perdónese el término, la habitualidad política construida desde 1966. Sacudidos el miedo y la pasividad política que por tres años había exitosamente impuesto la dictadura, los mecanismos políticos propuestos por ésta perdieron sentido de modo vertiginoso y dejaron de ser el referente orientador de las acciones de sus anteriores partidarios y de sus opositores. Al mismo tiempo, sin embargo, los proyectos de Onganía y Levingston de entrar en el "tiempo social" y de promover la creación de un "movimiento nacional" que seguiría postergando a los partidos y se basaría en un reacercamiento con los sindicatos, respectivamente, continuaron ocupando el centro de la escena política. ¿Cuál fue la consecuencia de la obstinación y ceguera de ambos presidentes?

Durante un lapso quedó bloqueada la posibilidad de emergencia de un proyecto alternativo del gobierno de rearticulación de las orientaciones y acciones de las distintas fuerzas que operaban en la sociedad argentina. Esta "demora" fue tornándose cada vez más peligrosa: al progresivo espanto que despertaron en la gran burguesía propuestas que se alejaban del esquema normalizador de Krieger Vasena, se fue sumando el aludido agudizamiento de la crisis social con la difusión de consignas más radicales; éstas alcanzaron su pico en el segundo Cordobazo a principios de 1971 que tuvo contenidos más clasistas e insurreccionales que el primero. En realidad, la propuesta alternativa del gobierno militar no podía ser otra que la de un repliegue que admitiera las derrotas sufridas y reconociera que el reequilibrio social debía transitar por una apertura política que incorporase temas y demandas de las fuerzas opositoras. En un primer momento, y coincidiendo con el postre año del régimen de Onganía, lo que estuvo en danza fue una suerte de liberalización en torno a la figura del ex presidente Aramburu, cuyo secuestro y asesinato por la guerrilla peronista en mayo de 1970 precipitó la caída de Onganía. Con la desaparición de Aramburu y la "pérdida de tiempo" ocasionada por la "profundización" ensayada por Levingston, la única opción restante fue la de una promesa de democratización, en la que los militares, reflotando el argumento de que en realidad ellos se habían propuesto restablecer la "verdadera democracia", consintieran en traspasar el poder a un gobierno surgido de elecciones.

La operación implementada por el tercer presidente militar, el general Lanusse, partió precisamente de reconocer el limitado margen de iniciativa del gobierno, desplazando el eje de la política del plano de la crisis social al de la dilucidación de las características específicas del régimen que reemplazaría a la dictadura militar. A pesar de que Lanusse y los militares sufrirían una serie de derrotas en las pujas por la determinación de la naturaleza del régimen de reemplazo, esto no debe ocultarnos, sin embargo, que durante esos meses cruciales, se reentretejió, de alguna manera, el tramado de la política con la recomposición de una cierta habitualidad que sirvió para cerrar, al menos parcialmente, la brecha de imprevisibilidad e indeterminación (acerca de la direc-

ción y los resultados de la crisis) abierta a partir de mayo de 1969. Este proceso tuvo como principal virtud —desde el punto de vista del reequilibrio de la dominación social— la de rearticular la crisis social (y los cuestionamientos a la autoridad en ámbitos e instituciones de la sociedad civil) a las pujas y conflictos en torno a la cuestión del régimen político.

La reorientación y rearticulación de la crisis no resultó ajena a la operación gubernamental inaugurada por Lanusse. La asunción de la presidencia por Lanusse permitió al gobierno recuperar, en parte, la capacidad de determinar cuáles serían los campos en los que se librarían las batallas políticas de la sociedad argentina; ello no significó, claro está, que el gobierno y los militares fueran a ganar dichas batallas.²⁶ De todas maneras, el limitado “éxito” gubernamental tuvo sus costos. El poco ceremonioso reemplazo del segundo presidente de la “Revolución Argentina”, a menos de un año de la también abrupta salida de Onganía, solo pudo ser justificado en la medida que Lanusse se comprometió a presidir la liquidación del régimen militar. El hecho de que las fuerzas armadas debieran limitar su objetivo a tratar de imponer las condiciones de su retirada de la cúpula del Estado le restó eficacia y credibilidad a sus políticas. Si bien eso no significó que los recursos, los valores y la capacidad represiva del Estado dejaran de ser datos de importancia, el horizonte obviamente limitado del gobierno militar pasó a influir decisivamente sobre los cálculos de todos los actores políticos. En suma, el gobierno recuperó parcialmente la capacidad de fijar los parámetros de la acción política a costa de renunciar a cualquier cuota de iniciativa que hubiera podido mantener cediéndola irreversiblemente, por ende, a oposiciones que no controlaba.

A partir de marzo de 1971 las oposiciones capturaron decisivamente la iniciativa política. Los años de Lanusse resultaron bastante diferentes a los dos años anteriores. No tanto porque las turbulencias políticas disminuyeran —en realidad, éstas se incrementaron debido a la continuidad de los conflictos sociales y la creciente espectacularidad de las acciones guerrilleras y de la represión— sino, más bien, porque la política fue adquiriendo un carácter más pautado. Es decir, se pasó de una situación en la cual el gobierno fue desbordado (al pretender empecina-

da y autoritariamente imponer proyectos que no despeataban apoyos sociales significativos) y las acciones sociales quedaron sin cauces definidos, a otra en la que dichas acciones se fueron “organizando” en torno a nudos generados a partir de las iniciativas de actores políticos más o menos constituidos. En el caso de los actores que poblaban el campo de la oposición —es decir, Perón, los partidos no peronistas, los dirigentes sindicales y empresariales, y la juventud radicalizada confluyente con la guerrilla— éstos se propusieron objetivos muy disímiles; sin embargo, todos compartieron una orientación común: el percibir la crisis social abierta en 1969 como el terreno apto, o como un instrumento, para alcanzar, de diferentes maneras, los objetivos propios. Así fue que Perón maniobró utilizando la crisis en función de su aspiración de convertirse en el eje obligado de cualquier definición política que resultara, los partidos trataron de realizar su calidad de mecanismos útiles para la contención de la crisis, los dirigentes sindicales y empresariales reaccionaron de manera de defender sus privilegios corporativos y de aumentar su capacidad de maniobra en el futuro gobierno constitucional y la guerrilla, preanunciando la visión instrumental que profundizaría más adelante, reinterpretó los cuestionamientos celulares a la autoridad de aquellos que dirigían, como la manifestación de un reclamo colectivo de constitución de un liderazgo político autoritario que condujera a la Argentina hacia la meta del “socialismo nacional”.

Las tácticas gubernamentales y, sobre todo, las coincidentes orientaciones de las oposiciones políticas y corporativas en el sentido de encauzar la crisis social para favorecer los objetivos propios contribuyeron decisivamente a que ésta fuera reabsorbida en una proporción significativa. ¿Qué quiere decir que fue reabsorbida? El aclarar esta idea requiere una breve digresión conceptual. La “normalidad” consiste en que una cuota significativa del sentido de las interacciones sociales para los individuos y grupos que las protagonizan —sean estos patrones y trabajadores, padres e hijos, profesores y alumnos, dirigentes y miembros de un sindicato, hombres y mujeres— por un lado viene definido por agentes y referentes “externos” como los aparatos del estado y las élites políticas, sociales, culturales y religiosas y, por el otro, aparece como la materialización de normas que

trascienden a esos grupos e individuos, como por ejemplo las costumbres y las tradiciones. Uno de los elementos que define a una crisis de dominación es que el poder y la repercusión de los agentes y referentes externos y de las normas sociales se debilita, con lo que la posibilidad de una redefinición "desde adentro" del sentido de las interacciones sociales aumenta correspondientemente. La reabsorción de la crisis consiste precisamente en el cierre o angostamiento de la brecha por la cual se filtran esas dosis de sentido autogenerado, y la consiguiente recaptura, por parte de los referentes externos, de su capacidad de determinar el sentido de las interacciones sociales.

En ese sentido, entonces, se puede afirmar que en la Argentina de 1971 a 1973 las prácticas de los agentes políticos, y particularmente de aquellos que componían el campo de la oposición política, contribuyeron a reabsorber o conjurar la crisis social. Todos esos agentes, incluso aquellos que se definían como los instrumentos del "cambio de estructuras", se situaron frente a las acciones sociales de carácter contestatario tratando de enhebrarlas a sus lógicas (las de los agentes), es decir, a lógicas orientadas casi exclusivamente a la conquista del poder político. Durante esos años, esas lógicas se enfrentaron en dos planos diferentes: por una parte, se dieron luchas entre el gobierno militar y las oposiciones que, en una proporción abrumadora, concluyeron en triunfos para estas últimas; por la otra, se fueron perfilando propuestas alternativas en el campo de la oposición que, por lo general, no trascendieron el terreno de las consignas y las confrontaciones ideológicas. En general, los análisis del período se han concentrado casi exclusivamente en esos dos planos de la lucha política apuntando, correctamente, que ellas se dieron en el contexto de una inusitada apertura política y de un clima de agitada discusión ideológica. Asimismo, se han destacado las consecuencias de dichas luchas sobre los acontecimientos posteriores a mayo de 1973 señalando, por un lado, que la derrota total de los militares determinó su repliegue hostil durante los primeros tiempos del gobierno peronista y, por el otro, que las propuestas alternativas del período prefiguraron los salvajes enfrentamientos que se desencadenaron dentro del frente triunfante en 1973, y en particular dentro del peronismo, cuando desapareció

el sustrato unificador proporcionado por el objetivo común de desplazamiento del gobierno militar.²⁷

En todo caso, aquí no se pretende analizar la naturaleza de esas luchas; el propósito de los comentarios previos es, más bien, el de subrayar que la naturaleza de la crisis política entre 1971 y 1973 contribuyó a debilitar la autonomía de las contestaciones celulares de carácter anti-autoritario. Esta circunstancia, que se acentuaría mucho más entre 1973 y 1975, en parte respondió a que los agentes políticos del período no privilegiaron la capacidad de las fuerzas actuantes en la sociedad civil de promover cambios en las relaciones sociales excepto en los casos que previeron que dichos cambios contribuirían a fortalecer sus respectivas posiciones de poder. Estas conductas de los agentes políticos probablemente fueron efecto de su renuencia a aceptar las elevadas dosis de impredecibilidad e incertidumbre acerca de la dirección y los contenidos de los cambios que caracterizan a las situaciones de crisis social. Asimismo, la reabsorción de la crisis resalta la dificultad para que procesos de cambio en las relaciones de dominación puedan trascender los ámbitos específicos de la sociedad civil en los cuales transcurren y logren, por ende, producir efectos perdurables en el conjunto de la sociedad a través de la universalización de sus discursos. Si a un nivel más abstracto, se puede especular que esa circunstancia revela las resistencias que las sociedades modernas oponen a los efectos transformadores de las crisis, en el caso argentino podría estar señalando que las lealtades y las identificaciones políticas tradicionales anudadas en torno al peronismo, y en menor medida al radicalismo, resultan fundamentales en coyunturas críticas como la abierta en 1969. En efecto, la recaptura del centro de la escena política por parte de Perón (y, en alguna medida, también por Balbín, el presidente de la Unión Cívica Radical, a través de su co-protagonismo del agrupamiento de La Hora del Pueblo y de su reconciliación histórica con Perón) no sólo consagró el fracaso de la transición controlada a la que aspiraban Lanusse y los militares. La vigorosa reaparición de los viejos astros de la política argentina y la repercusión alcanzada por sus discursos parcialmente renovados, también expresó la imposibilidad de las prácticas sociales contestatarias de generar un discurso propio pasible de difundirse en el conjunto de la

sociedad. Este posible discurso propio no fue, en todo caso, el de las organizaciones guerrilleras. Estas, en su premura por atribuir a las prácticas sociales sentidos que reflejaran sus programas e interpretaciones, también contribuyeron al proceso a través del cual las élites políticas argentinas enajenaron y reformularon los contenidos de la crisis social y las movilizaciones populares.

A pesar de lo que se apuntaba en el párrafo anterior, sin embargo, en mayo de 1973, cuando el peronismo triunfante accedió al poder, la situación política era, obviamente, muy diferente a la de 1966. La apertura democrática del período lanussista había atenuado los riesgos de la crisis social a costa de reforzar el arrinconamiento político de las fuerzas que habían predominado durante la etapa ascendente de la “Revolución Argentina”. El cómo estas fuerzas revertirían la situación en un par de años y como la apertura democrática se cerraría abriendo el período más trágico de la historia argentina contemporánea, se dilucidaría precisamente en el período constitucional que se inauguraba, en forma aparentemente auspiciosa, en 1973.

Retorno de Perón y fracaso de su proyecto de institucionalización política.

A pesar de todas las diferencias que separaban a Perón del Onganía de 1966, el viejo líder retornó al poder en 1973 compartiendo uno de los puntos esenciales del diagnóstico original de la “Revolución Argentina”, es decir, que el problema de la Argentina era de carácter político. Claro está que a partir de ahí las recetas fueron radicalmente opuestas; mientras que Onganía trató de abolir la política, Perón se propuso encauzarla institucionalmente.²⁸

La fórmula de Perón apuntó a crear un doble arco de articulaciones de los actores sociales y políticos. El primero no fue enteramente novedoso para el peronismo y consistió en el intento de reedición, en una versión mejorada y ampliada, de los acuerdos entre asociaciones gremiales de trabajadores y empresarios que habían comenzado a estructurarse durante el último par de años del anterior gobierno peronista. Como en aquella oca-

sión, se convocó a las entidades gremiales confederales, la CGT y la Confederación General Económica (CGE), a que acordaran los niveles generales de aumentos salariales comprometiéndose a respetarlos durante su vigencia y a someterse al arbitraje final del Estado en caso de eventuales desacuerdos. En varios aspectos la situación era más propicia que la de veinte años atrás. Por una parte, la coyuntura económica resultaba favorable debido a los buenos precios de los exportables en el mercado internacional y al apreciable margen de capacidad ociosa existente en el sector industrial. Por la otra, la CGE de principios de la década del 70 era una organización mucho más extendida y representativa que la versión original creada por el mismo José Gelbard. A su capacidad de aglutinar vastos segmentos del pequeño y mediano empresariado, la CGE había sumado asimismo la presencia de grandes empresas de capital nacional —de las cuales el grupo dirigido por Gelbard era un buen ejemplo— y en las vísperas de la llegada del peronismo al poder, de las cámaras agrupadas en la tradicionalmente antiperonista Unión Industrial Argentina que se autodisolvió y fusionó a la CGE. Si bien esto último, en todo caso, constituyó básicamente un repliegue táctico de los empresarios que habían controlado la central empresarial de signo liberal, también contribuyó a conferirle mayor legitimidad a Gelbard, quien pudo asumir el ministerio de Economía del gobierno peronista contando con el respaldo de prácticamente todo el frente empresarial.

Distinta era la situación, en cambio, en el campo sindical. En él, la conducción vandorista, que seguía al frente de la CGT, había perdido terreno desde 1968 en favor de grupos de oposición y activistas de planta quienes, cubriendo un espectro que iba desde el peronismo combativo hasta posiciones independientes y marxistas revolucionarias, le reprochaban a la vieja camada dirigente sus claudicaciones frente al estado y las patronales. La campaña electoral que culminó con la elección de la fórmula de Cámpora y Solano Lima refirmó la declinación de los sindicalistas y el auge de la izquierda peronista, dentro de la cual los Montoneros había anunciado expresamente que su objetivo era la exterminación física de los dirigentes sindicales. Si bien la suerte de los sindicalistas, y de sus enemigos de dentro y fuera del peronismo, comenzó a revertirse a partir del golpe

palaciego en contra de Cámpora, que los mismos sindicalistas contribuyeron a producir, los primeros meses del gobierno peronista se caracterizaron por un auge de las movilizaciones de trabajadores, que a menudo se orientaron en contra de los gremialistas de cuño vandorista.²⁹

En definitiva, el acuerdo entre sindicalistas y empresarios, el Pacto Social, fue firmado a los pocos días de llegado Cámpora a la presidencia, estableciéndose en él un moderado aumento de salarios y su posterior congelamiento, además de

...la suspensión de los mecanismos de negociación colectiva salarial por un plazo de dos años y su reemplazo por un compromiso del Ejecutivo de implementar las medidas necesarias para mantener el poder adquisitivo del salario... El Pacto Social incluía también medidas en otras áreas de política económica, además de la distribución del ingreso y el control de precios. (Jelin, 1977; pág. 8)

El proyecto de Perón, asimismo, apuntó al establecimiento de un segundo conjunto de articulaciones que resultaba inédito dadas las tradiciones antiparlamentarias del peronismo y el antagonismo que históricamente lo había enfrentado a las otras corrientes partidarias argentinas. El propósito era el de convertir al parlamento en un ámbito real de negociación entre los partidos, revirtiendo así la tendencia del peronismo a conferirle un aura de ilegitimidad tanto a las críticas opositoras como a las aspiraciones de los partidos de oposición de invocar intereses y orientaciones populares.

El rescate del parlamento como ámbito de negociación y la propuesta implícita de crear un sistema de partidos representativo iba en contra del movimentismo del peronismo de la primera época. Este componente autoritario de la ideología y prácticas del peronismo, al que aparentemente Perón había renunciado en vísperas de su retorno al poder, era, sin embargo, reivindicado por importantes sectores del peronismo. Estos sectores sostuvieron posiciones diametralmente opuestas –desde el jacobinismo revolucionario de la guerrilla hasta las distintas variantes del autoritarismo de derecha apoyadas por segmentos del sindicalismo y por los grupos fascizantes congregados en torno del secretario privado de Perón, López Rega; sin embargo, todos ellos coincidie-

ron en sus condenas a la "partidocracia" y a los formalismos de la democracia liberal. Fue por ello que los principales apoyos que encontró Perón a su proyecto de revitalización del parlamento y los partidos estuvieron fuera del peronismo; ellos fueron el radicalismo, con cuyo líder, Balbín, Perón celebró una reconciliación histórica a fines de 1972 y los grupos más importantes de la derecha y la izquierda parlamentarias, la Alianza Popular Federalista y la Alianza Popular Revolucionaria.

Obviamente, la reconciliación entre el peronismo y el radicalismo no fue solamente el resultado del viraje ideológico de Perón; él respondió asimismo al cambio en las actitudes de los radicales, quienes comprendieron que la realización de la democracia en la Argentina pasaba necesariamente por la plena integración del peronismo a la vida política. Esto exigía que los radicales dejaran de lado el apoyo que, tibia o cálidamente, habían prestado a las cláusulas proscriptivas impuestas por los militares desde 1957. En ese sentido, la propuesta de Onganía de abolir la política obró como un catalizador del reencuentro en un terreno común de los polos antagónicos de la política partidaria argentina, que habían sido ejes entre 1955 y 1966 de los dos campos de un sistema político escindido y cuya norma de funcionamiento había sido la reproducción de su propia crisis.

Finalmente, la propuesta de Perón contempló la redefinición del rol de las fuerzas armadas, tratando de quebrar el estilo de acción que había llevado a éstas a intervenir recurrentemente en la política. Para ello procuró, por un lado, preservar una esfera de autonomía corporativa, lo que también introdujo un importante cambio con respecto a las "fuerzas armadas peronistas" que se había pretendido crear entre 1946 y 1955, período durante el cual se apeló a purgas, juramentos de lealtad al régimen y promociones politizadas. Por el otro lado, y como contrapartida complementaria de lo anterior, Perón, aprovechando la inercia generada por la derrota política de los militares, procuró que éstos se subordinaran efectivamente a las autoridades constitucionales del Estado, cuya cúpula pasó a ser ocupada por el viejo líder. A esas alturas resultó paradojalmente propicio, desde el punto de vista de la valorización de la figura de Perón en relación a los militares, que la llegada de aquel a la presidencia hubiera sido precedida por el breve inter-

ludio camporista. Las movilizaciones populares que se multiplicaron a partir del 25 de mayo y la elección y nombramiento de algunos funcionarios que respondían a la izquierda peronista –sobre todo en algunas administraciones provinciales y en las universidades– realizaron la moderación de Perón y el tono y el contenido de los mensajes que éste comenzó a emitir a partir de su nuevo retorno al país del 20 de junio. Dichos mensajes pasaron a enfatizar la necesidad de privilegiar la participación organizada y canalizada a través de los cauces “naturales” por sobre las movilizaciones populares inorgánicas y a refirmar los preceptos tradicionales de la doctrina justicialista en detrimento de las temáticas del socialismo nacional y la guerra revolucionaria impulsadas por la izquierda y a las cuales Perón había prestado eco a menudo durante los últimos años de su exilio.³⁰

El complejo andamiaje político-institucional concebido por Perón fue apoyado por algunos sectores minoritarios del peronismo político y sindical, por la mayoría de los aliados del peronismo en el FREJULI y por la principal oposición partidaria, la Unión Cívica Radical. Sin embargo, el esquema no llegó a implantarse ni siquiera mínimamente y el sucesivo desmoronamiento de sus engranajes, como bien señala De Riz, no sólo enhebró el proceso de licuación del gobierno peronista, sino también el de la desarticulación política del campo popular. Desde el punto de vista político, la consolidación del proyecto de Perón hubiera requerido una considerable disminución del grado de dramatismo de la política argentina. Para ello hubiera sido necesario desacelerar el tiempo político induciendo a los actores a privilegiar la eficacia a largo plazo de la reinstitucionalización de sus acciones en vez del impacto a corto plazo de triunfos espectaculares que se pudieran obtener sobre contendientes coyunturales. Dichos triunfos tuvieron, por supuesto, su contrapartida de derrotas que alienaron a quienes las sufrieron y, sobre todo, corroyeron la precaria legitimidad de las instituciones democráticas y parlamentarias; la resolución de los sucesivos enfrentamientos entre los distintos contendientes internos del peronismo se fue produciendo a costa de hacer estallar “desde adentro” a los mecanismos parlamentarios y corporativos, determinando por ende su vaciamiento

como posibles canales de negociación de los conflictos y para el procesamiento de acuerdos.

Los casi tres años del gobierno peronista presenciaron una constante aceleración del tiempo político que, si bien en un episodio nada trivial, como la muerte de Perón, reconoció una causa natural incontrolable, en la mayor parte de los casos fue resultado de la premura de los actores internos del peronismo por consolidar sus ganancias inmediatas y desalojar a sus adversarios de toda posición de poder, sin reparar en el costo resultante. Así, sobre el trasfondo de la intensificación del terrorismo guerrillero y paraestatal, se fueron proyectando episodios que, además de dilucidar enfrentamientos, fueron minando la viabilidad del gobierno constitucional y, por ende, del régimen democrático; la salvaje limpieza de los sectores de izquierda, el Navarrazo, o sea la destitución del gobernador y vice de Córdoba por el jefe de la policía provincial, convalidada por el ejecutivo nacional ejercido por Perón, la liquidación de Gelbard, el Rodrigazo, la defenestración de López Rega y su camarilla y la renuncia del ministro de economía Cafiero ante el sabotaje sindical a su programa fueron algunos de los ejemplos más importantes de dicha secuencia.

Los jefes sindicales, y principalmente los dirigentes que controlaban las 62 Organizaciones, fueron precisamente uno de los actores que contribuyeron más decisivamente a generar un patrón político en el que predominaron las consideraciones de corto plazo y la despreocupación por la consolidación institucional. En ese sentido, y con la excepción parcial de los meses en que Perón ocupó la presidencia, los dirigentes sindicales no se apartaron mayormente de las tácticas defensivas y oposicionistas que habían aprendido y ejercitado desde 1956 frente a gobiernos que proscribieron al peronismo. Ante la amenaza que las oposiciones sindicales representaron para su predominio, los dirigentes de las 62 y la CGT reaccionaron no solamente impulsando una mayor centralización del aparato sindical –lo que les dio mayor poder para controlar tanto a las bases obreras como a los disidentes– sino también minando esfuerzos, como los de Gelbard y Cafiero, de vincular la política de ingresos a las otras variables fundamentales de la economía. Parece exagerado, en consecuencia, caracterizar al proyecto de los dirigentes gremiales como un programa autoritario

movilizador sindicalista orientado a determinar la naturaleza del sistema político global.³¹ El programa sindical tuvo solamente, en realidad, proyección sectorial, manteniendo, eso sí, la capacidad de bloquear proyectos más globales como los impulsados por la izquierda peronista, por Peñón, y por los sectores fascizantes agrupados en torno de López Rega.

Hacia mediados de 1975 ya habían sido excluidos de la lucha por el poder, y pulverizados políticamente, la izquierda peronista y los sectores empresariales y políticos vinculados a Gelbard. A esa altura, la camarilla agrupada en torno a López Rega intentó liquidar al único contendiente de peso que se le oponía dentro del peronismo, o sea la dirigencia sindical. La operación, tanto en lo económico como en lo político, tuvo características inéditas para un gobierno peronista. Por un lado, se procuró contener mediante un retraso salarial, la desenfrenada carrera de precios y salarios desatada desde 1974. Por el otro, se trató de lograr la involucración de las fuerzas armadas —a través de la designación de un oficial en actividad como ministro de Interior y de un comandante en jefe del ejército partidario del “profesionalismo integrado”— con la pretensión de que los militares se convirtieran en el sostén principal de un régimen político que tendiera inexorablemente a la liquidación completa de las instituciones parlamentarias y de las libertades públicas.³² La operación política concebida en torno al Rodrigazo resultó en un descalabro total que culminó con la defenestración de López Rega y de sus asociados más cercanos y el irreparable deterioro de la figura de Isabel Perón.³³ Sin embargo, ella constituyó un importante hito de la historia del gobierno peronista, pues marcó el momento en que las fuerzas armadas recuperaron plenamente la iniciativa política, y junto con ellas, los sectores de la gran burguesía que habían quedado a la defensiva desde 1973. A partir del tercer trimestre de 1975, los militares, que ya habían ganado un espacio considerable desde principios de ese año al serles asignada la responsabilidad de la represión de la guerrilla en la provincia de Tucumán, empezaron a manejar el tiempo de la política en función de un proyecto de liquidación del régimen democrático que iba mucho más allá de la coparticipa-

ción que, cada vez más desembozadamente, les ofrecía Isabel Perón.

Durante el lapso que medió entre el Rodrigazo y la caída de Isabel Perón en marzo de 1976 se fue configurando aceleradamente el síndrome de una sociedad desgobernada. *Por una parte*, esto consistió en la completa desarticulación del frente de fuerzas que se había expresado a través del FREJULI y del arco de partidos parlamentarios que compusieron la oposición leal a su gobierno, es decir el radicalismo y la Alianza Popular Revolucionaria, fundamentalmente. El plano más visible del proceso fue la descomposición misma del gobierno peronista; éste perdió totalmente el contacto con la sociedad quedando despojado de toda posibilidad de regular o influir sobre los procesos sociales en medio de una sucesión de episodios de histeria presidencial, complotos palaciegos y parálisis de las cúpulas del parlamento y los partidos. En un nivel más profundo, la desarticulación abarcó el plano de la política global; ésta se redujo a la salvaje confrontación de fuerzas armadas y a la caza de víctimas indefensas; la violencia se transformó en el recurso cotidiano, y casi exclusivo, mientras la abrumadora mayoría de los sectores movilizados a partir de 1969 completaron una parábola de desactivación y de repliegue al cual contribuyeron, en dosis comparables, la decepción ante la crisis y el fracaso del peronismo y el miedo. Los comportamientos económicos de las principales clases sociales mantuvieron un paralelismo con la política: la búsqueda de la negociación y el acuerdo cesó prácticamente por completo y tanto los trabajadores como los empresarios tornaron a vivir al día. Los primeros procuraron que los salarios no se retrasaran excesivamente, lo que llevó a los dirigentes gremiales a demandar reajustes cada vez más frecuentes, contribuyendo de paso a que el gobierno perdiera los vestigios de autoridad y credibilidad que le quedaban. Los segundos desbordaron fácil y casi provocativamente todo control o regulación que el Estado pretendió imponer a los precios modificándolos cotidianamente; asimismo, paralizaron totalmente la inversión. Todo ello conformó un patrón de economía de saqueo que redondeó la imagen de caos e incertidumbre absoluta que ofrecía la sociedad argentina de fines de 1975 y principios de 1976.

Pero, *por otra parte*, la imagen de caos y desgobierno

no fue simplemente el resultado de las torpezas y la ineficacia del gobierno y la parálisis de los actores ligados a él. A partir de mediados de 1975 dicha imagen fue fomentada deliberadamente por los dos actores que, desde la política y la economía respectivamente, fueron constituyéndose en los censores severos y externos no solo del gobierno sino también de toda una manera de organización de la sociedad argentina; es decir, las fuerzas armadas y la cúpula empresarial liberal que reaparece espectacular y exitosamente con la creación de la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). En efecto, unos y otros formularon críticas cada vez más demoledoras que, en principio, denunciaron a un gobierno incapaz de "poner orden", tanto por su supuesta ineficacia en la represión como por su imposibilidad de regular los comportamientos de los distintos sectores sociales, incluso de aquellos que habían constituido su soporte social. Sin embargo, las críticas fueron mucho más allá, apuntando por elevación a toda una sociedad, con respecto a la cual el populismo —qua régimen político y qua estilo de comportamiento de las clases sociales fundamentales— fue postulado como arquetipo de un estilo de organización en el cual los actores, acostumbrados a la tutela de un estado protector y omnipresente, desarrollaban conductas perniciosas que finalmente conducían a un estado de desorden cuya manifestación más diabólica era la subversión.

La negativa de las fuerzas armadas a involucrarse con un régimen en descomposición, prolongando una situación en la cual la sociedad argentina se vio sometida a niveles de desgobierno, incertidumbre y desquiciamiento económico sin precedentes hasta 1976, no solo gratificó el antiperonismo visceral de la gruesa mayoría de los miembros de la corporación militar y de sus aliados sociales. Además, ello tuvo como objetivo dejar sentada una moraleja ejemplizadora, sobre la cual pudiera basarse legítimamente la fundamentación de la propuesta de construcción de un orden social alternativo a la sociedad populista de "los últimos treinta años". La cuestión pasaba a ser, entonces, la creación de una nueva sociedad y no simplemente la depuración y ordenamiento de las modalidades de organización política de la vieja.

El golpe de 1976: revolución burguesa en contra de los burgueses... y de los proletarios

Como sugería en la sección anterior, en 1976 el diagnóstico de los militares argentinos tuvo un carácter más global que los que precedieron a las irrupciones en la política que las fuerzas armadas habían venido protagonizando desde 1955. En realidad, las sucesivas intervenciones militares fueron jalando un crescendo de multiplicación de los planos de la sociedad argentina cuestionados por las fuerzas armadas y, paralelamente, de intensificación del nivel de involucración militar que se estimó necesario para corregir los presuntos vicios. Así, mientras en 1955 y 1962 los militares se limitaron a impedir la continuación de regímenes políticos a los cuales se oponían, ya en 1966, como veíamos, la ideología golpista fue más allá y propugnó la instalación de un régimen no democrático sostenido, en última instancia, por las fuerzas armadas. En 1976, finalmente, la ideología del golpismo fue todavía más revolucionaria. Al proyecto de establecer un gobierno *de* las fuerzas armadas, y no meramente apoyado *por* ellas, se agregó la visión de la necesidad de producir un cambio profundo en la sociedad argentina.

El desafío de la guerrilla y la aguda crisis social que durante varios años se superpuso con dicho desafío fueron interpretados por los militares como la manifestación de una sociedad enferma —y por lo tanto indefensa frente a la penetración del virus subversivo— cuyos orígenes se remontaban a 1945, e incluso a 1930. Desde esta visión el populismo y el desarrollismo modernizante aparecieron como las dos caras de una misma moneda. El primero había predominado entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1976, pero además durante 1955 y 1973 había estado presente como oposición de los sucesivos proyectos desarrollistas. Esta oposición había sido inicialmente derrotada, pero finalmente había rebotado triunfalmente contribuyendo al bloqueo de los proyectos desarrollistas a menudo apoyados por los militares e impidiendo su consolidación. La otra cara de la moneda, es decir el desarrollismo, había intentado dos veces —en 1959 y en 1967— alterar los términos de la relación de fuerzas intentando favorecer a los sectores más concentrados de la burguesía, nacional y extranjera, y las nuevas clases

medias asociadas a la expansión de los servicios y consumo más modernos en desmedro de los sectores populares y los segmentos más atrasados de la burguesía. Sin embargo, como hemos visto, el desarrollismo no se había propuesto en modo alguno alterar la ecuación social básica de la Argentina. Para el diagnóstico de los militares de 1976, una de las pruebas más contundentes de los límites del desarrollismo, y en definitiva de su confluencia con la premisa básica del populismo —es decir, la utilización del crecimiento industrial como eje dinámico de la economía argentina—, fue el hecho que el desarrollismo no dejó de propiciar un pacto con el sindicalismo peronista, demandándole o imponiéndole sacrificios, pero al mismo tiempo sentando las bases para la creación y expansión de su formidable poder organizativo: Frondizi en 1958-1962 al sancionar la ley de asociaciones profesionales, que refirmó la vigencia del principio del sindicato único por rama de actividad y de la central obrera única, y devolviendo la CGT a los sindicalistas peronistas; Onganía en 1966-1970 al no derogar aquella ley y expandir significativamente el sistema de obras sociales que otorgó a los sindicatos el control de una voluminosa masa de recursos.³⁴

En síntesis, para los militares victoriosos de 1976 el desarrollismo se transformó, *malgrè lui*, en el correlato del populismo. La condena simultánea dejó el campo abierto a los postulados liberales y a sus sostenedores.

¿Cuáles fueron las razones para que el liberalismo se impusiera tan decisivamente? En primer lugar, los liberales pudieron aducir su inocencia en relación a las políticas económicas implementadas desde 1943. Si bien después de la caída de Perón algunas de las figuras del elenco liberal, como Verrier, Alsogaray, Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Pinedo, habían alcanzado a encaramarse en la cima de la conducción económica, ellos pudieron argüir que nunca habían tenido la vía libre para ejecutar a fondo las “verdaderas” políticas liberales. Así, en 1956-1957 y 1962-1963, los liberales controlaron fugazmente las carteras económicas de gobiernos militares; sin embargo, éstos fueron breves e internamente contradictorios y, por lo tanto, no pudieron darle continuidad a sus políticas. Tampoco en 1959-1961 y 1967-1969, cuando Alsogaray y Krieger Vasena fueron ministros de economía por períodos un tanto más

prolongados en el contexto de gobiernos cuya estabilidad era presumiblemente mayor, se llegó a implementar el programa liberal.

En ambos casos, los respectivos ministros tuvieron que ejecutar sus políticas en el contexto de administraciones cuyos titulares, Frondizi y Onganía, no compartían los preceptos del liberalismo. Los dos presidentes, por ende, concibieron la gestión de sus ministros liberales como un interludio cuyo fin sobrevendría una vez que se cumplieran los objetivos a los que sirvieron las respectivas designaciones, el alivio de las presiones militares, en un caso, y la "estabilización" económica, en el otro. En consecuencia, durante la década del 60, las políticas de los ministros liberales fueron a menudo saboteadas por otros sectores de los propios gobiernos y, además, fueron implementadas bajo la permanente espada de Daimocles que pendió sobre sus ejecutores. No casualmente, y a pesar del control que ejercieron sobre las respectivas políticas económicas, ni Alsogaray ni Krieger Vasena pudieron nunca cuestionar la premisa básica de las políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, el énfasis puesto en la industrialización. A su llegada al ministerio de economía Martínez de Hoz pudo, entonces, reclamar creíblemente que les había llegado el turno a aquéllos a quienes se les había negado por más de treinta años.

No todo se limitó, empero, a que los liberales pudieran exhibir un pasado sin mácula, relativamente hablando, se entiende. En la Argentina de mediados de la década del 70 la ideología liberal tuvo una virtud adicional que resultó fundamental para garantizarle audiencias más nutridas y predispostas dentro de las fuerzas armadas. Por primera vez en la historia argentina contemporánea los viejos preceptos liberales —es decir, la reivindicación del mercado como mecanismo exclusivo de asignación de recursos y la crítica de las industrias "artificiales" y del "excesivo" intervencionismo estatal— tendieron a armonizarse con el pensamiento militar, proporcionando una filosofía fundante a una reformulada doctrina de seguridad nacional. Desde el momento en que surgieron los primeros esbozos de esa doctrina —bajo la argumentación de la creación de las fronteras ideológicas— allá a fines de la década del 50, los temas liberales habían atraído y repelido, a la vez, a los sectores

hegemónicos dentro de las fuerzas armadas. El liberalismo había sido la única corriente consecuentemente antiperonista y, además, había virado consonantemente con la profundización antidemocrática que los militares habían protagonizado a partir de 1958. Sin embargo, y como bien destaca O'Donnell (1981; pag. 214), de las doctrinas liberales se desprendía una serie de consecuencias que habían repugnado tradicionalmente a los militares: el redimensionamiento industrial, la revigorización del mercado de capitales y la crítica de las prácticas nacionalistas y estatistas. En 1975-1976, finalmente, los liberales pudieron articular un discurso en el que se integraron tres núcleos temáticos que hasta entonces habían permanecido dispersos, y que definieron la matriz del orden a erradicar: la *subversión* —caracterizando como tal no simplemente a las acciones guerrilleras sino también toda forma de activación popular, todo comportamiento contestatario en escuelas y fábricas y dentro de la familia, toda expresión no conformista en las artes y la cultura, y, en síntesis, todo cuestionamiento a la autoridad; la *sociedad política populista* —el peronismo, los sindicatos, las oposiciones “complacientes” (es decir, los radicales y la izquierda parlamentaria) y el Estado tutelar; y, por último, la economía urbana apoyada en la dinámica del *sector industrial*, y sus soportes sociales básicos, una clase obrera “indisciplinada” y un empresariado “ineficiente”.

Contrariamente a lo que una visión poco informada acerca de la naturaleza del liberalismo argentino pudiera suponer, el recetario liberal de 1976 enfatizó la idea del Estado fuerte.³⁵ Partiendo de una crítica del estado democrático populista-desarrollista como un estado débil sometido a los vaivenes de las excesivas demandas sectoriales e incapaz, en el límite, de poner coto al caos y a la subversión, los liberales reivindicaron la necesidad de que el estado subordinara los privilegios sectoriales.—es decir, las conquistas sociales según la terminología a superar—y los derechos y las garantías individuales a la “razón de la guerra” contra la subversión, sus aliados y las costumbres sociales y comportamientos económicos que constituyan su “caldo de cultivo”. *Por un lado*, se trataba, entonces, de caracterizar a la Argentina como una sociedad en guerra, con lo que se configuraban como prioritarias las tareas militares de extirpación del cáncer

subversivo en todas sus ramificaciones. Las fuerzas armadas, por ende, fueron presentadas como “responsables principales y últimas del destino nacional”, con una serie de manifestaciones institucionales y simbólicas de tal preeminencia: la negación absoluta y a menudo explícita del estado de derecho, la suplantación de los poderes constitucionales del gobierno por las tres armas, que se repartieron hasta el último cargo de intendente del pueblo más remoto y sus prebendas, y el ejercicio del poder supremo del estado por la junta de comandantes en jefe y no por un déspota semimonárquico al estilo de Onganía o Pinochet.³⁶ Los militares y sus mandatarios quedaron asimismo a cargo de detectar y castigar todas las formas de comportamiento contestatario, o meramente crítico, en los distintos ámbitos de la sociedad civil, las que fueron condenadas como excrescencias foráneas que contradecían la utopía reaccionaria de una sociedad rígidamente estamentada. Sin embargo, la cosa no se detuvo ahí; *por el otro lado*, el Estado se perfiló como el instrumento fundamental en la subversión del “viejo orden” populista, interviniendo activamente para “destruir el modo de acumulación hacia el cual la economía se inclinaba naturalmente” después de más de cuarenta años durante los cuales las distintas clases habían internalizado gradualmente comportamientos que presuponían, entre otras cosas, el Estado tutelar, los precios sociales, la economía semi-cerrada y el mercado de capitales regulado.³⁷

La verdadera revolución que proponían los liberales exigía, en principio, que el estado se disciplinase a sí mismo, eliminando empresas públicas y empleos “superfluos”, desmantelando los sistemas de subsidios y absteniéndose de fijar precios sociales para sus servicios. Pero, además, y fundamentalmente, de lo que se trataba era de destruir los “viejos hábitos” de trabajadores y empresarios y generar nuevos. Esta consigna genérica, ciertamente, no fue concebida para que tuviera consecuencias simétricas para unos y otros. En el caso de los trabajadores, la apelación a la idea del mercado, es decir de un universo en el cual sus componentes son átomos, y se conciben como tales, respondió al propósito de destruir los mecanismos mediadores, principalmente los sindicatos y las estructuras de representación obrera en las plantas, que habían permitido a obreros y empleados

promover sus intereses y presionar al Estado y a la patronal a partir de definirse como integrantes de un sujeto colectivo. La disolución de las centrales empresariales y de trabajadores y la intervención de los gremios fue presentada por el gobierno militar como una depuración de una de las numerosas ramificaciones del estado corporativo populista con consecuencias parejas para todos en la medida que se afectaba tanto a uno como a otro actor en el proceso de producción. Sin embargo, los efectos de la irrupción del Estado fueron particularmente perjudiciales para el movimiento obrero. Esto se debió, en buena medida, a las modalidades de constitución de la clase trabajadora argentina como sujeto colectivo. Su emergencia como tal estuvo enmarcada por el desarrollo de un movimiento sindical a nivel nacional, que alcanzó la posibilidad de formular las demandas de los trabajadores a través de sus organizaciones de segundo y tercer grado. A su vez, la cohesión del movimiento había sido fortalecida por el cemento ideológico provisto por el peronismo, tanto en su etapa de fomento de las organizaciones sindicales masivas (1945-1955) como durante el período en el que constituyó el principal núcleo integrador del oposición obrero (1955-1973). Asimismo, la disolución simultánea de la CGT y la CGE alteró radicalmente el tanteador de la pujía social en favor de la burguesía debido a una razón más general. Mucho más que en el caso de otras clases sociales, la fuerza de la clase obrera depende de sus posibilidades de actuar colectivamente. En cualquier sociedad capitalista la fuerza de trabajo está atomizada en el interior de cada firma individual, mientras que el capital se encuentra ya integrado bajo un comando único.³⁸ La creación de sindicatos y de otras formas de asociación obrera no es sólo teórica, sino también históricamente, una respuesta a la “asociación” que ya ha tenido lugar del lado del capital.³⁹ En consecuencia, un proceso de atomización que debilita la capacidad de asociación de ambas clases inevitablemente trae como resultado el reducir considerablemente más el poder de negociación de los trabajadores que el de los empleadores.

Los resultados de las políticas del gobierno militar en el campo obrero fueron espectacularmente exitosos. Los años de Videla marcaron el período más extenso de inactividad sindical desde 1943.⁴⁰

La transformación económica proyectada por los liberales, como veíamos más arriba, no se limitaba empero a “poner en su lugar” a la clase trabajadora obligando a sus integrantes a negociar salarios y condiciones de trabajo de manera atomizada y, por lo tanto, desventajosamente.⁴¹ El objetivo más global fue el de modificar el sistema todo de relaciones sociales. Para ello, por lo tanto, también había que reformar a los empresarios. La estrategia adoptada fue la de la instauración de un sistema económico de libre mercado a través, principalmente, de la apertura del mercado interno a la competencia exterior, partiendo de la constatación de que

... bajo un sistema de protección, las actividades productivas locales gozan de un margen de protección excedente que hace del precio de competencia de la oferta externa un límite superior virtual pero no efectivo. Por debajo de ese límite las empresas, no individualmente, pero sí como conjunto dentro de una determinada actividad, gozan de la facultad de fijar sus propios precios. Pueden ajustar precios a costos sin restricciones de competencia. Esto hace posible que las empresas y los asalariados convengan entre sí salarios y precios dentro de cada una de las ramas de la producción con exclusión de todo otro interesado (gobierno, clientes y consumidores). El instrumento es el convenio colectivo de trabajo... y los concertantes son las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores. La protección aparece, entonces, como la razón económica última de la legitimación de las organizaciones sindicales y su vigencia desde la década del 30, como la explicación histórica del vigoroso desarrollo que éstas alcanzaron. (Canitrot, 1980, pág. 7)

En ese sentido, a pesar de su brutalidad, el retraso salarial inicial no carecía de antecedentes —como el de 1959— y las novedades doctrinarias recién comenzaron a producirse desde mediados de 1977. Una de las instancias decisivas fue la reforma financiera sancionada en junio de 1977, que implicó prestar

... atención excluyente al problema inflacionario, (tomando) decisiones expresamente dirigidas a cortar el proceso de auge económico (no dudando) en herir los intereses inmediatos de los miembros de las clases socia-

les que configuraban la sustentación política (del gobierno militar). (Idem, pág. 26)

El hito crucial, de todas maneras, lo constituyó la adopción de la política de tipo de cambio futuro pautado en diciembre de 1978; dicha política apareció como el desideratum en materia de política antiinflacionaria y terminó llevando a la economía argentina a un callejón sin salida que la sumió en la crisis más profunda de su historia. Independientemente de la euforia consumista que el dólar barato generó en ciertos sectores sociales, y de la contribución que dichos consumos hicieron a la generación de la crisis, lo más significativo fue que el grueso de los empresarios continuó comportándose como antes de 1978 y que la formación de los precios reflejó la persistencia de los patrones de cálculo empresarial previos.⁴² Como señala Canitrot,

... (no se logró) regular el mercado de trabajo a través de los precios industriales sometidos a la competencia externa, de modo de suprimir el sistema de fijar salarios y precios en la industria mediante los convenios colectivos de trabajo. ... La presencia de un sector de bienes intrínsecamente no comerciables y la dualidad en la formación de precios (hicieron) imposible lograr la regulación "externa" de los precios. (1980, pág. 43)

Este fracaso que no hizo más que resaltar la resistencia del viejo modo de acumulación —el de la economía semicerrada y el estado asistencialista— a ser destruido, estuvo en la raíz del epílogo totalmente diferente que tuvo el “proceso de Reorganización Nacional” en comparación con el anterior régimen militar. Mientras que la utopía de una sociedad gobernada por administradores omniscientes que soñó Onganía naufragó como resultado de los embates a los que la sometieron las clases y sectores sociales que constituyeron sus víctimas, la vuelta al mercado y a sus modos de disciplinamiento “natural” no se materializó debido a que sus propios beneficiarios no se comportaron de acuerdo a las expectativas de los tecnócratas liberales y sus socios militares.

El epílogo de la experiencia militar iniciada en 1976, aún no concluída en el momento de escribirse estas páginas, ha reiterado viejos vicios de las fuerzas armadas argentinas y agregado algunos nuevos. Así, durante 1981

y 1982 se fueron revelando, en toda su magnitud, la barbarie de la represión, el gangsterismo que dominó la gestión pública a partir de 1976 y la incapacidad de las fuerzas armadas para respetar las normas que se habían dado a sí mismas para pautar las sucesiones presidenciales en el contexto del gobierno militar. Pero, además, los militares dieron un nuevo ejemplo de su ineficiencia en el manejo de la liberalización política de un régimen controlado por ellos, una vez tornados inviables los objetivos fijados inicialmente.⁴³

En efecto, la única sucesión ordenada producida dentro del régimen militar, es decir, el reemplazo del general Videla, sirvió para precipitar la ya inevitable defenestración de Martínez de Hoz y el abandono de sus políticas económicas. Este hecho abrió un convulsivo proceso durante el cual los sucesores de Videla, los generales Viola y Galtieri, pretendieron, cada uno de acuerdo a su estilo, ignorar que la suerte del régimen militar estaba irremisiblemente atada al éxito de su política económica. Viola intentó imponerle un *tempo* reposado a la política y fue barrido por los embates producidos a raíz del descalabro del proyecto económico, y Galtieri, tras fracasar rápidamente en sus pasos iniciales en los cuales aspiró a retomar la ortodoxia económica liberal, apostó al todo o nada con la aventura de las Malvinas. El desastre militar en el Atlántico Sur no sólo contribuyó a la mutilación de otra generación de jóvenes argentinos y al agravamiento de la crisis económica.⁴⁴ También consumió la última esperanza de la cúpula militar de redimir las bases del poder del régimen y la forzó a convocar a los partidos políticos para convenir la entrega del gobierno a plazo corto y cierto. Paralelamente, los militares abandonaron toda aspiración a imponer condiciones al gobierno que los sucedería, excepto en lo referido a la "guerra sucia", con respecto a la cual no renunciaron al objetivo de que sus sucesores no innovaran con respecto a lo dispuesto por el gobierno del general Bignone. Pero, más allá de cómo será resuelta la cuestión crucial de la represión ilegal, interesa preguntarse en qué condiciones se encuentra la política argentina en una coyuntura de transferencia del poder a un gobierno electo democráticamente, circunstancia ésta que, a esta altura, parece imposible que las fuerzas armadas puedan evitar. En respuesta a esta

pregunta, quiero, a manera de cierre de este trabajo, esbozar algunas ideas sobre las perspectivas del futuro político inmediato.

"Deflación de poder" y posibilidades de la democracia en Argentina.

En la Argentina de la segunda mitad de 1982 y principios de 1983 se asitió a una descomposición del régimen militar que llegó a límites inimaginables. El espectáculo de 1975-1976 fue reeditado en una versión aún más patética: una sociedad desgobernada, la desintegración del elenco dirigente y la economía totalmente fuera de control. La evaporación del poder militar, que no implicó un deterioro similar de su capacidad de fuego, no estuvo correlacionada, sin embargo, con el paralelo fortalecimiento de las oposiciones. Dada la precariedad del gobierno y de la situación militar, esta circunstancia no impedirá, seguramente, que se realicen elecciones relativamente limpias ni que se entregue el gobierno a los triunfadores en las mismas. La debilidad de las oposiciones y la fragilidad de las alternativas políticas al régimen militar, más bien, agudiza el problema de la construcción colectiva de la democracia, posibilidad sólo facilitada, pero no garantizada —como lo ha enseñado repetidamente la historia argentina reciente— por el forzado repliegue de los militares.

Y es, precisamente, desde la perspectiva de la estabilización de un sistema político democrático que el panorama no es demasiado halagüeño. Esto es así no tanto porque se pueda presumir que los actores políticos que lideraron el proyecto de 1976, comenzando por los militares, se abstendrán en el futuro de sabotear un proceso de consolidación democrática. El obstáculo más crítico, en ese sentido, lo constituye el hecho de que el despliegue y la frustración de los sucesivos proyectos de reorganización política y social estructurados a partir de 1966 han alimentado perversamente a una cultura política en la que, ya de por sí, prevalecían patrones de comportamiento social que afectan negativamente la posibilidad de afianzamiento de la democracia.

Ya a comienzos de la gestión del actual régimen

militar la sociedad argentina estaba profundamente penetrada por valores y costumbres antidemocráticos: el culto a la violencia, la destrucción de los patrones de acuerdo implícito que contradictoriamente se habían generado entre 1955 y 1966, la falta de tolerancia por las conductas e ideas disidentes y el pensamiento crítico y el desprecio por el consenso. La vigencia de estos valores en la sociedad, y no meramente en los actores que articularon el proyecto de 1976, permitió que la cruzada purificadora de éste alcanzara un respaldo masivo, si bien probablemente no mayoritario. Dicho respaldo, en conjunción con la apatía y la privatización que constituyeron, en muchos casos, la respuesta adaptativa al miedo y la atomización, proporcionaron los ingredientes con los cuales se intentó conformar una nueva cultura política, más uniformemente autoritaria, que diera basamento sólido y a largo plazo al régimen militar. El fracaso en la conformación de esa nueva cultura política autoritaria no debe ocultarnos que aquellos valores perduraron y que, de alguna manera, fueron reforzados por la experiencia abierta en 1976, a pesar de que sus objetivos no fueron alcanzados. En efecto, la pretensión de que el mercado se constituyera en el principio universal y "natural" de *organización* social no tuvo éxito. Sin embargo, la sistematicidad e intensidad del intento tuvo profundos impactos en la sociedad argentina, reforzando los comportamientos atomísticos y no solidarios y debilitando las tendencias asociativas.

La *des-organización* social resultante torna aún más difícil una tarea que parece haber sobrepasado el límite de posibilidades de la Argentina, es decir, la estabilización de un sistema democrático. La futura coyuntura política argentina obligará al gobierno que surja de las próximas elecciones a transitar por un desfiladero muy estrecho que exigirá cuotas de inteligencia y sensibilidad políticas que, hasta ahora, no han sido exhibidas por los elencos dirigentes partidarios, sindicales y empresarios. Por un lado, sería necesario que emergiera un gobierno fuerte capaz de manejar dos cuestiones que, seguramente, serán fuente de innumerables dificultades: la puesta en vereda de las fuerzas armadas y la gradual resolución de la extremadamente difícil situación económica. Por el otro, la consolidación de un poder democrático requeriría imprescindiblemente que el gobierno no coartara ni

reprimiera los impulsos que surjan de una sociedad que, al par de haber revelado sus ingredientes antidemocráticos, también ha demostrado reiteradamente el potencial de generar una cultura diversa y plural y su capacidad de cuestionar estructuras de autoridad ilegítimas y elitistas.

NOTAS

¹ En la novedosa y sugerente propuesta de O'Donnell se filtra una dosis de economicismo. En particular, los mecanismos de formación y confrontación de las alianzas sociales, la ofensiva y la defensiva, descuidan en parte los aspectos políticos. En la sección donde discuto la naturaleza de las tres corrientes que en materia de política económica se perfilaron dentro del antiperonismo posterior a 1955, esbozo un enfoque alternativo que aspira a no subsumir lo político en lo económico.

² La excepción parcial es, por supuesto, la del gobierno peronista de 1973. En él coexistieron, como analizo en la sección correspondiente, intentos de estabilización democrática y proyectos de profundización autoritaria.

³ Como el autor ha sugerido en otro trabajo, "la ecuación socio-económica del peronismo no fue demasiado compleja. Por una parte, se impuso un techo a las ganancias de la clase terrateniente de la pampa húmeda, principalmente a través de las tasas cambiarias múltiples. Por otra parte, se promovió un aumento simultáneo de los salarios reales y de las ganancias del sector industrial, incluyendo a los segmentos intensivos en mano de obra y que utilizaban técnicas más eficientes. Este aumento de las ganancias del sector industrial se basó principalmente en la expansión del consumo de los bienes salario". (Cf. Cavarozzi, 1982).

⁴ En realidad el reformismo populista no-peronista, llevó el esquema de reconciliación de clases aun más lejos que el mismo peronismo. La clase terrateniente pampeana había sido expropiedad de una importante porción de sus ganancias, para que la redistribución del ingreso y la sustitución de importaciones, que tuvieron lugar entre 1945 y 1955, fueran posibles. Por lo tanto, era poco claro como se haría para restaurar los incentivos económicos a los terratenientes, sin afectar los intereses de las clases urbanas –ya fueran la burguesía, el proletariado, o ambos.

⁵ El partido radical había alcanzado el poder en 1916, después de haber luchado por la implantación del sufragio masculino universal. Luego del derrocamiento de su líder, Hipólito Yrigoyen, los radicales fueron proscriptos de las elecciones presidenciales hasta mediados de los años cuarenta. A partir de entonces, el partido radical adoptó una plataforma económica relativamente progresista, mientras, al mismo tiempo, atrajo a la oposición antiperonista, de carácter más bien conservador.

⁶ A partir de fines de la década de 1950, miembros de las fuerzas armadas, también comenzaron a prestar apoyo a la postura desarrollista.

⁷ Como resultado de medidas y/o presiones impuestas por los

militares, el peronismo estuvo proscripto desde 1955 en adelante. Esto sometió a los partidos políticos a una doble presión. Hacia fines de la década de 1920, el sistema político argentino había alcanzado niveles de participación electoral comparables a los de los países capitalistas más avanzados. Además, durante el régimen peronista, la clase trabajadora había alcanzado la ciudadanía plena, y el gobierno había extendido a las mujeres el derecho a votar. Por lo tanto, la realidad política argentina de mediados de la década de 1950, condenó como inviables a los intentos de los "demócratas" que pretendían establecer la "democracia" únicamente para los "demócratas", excluyendo de hecho a una porción de la ciudadanía que constituía entre un treinta y un cincuenta por ciento de la misma. Aun los partidos que continuaron articulando una ideología antiperonista, como los radicales del pueblo, y varios grupos conservadores más reducidos, comenzaron a cuestionar las regulaciones proscriptivas que minaban los fundamentos de la postura democrática, según la cual, el respeto de la soberanía popular constituía la principal base de legitimación del sistema. Más aún, otras corrientes políticas, como los radicales intransigentes, y pequeñas fracciones de los partidos conservador, socialista, y demócrata cristiano, explícitamente buscaron atraer los votos peronistas, a cambio de promesas referidas a la implementación de determinadas políticas sustantivas, y al levantamiento de la proscripción del peronismo en las "próximas" elecciones. En la esfera de la legislación laboral y de las políticas gubernamentales con respecto al movimiento sindical, la oposición de los partidos no-peronistas a los lemas de los líderes sindicales del peronismo se fue debilitando gradualmente. En particular, los partidos relajaron sus posiciones contrarias a las demandas peronistas referidas tanto al restablecimiento de "una única CGT y un solo sindicato por rama de actividad", como al sistema de negociación colectiva de salarios, con la participación del Estado. En definitiva, el consenso inicial logrado en torno a la proscripción y exclusión del peronismo se disolvió gradualmente.

⁸ Actuando desde el interior del régimen militar, los radicales del pueblo respaldaron en 1956, los programas redistribucionistas del ministro de economía Eugenio Blanco, y en 1957 bloquearon parcialmente la implementación del plan de estabilización relativamente ortodoxo, impulsado por el sucesor de Blanco, Roberto Verrier.

⁹ Como ha sido discutido en otro lugar por el autor —y señalado por diversos estudiosos del tema—, los partidos conservadores de Argentina, nunca se recompusieron luego del colapso del régimen oligárquico en 1916. Esto constituyó prácticamente un caso único en el contexto del Cono Sur latinoamericano; en otros lugares, como Brasil, Chile, y Uruguay, el conservadorismo

político siguió constituyendo una fuerza electoral significativa (Cf'. Cavarozzi, 1978).

⁹ En 1959, Frondizi —amenazado por repetidos “planteos” militares —designó a Alsogaray, un liberal, como ministro de economía. En 1961, lo desplazó de su cargo, cuando el plan de estabilización había logrado ya algunos de sus objetivos— fundamentalmente, la reducción de la inflación y del déficit de la balanza de pagos.

¹¹ Para un análisis detallado de las similitudes entre las políticas y plataformas económicas del peronismo y el radicalismo del pueblo, cf. Canitrot, 1975.

¹² En realidad, podría afirmarse que el ingenuo intento de erradicar el peronismo, llevado a cabo por el régimen militar de 1955-1958, provocó una reacción antagónica que tuvo la virtud de reforzar la lealtad de la clase obrera y otros sectores populares con respecto al peronismo. (Cf'. Cavarozzi, 1979).

¹³ Desde principios de los años cincuenta, se fue tornando crecientemente evidente que la fórmula económica vigente desde la segunda guerra mundial no podía mantener por mucho tiempo los niveles de salarios y empleo, siendo necesario, en consecuencia, que se produjeran profundas alteraciones de la estructura económica.

¹⁴ Tradicionalmente, el ejército ha sido el arma más poderosa, y el hecho de que la armada se aliara, precisamente, con el sector que sería derrotado en los enfrentamientos de 1962-1963 —es decir, los “colorados”— consolidó aún más el rol dominante del ejército.

¹⁵ Cf. Cavarozzi 1979:2 págs. 59-65.

¹⁶ Para un análisis de las corrientes internas de las fuerzas armadas durante el gobierno instalado en 1966, cf'. O'Donnell; 1982.

¹⁷ Cavarozzi, 1979; pág. 62.

¹⁸ Simbólicamente, se procedió a confiscar los edificios de propiedad de los partidos transfiriéndolos al ministerio de Educación mientras que en el edificio del Congreso Nacional fue instalado el flamante Consejo Nacional de Seguridad.

¹⁹ Esta concepción fue explicitada por el subsecretario del Interior Díaz Colodrero en un discurso citado por O'Donnell (1982; pág. 124): “Se le reprocha a este gobierno carecer de un plan político y no se advierte que ese plan, es su primera faz, existe y ha dado buenos frutos. Ha consistido hasta hoy en algo muy simple y al mismo tiempo muy complejo y difícil de lograr: hacer la unidad y la pacificación nacional y restablecer el orden y

la autoridad del gobierno... La nuestra es una política de hechos".

²⁰ En este sentido, se debe señalar que el plan económico propuesto por Krieger Vasena, ministro de Economía de Onganía entre 1967 y 1969 incorporó el recetario liberal que ponía el acento en la "normalización" pero subordinándolo al objetivo de crecimiento. Cf . O'Donnell 1982; ,Caps. II y III, para una interpretación en la que se enfatiza algo más el "liberalismo" de Krieger Vasena.

²¹ Cf. 1982, págs. 85-103; 123-130.

²² Torre (1979, págs. 19-20) señala estas dos causas y con respecto a la segunda constata que "entre 1964 y 1966 el gob. radical del pueblo lanzó una vasta ofensiva estatal dirigida a controlar y debilitar a la poderosa oposición de los jefes sindicales peronistas. El Ministerio de Trabajo comenzó a ejercer una celosa vigilancia sobre el gobierno interno de las organizaciones gremiales fiscalizando las elecciones y el manejo de los fondos. Esta ofensiva, inspirada por razones políticas, tenía, no obstante, poderosas razones en las que apoyarse porque la supresión de la democracia sindical y el uso discrecional de los recursos gremiales eran prácticas corrientes en la conquista y la consolidación en el poder de los jefes sindicales peronistas.

²³ Cf . Cavarozzi, 1979:2, págs. 50-55.

²⁴ Cf. 1982; p. 257.

²⁵ Cf. O'Donnell, 1982; págs. 51-52. Algunos antecedentes del tema se pueden ver en Anderson (1975) y Cavarozzi (1978).

²⁶ En el ámbito gremial, por ejemplo, Lanusse, con un realismo no enteramente previsible en un militar de tan militante vocación antiperonista en el pasado, reconoció en gran medida la mayor legitimidad y representatividad que los dirigentes vandoristas tenían en relación a los participationistas y se dedicó, con mucha mayor selectividad y eficacia que sus predecesores, a reprimir a los sindicalistas combativos y "clasistas" interviniendo gremios y seccionales controlados por éstos y tratando de neutralizar las movilizaciones obreras que ellos promovían y canalizaban.

²⁷ Cf . O'Donnell, 1982, De Riz, 1981 y Viola, 1982.

²⁸ En esta sección me propongo solamente caracterizar la fórmula política que Perón intentó desplegar a partir de 1973 y señalar algunas de las razones de su fracaso. Dos obras recientes, las de Eduardo Viola y Liliana De Riz (1981), analizan detenida e inteligentemente las alternativas del período 1973-1976. Los trabajos de Landi (1978) y Canitrot (1978) tratan aspectos más específicos del período y constituyen también aportes significativos para su comprensión.

²⁹ Elizabeth Jelin analiza exhaustivamente los conflictos laborales producidos durante el gobierno peronista y destaca la situación de semi-ostracismo en la que se encontraba la dirigencia sindical dentro del peronismo en el momento de la asunción de Cámpora. (1977; p.8).

³⁰ El ya citado Viola destaca la importancia de los cambios en las consignas de Perón a partir de los cruciales sucesos del 20 y 21 de Junio de 1973. (1982; págs. 410 y 411).

³¹ Viola propone una interpretación en la que los objetivos políticos de los dirigentes sindicales son equiparados a los de camarilla fascizizante de López Rega. (1982; págs. 428).

³² Landi señala que el "profesionalismo integrado" consistió en "... la definición tendencial (del ejército) en favor, no ya de la defensa del estado y del régimen constitucional, sino de la línea política del gobierno". (1978; pág. 1403).

³³ El intento de reajuste drástico de la relación entre precios y salarios fue protagonizado por el ministro de Economía impuesto por López Rega, Celestino Rodrigo. De ahí lo de Rodrigazo.

³⁴ No fue casual que el mismo funcionario, Rubens San Sebastián, fuera quien desde la subdirección de Relaciones del Trabajo y la secretaría de Trabajo respectivamente, estuviera por detrás de las políticas implementadas hacia los sindicatos bajo Frondizi y Onganía.

³⁵ Por supuesto que en este sentido el liberalismo argentino contemporáneo no hace más que retornar a fuentes a las que a menudo pretende olvidar. Como bien acota Lechner (1981; págs. 24 y 25) los teóricos originales del liberalismo, y también los que lo practicaron, desencadenaron la articulación de una sociedad capitalista moldeada por la economía de mercado no como un proceso natural sino puesto en marcha por el estado. "El Panóptico de Bentham es la expresión más típica de ese estado vigilante que *disciplina a la sociedad* en nombre de la libertad individual". (Enfasis mío, M.C.)

³⁶ De paso, la asunción del poder supremo del estado por los comandantes en jefe de las tres armas reflejó la capacidad de aprendizaje de los militares argentinos quienes quisieron evitar la repetición de la experiencia de Onganía. Como se observó más arriba, entre 1966 y 1970, Onganía, un ex caudillo militar en ejercicio de la presidencia que no fue sometido a tipo alguno de control formal o institucional, perdió contacto vertiginosamente con sus camaradas de armas.

³⁷ La cita ha sido extraída de un trabajo del economista brasileño Francisco de Oliveira quien en su discusión de los cambios ocurridos en Brasil y en la economía mundial en la

década del 30, elaboró imágenes muy sugerentes. A pesar de que Oliveira se refiere al proceso inverso que nuestros liberales quisieron promover a partir de 1976, muchas de sus observaciones se aplican. El período de transición, dice Oliveira, exige que el estado *cave* un “nuevo lecho del río”, el que, una vez creado, permite que el proceso de acumulación se oriente, con un cierto grado de automaticidad, de acuerdo a los nuevos parámetros. (1975; pág. 14).

³⁸ Offe y Wiesenthal argumentan persuasivamente que “...la individualidad de la fuerza de trabajo viva ... es la causa de que emerja una relación de poder entre el trabajo y el capital. Este último, normalmente, agrupa muchas unidades de trabajo ‘muerto’ bajo un comando unificado, mientras que cada trabajador individual solo controla una unidad de fuerza de trabajo y, más aún, tiene que venderla bajo condiciones de competencia con otros trabajadores que, por su parte, tienen que hacer lo mismo. En otras palabras, la forma *atomizada* del trabajo vivo, que se encuentra en conflicto con la forma *integrada* o líquida, del trabajo ‘muerto’ genera una relación de poder; el capital (trabajo ‘muerto’) de cada firma está siempre unido desde el principio, mientras que el trabajo vivo está atomizado por la competencia. *Los trabajadores no pueden ‘fusionarse’; a lo sumo, pueden asociarse* con el fin de compensar parcialmente la ventaja de poder que el capital deriva de la liquidez del trabajo ‘muerto’. (Enfasis de los autores) (Cf.: 1980: p.74).

³⁹ Ibídem.

⁴⁰ Cf.: Delich, sin fecha.

⁴¹ Inicialmente, además, la represión a los sindicatos y a los activistas obreros fue acompañada por una medida escasamente “liberal”: el congelamiento de los salarios. Este coadyuvó a una drástica caída del salario real; “Sobre la base de un índice 100 para 1970, los salarios reales descendieron de 104,6 en 1975 a 65,0 en 1976 y 62,7 en 1977 y 1978”, Canitrot, 1980; pág. 23.

⁴² Algunos indicios en apoyo de este hecho están surgiendo de un estudio en curso en el CEDES bajo la dirección de Roberto Frenkel en el cual se apunta a la elaboración de un modelo cuantitativo para explorar los efectos de la aplicación de los instrumentos de estabilización elegidos durante el período del actual gobierno militar.

⁴³ La liberalización consiste fundamentalmente de dos ingredientes: 1) la expansión de las arenas de contestación pública de las políticas gubernamentales a través de la eliminación, o atenuación, de las restricciones a las libertades de prensa, expresión y asamblea y la limitación de las prácticas ilegales del estado y 2) la institucionalización del régimen a través de la celebración de elecciones que sólo convalidan decisiones, sobre

candidatos y/o políticas, tomadas a través de mecanismos no democráticos. Un ejemplo de liberalización exitosa lo constituye el régimen militar brasileño con posterioridad a 1973.

⁴⁴ Cf. Altamirano, 1982; p. 3. El artículo de Altamirano hace uno de los análisis más inteligentes de la lógica que impulsó al gobierno militar a lanzarse a la aventura de mediados de 1982 y lo llevó a rehuir un acuerdo con Inglaterra una vez desencadenada la guerra.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Altamirano, Carlos. 1982. "Elecciones de una guerra" *Punto de Vista* V:1; agosto-Octubre.
- Anderson, Perry. 1975. *Lineages of the Absolutist State*. Londres: Verso.
- Canitrot, Adolfo. 1975. "La experiencia populista de redistribución de ingresos, *Desarrollo Económico*, 15-59.
- Canitrot, Adolfo. 1978. "La viabilidad de la democracia, un análisis de la experiencia peronista 1973-1976", CEDES, *Estudios Sociales*, nº 11.
- Canitrot, Adolfo. 1980. "Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina 1976-1981" *Estudios CEDES* 3:10.
- Cavarozzi, Marcelo. 1978. "Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico" *Revista Mexicana de Sociología* 78:4.
- Cavarozzi, Marcelo. 1979. "Sindicatos y política en Argentina 1955-1958" *Estudios CEDES* 2:1.
- Cavarozzi, Marcelo. 1979:2. "Consolidación del sindicalismo peronista y emergencia de la fórmula política argentina durante el gobierno frondizista" *Estudios CEDES* 2:7/8.
- Cavarozzi, Marcelo. 1982. "El sindicalismo argentino entre 1955 y 1981" a ser publicado en un volumen compilado por Ignacio Marván en Alianza Editorial de Madrid.
- Delich, Francisco. Sin fecha. *Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical*. Manuscrito.
- De Riz, Liliana. 1981. *Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista*. México: Folios.
- Jelin, Elizabeth. 1977. "Conflictos laborales en la Argentina. 1973-1976" CEDES *Estudios Sociales* Nro. 9.
- Landi, Oscar. 1978. "La tercera presidencia de Perón: Gobierno de emergencia y crisis política" *Revista Mexicana de Sociología* 78:4.
- Lechner, Norbert. 1981. *Acerca de la razón de estado*. Santiago: FLACSO.
- O'Donnell, Guillermo. 1976. "Estado y alianzas en la Argentina. 1956-1976" CEDES, *Documento de Trabajo* Nro. 5.
- O'Donnell, Guillermo. 1981. "Las fuerzas armadas y el estado autoritario del Cono Sur de América Latina"

en *Estado y política en América Latina*, de Norbert Lechner (comp.) México: Siglo XXI.

O'Donnell, Guillermo. 1982. *El estado burocrático autoritario: 1966-1973*. Buenos Aires: Belgrano.

Offe, Claus & Wiesenthal, Helmut. 1980. "Two Logics of Collective Action: Theoretical Notes on Social Class and Organizational From" *Political Power and Social Theory*; Vol. 1.

Oliveira, Francisco de. 1975. "A economia brasileira: crítica a razão dualista" *Seleções CEBRAP* 1.

Torre, Juan Carlos. 1979. *Sindicatos y trabajadores bajo el último gobierno peronista*. Manuscrito.

Viola, Eduardo. 1982. *Democracia e Autoritarismo na Argentina Contemporânea*. Tesis doctoral presentada a la Universidad de São Paulo.

APENDICE DOCUMENTAL*

* En este apéndice se ha reunido una serie de testimonios de la política argentina del período 1955-1983. Los mismos han sido ordenados cronológicamente y en todos los casos se trata de declaraciones o documentos que fueron cubiertos oportunamente por las diferentes publicaciones periódicas que se citan como fuentes.

El criterio con el que se ha elegido el material ha sido el de refrescarnos la memoria incluyendo manifestaciones poco conocidas de actores relevantes de la política argentina y de ilustrar fenómenos o procesos a través de declaraciones de personajes secundarios que se refirieron a aspectos importantes de ellos.

En un par de casos se han incluido documentos cuya veracidad es dudosa pero que, de todas maneras, reflejan apropiadamente un evento o el clima político de la época respectiva.



1955-1966

Declaraciones de Héctor Di Pietro, secretario general de la CGT, dos días después del levantamiento militar de 1955.

... todo trabajador luchará con las armas y medios que tenga a su alcance para aniquilar definitivamente a los traidores a la causa del pueblo que se han levantado contra el gobierno y los que intentaran hacerlo... (*La Nación*; 19-Set. 1955).

Mensaje por radio de Héctor Di Pietro, secretario general de la CGT, al asumir la presidencia el general Lonardi.

... Confiados los trabajadores en la palabra del presidente deben proseguir trabajando en sus respectivos empleos en paz y tranquilidad contribuyendo al mantenimiento de la producción; deben continuar ejerciendo sus derechos sindicales en forma solidaria y disciplinada acatando únicamente directivas de la CGT sin prestarse a maniobras que tratan de inducir a los trabajadores a perturbar la normalización del país, cooperando así a afianzar el orden y la tranquilidad social para coadyuvar a la realización de los propósitos del gobierno de establecer en el menor tiempo posible la normalidad constitucional de la República. (*La Nación*; 26-Set. 1955).

Mensaje del general Lonardi horas antes de ser forzado a renunciar.

El gobierno está muy lejos de creer que en la Junta consultiva están representadas todas las corrientes de

opinión de la política nacional... El dictador depuesto tuvo indiscutiblemente gran parte del pueblo a favor de su política en determinado momento. En vísperas de su primer período... antes de que las oposiciones exacerbaran su prepotencia y soberbia. No es posible calificar de antipatriotas o partidarios de la tiranía a todos los que prestaron esa adhesión desinteresada y de buena fe. Los delincuentes deben ser castigados más no directamente por la vía administrativa o por particulares celosos sino por obra del Poder Judicial restaurado en la plenitud de su eficacia. El gobierno prefiere que algunos culpables se libren y no que personas desprovistas de culpa padezcan una persecución que no merecen. Ha de quedar una gran mayoría del pueblo en condiciones de participar en la vida cívica sin inconveniente alguno, a pesar de la adhesión, muchas veces obligada, que algunos prestaron al régimen depuesto. Otros han alzado su voz para protestar contra la lenidad de la política del gobierno en relación con las organizaciones obreras. Mi opinión es más categórica aún. En ningún caso dividir a la clase obrera, para entregarla con defensas debilitadas a las fluctuaciones de nuestra economía y nuestra política. La libertad sindical no es la anarquía de las organizaciones obreras ni la supresión o la desnaturalización de los órganos de derecho públicos indispensables para la integración profesional. No es posible disfrutar tranquilos de la existencia aún para los más acomodados si el cimiento social está constituido por una clase laboriosa en que se ha hecho carne la sensación de la injusticia. (*La Nación*; 12-nov-1955).

Declaraciones del Tte. de Navío Cabut, Director Nacional del Trabajo.

...no existen en realidad conflictos entre obreros y patrones, sino una mala interpretación de los métodos a seguir para solucionar esas pequeñas diferencias internas que hay en los establecimientos que llegan a crear lo que se ha llamado conflictos —palabra al parecer fuerte— que tienen su solución cuando se radican en esta dirección o en las regionales. Los directivos de los establecimientos deben saber cómo conducir al personal y la manera de de-

conducir, métodos y normas es lo que nosotros aconsejamos cuando se produce un conflicto. Lo mismo hacemos con la parte obrera indicándoles los métodos a adoptar y la conveniencia de organizarse sin necesidad de que se tomen justicia por su propia iniciativa. A los obreros se les aconseja que no tomen una medida directa antes de haber agotado todos los recursos legales. Terminados estos, entonces puede pensarse que tienen las puertas abiertas para una huelga. Otros de los consejos nuestros cuando se plantean estos conflictos, es recalcar a quienes todavía no lo conocen, porque no se les ha enseñado o porque no han interpretado bien la situación, el concepto de defensa sindical. Tratamos de hacerles comprender, cómo debe ser la organización, cómo deben organizarse, no solo para discutir sino para crear, que es una de las bases más importantes de la organización sindical, planear debidamente los problemas haciéndolos llegar debidamente con posibles soluciones, sin la necesidad de crear inconvenientes. (*La Nación*; 27-dic-1955).

DECLARACIONES DE PARTIDOS Y POLITICOS A LA LLEGADA DE FRONDIZI AL PODER

De la Unión Cívica Radical del Pueblo: Denunciamos la heterogeneidad del frente que logró el triunfo electoral: católicos e incendiarios de iglesias, luchadores por la libertad y quienes la aherrojaron por una década, liberales junto a fascistas y colonialistas... trabajadores que sueñan con una organización gremial sin dependencias de gobierno o partidos y expresiones máximas de la concentración capitalista y los que actúan contra el capital, la empresa y la propiedad privada... se advertirá muy pronto el vértice más agudo del debilitamiento del frente electoral que dio origen al gobierno. (*La Nación*; 12-5-1958).

Del Ministro de Interior, Alfredo Vítoro: Opino que es necesario derogar la ley de residencia y el decreto 4161 de propaganda peronista. No corresponde hablar de terroristas, sino de personas que en el desarrollo de su lucha hayan recurrido a medidas de fuerza. (*La Nación*; 10-5-1958).

Del dirigente conservador, Vicente Solano Lima: La intransigencia quedó atrás para dar lugar a una forma superior de conducción política. Muchos de los planteamientos del actual gobierno coinciden con nuestra manera de pensar. (*La Nación*; 1-jul-1958).

Del vicepresidente Alejandro Gómez: Yo compro los diarios, veo donde hay conflictos, procuro ponerles solución. Conque consiga resolver dos o tres por semana quedo conforme. (*La Nación*; 5-jul-1958).

Del director del Liceo Naval, Francisco Manrique: Nos preguntamos: ¿está el gobierno cumpliendo su parte? ¿están todos los ciudadanos cumpliendo la suya? ¿están los partidos políticos actuando como factores de dinámica democrática? ¿están las fuerzas armadas cumpliendo con su deber? Si estas preguntas fueran objeto de un plebiscito, el país sólo contestaría afirmativamente una de ellas: las fuerzas armadas están cumpliendo... la democracia en acción es un eslabón tras otro de la misma cadena que no puede quebrarse ni por la tiranía que veja ni por la fuerza que también veja, aunque la fuerza resulta ser el menor de los males cuando ya no existen soluciones para vivir de pie. (*La Nación*; 5-jul-1958).

Del dirigente radical del pueblo, Miguel Angel Zavala Ortiz: ...el totalitarismo aparece ahora como estado de derecho. La integración nacional se hace con el propósito de mantener unidos a los sectores antidemocráticos. El frondizismo se hace cada vez más peronista en vez de hacerse el peronismo cada vez más democrático. ... No se hace el banquete de las fuerzas armadas para que el presidente pueda decir que cuenta con la justicia, porque echa a los jueces que no convienen al gobierno; que cuenta con los obreros porque interviene a los sindicatos que no le son adictos; que cuenta con su partido porque lo mantiene intervenido; que cuenta con las fuerzas armadas porque no deja oír su voz en la tradicional fiesta de camaradería. (*La Nación*; 8-jul-1958).

Del dirigente radical del pueblo, Ricardo Balbín: La aventura electoral sirve para llegar, pero no alcanza mucho para quedarse. (*La Nación*; 12-jul-1958).

Declaración de los 32 Gremios "Mayoritarios Democráticos": Cada día se registra un nuevo avance hacia la restauración del peronismo. Las hordas totalitarias se lanzan al asalto de los hospitales. Los sindicatos se hallan frente a la alternativa de defenderse con sus propias manos o ser arrasados por el malón... Los títeres de la tiranía proceden a cortar luz, gaz, y teléfono a los médicos... después de lo cual lo cortarán a cada uno de los ciudadanos democráticos. Cuando tengan en sus manos la CGT nos someterán al sitio económico hasta obligarnos a la rendición. (*La Nación*; 13-agosto-1958).

Discurso del general Solanas Pacheco, secretario de Guerra, a los mandos militares. He notado cierta inquietud en jefes y oficiales por problemas que yo conozco cabalmente. La información ha llegado deformada a los cuadros especialmente por vías no militares. Hay cuestiones que admiten la justa crítica: funcionarios involucrados en negocios no debidamente aclarados e infiltración de marxistas en la administración pública. Pero así como reconozco esto, no admito dudas sobre la franqueza y limpios procederes con los que se conduce el ejército. Hay quienes siembran inquietudes exageradas para subordinar a las fuerzas armadas a los intereses de partidos o personales. La participación del ejército en la solución de los conflictos sociales que amenazan la paz interior es un deber ineludible de su misión al servicio del mantenimiento del orden... Guste o no guste a quienes nos atacan la república descansa hoy sobre sus fuerzas armadas que son su columna vertebral. (*La Nación*; 26-abril-1959).

Arenga del general Solanas Pacheco a jefes y oficiales en Corrientes: Profesionales de la aventura quieren volver las armas de nuestros soldados contra las instituciones de la república... En el campo social los sectores del trabajo no pueden ser abandonados por falsos escrupulos a la prédica disolvente de dirigentes irresponsables cuya finalidad es el desorden y la destrucción. Se han abierto en el país fronteras ideológicas cuya atención es tan de nuestra estricta competencia como la vigilancia de nuestras fronteras geográficas. (*La Nación*; 13-junio-1959).

Informe del presidente Frondizi a los altos jefes de las fuerzas armadas: He recogido la información de los servicios de que hay 68 comunistas en la función pública; 26 son nombrados por el actual gobierno y los restantes por el anterior. Señalo que se hará una amplia investigación para evitar injusticias, pero cuando se compruebe la verdad se les dirá que deben cesar en la función por incompatibilidad con un régimen democrático. El comunismo será declarado definitivamente fuera de la ley en virtud de que el gobierno tiene perfectamente comprobadas sus actividades subversivas e insurreccionales. . . Quisiera agregar con respecto a Buenos Aires que no estoy de acuerdo con la reforma agraria ni con las expropiaciones pero que no se podía tildar por eso al gobierno provincial de comunista. (*La Nación*; 19-ago-1959).

Declaraciones de los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Vandor y Rosendo García, en su entrevista con el ministro Alsogaray a propósito de la huelga metalúrgica y un atentado terrorista en un bar del centro de Buenos Aires: Vandor: declaro mi estupor ante el atentado e informo que la comisión directiva del gremio ha separado de su cargo de protesorero a Moya hasta que se aclare su participación en el atentado. Ahora sí soy optimista con relación al conflicto y en la semana próxima se producirán contactos con los empresarios. Rosendo García: la noticia de Moya me ha producido una pésima impresión; en la UOM no se conocían sus actividades. (*La Nación*; 29-Ago-1959).

Declaración del ex-presidente Aramburu: Estoy en favor de la implantación de un régimen de representación proporcional en el que el peronismo pueda organizarse como partido político sin agitar la bandera del peronismo. (*La Nación*; 19-oct-1959).

Comunicado de un grupo de gremialistas peronistas – Augusto Vandor, Eleuterio Cardozo y Amado Olmos: Hemos decidido la creación de un comando electoral de coordinación del voto en blanco. . . Solamente el gobierno será responsable si las masas obreras se inclinan hacia las ideologías de izquierda. (*La Nación*; 2-febr-60).

Declaraciones del Secretario de Guerra, gral. Rodolfo Larcher, frente a la toma de una comisaría en la localidad santiagueña de Frías por un grupo armado comandado por Uturunco, hecho que había sido calificado por los gobernadores de Santiago del Estero y Tucumán como aventuras de niños malcriados y por el juez interviniente como una parodia: La solución del asunto Uturunco estuvo a cargo de la autoridad civil y yo desconozco los resultados. Advierto que no se le ha dado la importancia que tienen esos hechos; no se ha procedido con la energía y la severidad necesarias. La repetición de esos hechos impondrá la intervención del ejército para lo que se ha ordenado que en el futuro se le dé adecuada solución militar, que no es otra que el combate. . . . La inoperancia de algunos gobiernos provinciales es la causante de esta situación. . . . el ejército debe intervenir cuando quienes deben hacerlo no lo hacen por debilidad. Así cumplirá el mandato constitucional de que las fuerzas armadas deben garantizar la paz interior impidiendo los vandalismos de un plan terrorista. (*La Nación*; 18 y 20-febre-1960)

Declaraciones en un plenario de las 62 Organizaciones Peronistas: Amado Olmos: el nuevo secretario de Trabajo, Puente, ha agraviado a la clase obrera cuando en 1952 como delegado a la OIT había pronunciado un discurso donde encomiaba a las políticas peronistas. Jorge Elías: Las 62 resignarán su denominación una vez constituido el nuevo nucleamiento unitario en homenaje a la unidad total de la clase obrera. . . . Es cierto que los legisladores peronistas aprobaron el Plan Conintes en 1948 pero ahora los jueces permiten su aplicación contra los trabajadores. Eleuterio Cardozo: La clase obrera tiene como objetivo conquistar el gobierno por el camino de la legalidad. (*La Nación*; 22-may-1960).

Declaraciones del secretario de Trabajo, Galileo Puente: Al hacerme cargo encontré abusos, extralimitaciones y anarquía de todo orden de los obreros. Los empresarios habían perdido el comando de las fábricas; todo lo disponían las comisiones internas; mandaban los que tenían que obedecer debido a una mala interpretación del sindicalismo. Las primeras planas de los diarios

estaban llenas de los nombres de Vandor, Framini, las 62, el MUCS; eran los protagonistas principales y por eso impresionaban a la masa que acataba sus directivas por miedo o por sugerión. Ahora hemos desinflado a esos dirigentes y la masa no los acompaña más en sus aventuras políticas... Además no se admiten más las arbitrariedades de las comisiones internas porque los empresarios deben retomar el comando de las fábricas. (*La Nación*; 23-may-1960).

Discurso del secretario de Guerra, Gral. Larcher, el día del Ejército: Las fuerzas armadas son la columna vertebral de la república. Las vértebras están cerca de la cabeza; la sostienen pero no pretenden reemplazarla. La patria no es hija de los políticos, sino de la espada. (*La Nación*; 3-jun-1960).

Documentos internos del ejército del 14 y 15 de Marzo de 1960: El ejército actúa apartado de todo interés partidista y se sitúa en el nivel institucional. El gobierno nacional con su línea política integracionista inicial estimuló las apetencias peronistas. Esta línea fue abandonada por la presión de las Fuerzas Armadas que abominaron siempre todo estímulo al peronismo... El proceso electoral actual puede considerarse desquiciado para el normal desarrollo de la recuperación moral del país. Pero es inevitable porque la Constitución obliga a la consulta... Exhibirnos con una nueva dictadura militar ante el mundo nos traería un descrédito definitivo, moral, político y económico. De una u otra manera esta situación conduciría a un retorno de masas exaltadas que nos llevaría a una situación análoga a la de Cuba... La recuperación debe hacerse en clima de tranquilidad y dentro del marco constitucional... El peronismo no es un partido sino un conglomerado de delincuentes vinculados entre sí, con sentido de poder y cuyo objetivo es retornar al estado totalitario. Esto no puede ser admitido por las Fuerzas Armadas identificadas absolutamente con los fines de la Revolución Libertadora. Sea cual fuere la fuerza electoral del peronismo, la cantidad de votos en blanco, las Fuerzas Armadas impedirán el retorno peronista inclusive con la lucha... En caso de catástrofe nacional o de acefalía política el Ejército podrá siempre asumir el control supremo del orden y

aún el poder político si esto fuera una necesidad ineludible. . . . La descomposición de las dictaduras en el continente es fatal. No es posible que la Argentina involucione porque no haya podido vencer sus problemas políticos. . . . Deben los altos mandos contribuir a esclarecer la situación a los oficiales jóvenes. Que no se dejen influenciar por las presiones que todos soportamos incluso de hombres bien intencionados que golpean a la puerta de los cuarteles pero que están profundamente equivocados. (*La Nación*; 29-jun-1960).

Memorial entregado por las 62 Organizaciones en una entrevista con el Comandante en Jefe del Ejército, gral. Carlos Severo Toranzo Montero: Estructura y fines de las 62: Constituyen un movimiento gremial en defensa de los intereses del trabajador que es de extracción cristiana y de esencia nacional. . . . Si bien su función específica es la gremial no permanece indiferente al desarrollo de los restantes sectores del país, aspirando a participar en la solución de los grandes problemas nacionales y llegar a constituir un factor de gravitación en la conducción del país, en la gran política orientadora y en la custodia de su patrimonio y su acervo histórico como soldado de la soberanía, la justicia y la libertad. Ideológicamente en su seno se cobijan diversas corrientes, todas con sentido doctrinario de profunda raigambre nacional que hacen a su vez un gran movimiento patriótico que en su andar conforman actualmente la única esperanza civil. Nuestro movimiento contiene reservas existentes con fuerza real de combate para contener primero y extirpar después las corrientes internacionales del imperialismo ideológico, en especial el comunismo y su paralelo el trotkismo. . . . Como nuestros representados tienen un profundo sentido nacional en su formación ciudadana y además de asalariados son trabajadores con real concepto de patria, por lo que no les es igual trabajar en una empresa extranjera que para una nacional, aunque le paguen más en la primera, sin caer en nacionalismo extremo, en el cual se cobijan reaccionarios de todo tipo. Como fuerza popular no puede ser impermeable a la elección de sus gobernantes y conocidas sus plataformas su conducta anterior y su tradición se expiden sobre ellas o sobre ninguna. (*La Nación*; 9-febr-1961).

Comunicado de la CGT de Córdoba al arzobispo y los jefes militares en relación a la entrevista del presidente Frondizi con el "Che" Guevara: Criticamos la inclinación internacionalista de extrema izquierda que muy hábilmente por cierto se le imprime al quehacer nacional. . . . Se produce un enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno con inclinaciones de poner en el medio a las fuerzas armadas y la Iglesia con la actitud del Poder Ejecutivo Nacional. . . . El presidente de la Nación tendrá facultades para recibir la visita que más le agrade, pero debe tener presente que pueden ser inoportunas para la tranquilidad del pueblo porque una sola de ellas puede crear un estado psicológico inconveniente para nuestra forma republicana. (*La Nación*; 16-set-1961).

- *Discurso del tte. cnel. Vara con motivo de celebrarse el día de la infantería:* Se perciben en el ambiente declaraciones de guerra en que dirigentes y políticos amnistados, que no significa absueltos de culpa y cargo, pretenden el acceso al poder en el que mancillaron el honor y la dignidad de los argentinos. . . . Está muy lejos de nuestro espíritu realizar interferencias o presiones sobre el libre juego de las instituciones jurídicas pero apreciamos que tras tanta discusión y dialéctica está el propósito de crear un clima subversivo y la justificación de un movimiento revolucionario. No admitimos otra fuerza armada que no sea la nuestra, que es la constitucional, y no admitimos otra solución de fuerza que no sea la que nosotros impongamos si se hace necesario en bien de la patria. (*La Nación*; 2-oct-1961).

Carta de Perón a Frigerio, 10-Jul-1962: Han habido desviaciones hacia un partido clasista, esto se ha manifestado por parte de muy contados dirigentes sindicales que yo he aprovechado para frenar interferencias y desviaciones de algunos dirigentes políticos. . . .

Nosotros somos y sabemos que representamos un Movimiento Nacional, por lo que ni aún cuando estuvimos en el gobierno se nos ocurrió formar con él un partido político; siempre consideramos necesario mantener el sentido nacional en nuestra actividad política, porque el sectarismo no ha sido nunca defecto del Justicialismo y porque sabemos que el sectarismo es un

factor endémico de debilidad. (*Correspondencia Perón-Frigerio*)

Entrevista al general Perón después de las elecciones presidenciales de 1963.

Primera Plana: Cuando se habla del peronismo como movimiento revolucionario, ¿ello se refiere a la amplitud de los cambios que preconiza o a sus métodos de lucha para la reconquista del poder?

Perón: Bueno, eso depende de quién lo dice: para unos es la transformación profunda de la comunidad, para otros es el golpe de estado. El diccionario admite ambas cosas. Pero cuando yo hablo de revolución me refiero a lo primero: en un mundo que evoluciona aceleradamente, no comprendo cómo puede estarse detenido, o retroceder, sin provocar el caos. Por lo demás, el peronismo realizó, entre 1945 y 1955, una revolución que transformó al país; pero llegó al gobierno por el voto de los argentinos y no por el empleo de violentos medios de lucha, como sucedió en 1955, cuando el peronismo fue despojado de su legítimo poder.

Primera Plana: En el país se ha restablecido la Constitución de 1853, a pesar de la impugnación peronista. También sus adversarios objetaron la Constitución de 1949, pero tuvieron que acatarla. En definitiva, ¿usted acepta la presente legalidad como el único punto de partida posible? ¿Prescribe a sus partidarios la necesidad de someterse a ella?

Perón: Eso es un sofisma. Sócrates, cuatro siglos antes de Cristo, ya definía el sofisma: cuando se acepta una afirmación falsa sobre la cual se apoyará luego una conclusión, que después resulta aparentemente justa. Usted da por aceptado que la reforma del 49, realizada de acuerdo con todos los preceptos constitucionales, fue lo mismo que hicieron los gorilas en 1956, cuando derogaron la Constitución por decreto y reunieron una Constituyente de la que estaba ausente el pueblo argentino. ¿Pueden los dos actos tener el mismo valor? Yo no acepto ni dejo de aceptar esta legalidad *sui generis*. No es asunto mío, sino del pueblo argentino. Pero el pueblo no puede manifestarse, porque carece de reales y fehacien-

tes representantes, elegidos sin proscripciones y sin estatutos trampa.

Primera Plana: ¿Advierte usted en el actual gobierno —sean cuales fueren las críticas que puede merecerle por su origen— la voluntad sincera y el dominio efectivo para depurar de toda discriminación la vida política argentina? ¿Admite que ello no es fácil y que exige buena voluntad por ambas partes?

Perón: Advierto todo eso y mucho más. Lo que no veo son los actos. Para nosotros, ya se sabe, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar...

Primera Plana: Hay un nuevo estatuto de los partidos. Algunos legisladores neo-peronistas convinieron en que es equitativo.

Perón: Ese proyecto podrá ser elogiado por las minorías a cuyo servicio está redactado, o por algunos neo-peronistas, que son otra minoría. Pero lleva un germen de discriminación, y tanto el Consejo Coordinador como las 62 Organizaciones lo han denunciado. Yo estoy completamente de acuerdo con ese juicio.

Primera Plana: Algunos peronistas juzgan incoherente la conducción del movimiento. Por ejemplo, se derribó al anterior gobierno constitucional, venciendo en las elecciones del 18 de marzo de 1962, y luego se aceptó integrar el Frente Nacional y Popular con la UCRI.

Perón: A Frondizi no lo derribamos nosotros, sino los militares. Con elecciones o sin ellas, tarde o temprano ese gobierno se caía. La situación era insostenible. Pero no hubo rectificación alguna en la conducta del peronismo. El Frente no era sino un recurso electoral frente a la arbitrariedad y a la violencia.

Primera Plana: ¿No reconoce usted ese esfuerzo que hicieron los oficiales azules para eliminar el espíritu “gorila”?

Perón: Lo reconozco. Los gorilas llevaban el país a la guerra civil y fueron detenidos. Pero los jefes y oficiales

azules se quedaron a mitad de camino. Faltó la ecuanimidad indispensable para un entendimiento constructivo en favor de la pacificación del país

Primera Plana: Desde luego, el estado de opinión de las fuerzas armadas no admitía en ese momento una reivindicación total del peronismo. ¿Cree usted que fue prudencia o cobardía no acordar a su movimiento sino una participación electoral limitada?

Perón: No me interesa saber si fue prudencia o cobardía. Me basta con entender que los azules ganaron la batalla de abril, pero perdieron la del 7 de julio. Quedaron a foja cero. Y el país está pagando las consecuencias. Yo no alcanzo a comprender los designios de algunos hombres que, ofuscados por lo anecdótico, olvidan que ante todo está el país.

(*Primera Plana*; 21-abr-1964).

Documento de la CGT sobre el Plan de Lucha

La realidad en la República solo se determina para los trabajadores con:

Las detenciones, los allanamientos, las presiones oficiales, negando homologación a actos cubiertos por la Ley, el retiro de personerías, el reclutamiento de grupos organizados para introducir la discordia en los sindicatos, con hechos reales que ha conocido la opinión pública, gestados desde las esferas estatales, quienes instrumentaron medidas tendientes a disolvernos, porque vieron en la actitud del Movimiento Sindical Organizado, no sólo a ciudadanos que reclaman derechos sino que se constituyan en fiscales en etapas decisivas o cruciales de la Patria, en las cuales era necesario el silencio y el ocultamiento, para consumar hechos que endeudaron e hipotecaron a nuestra Nación.

El Ministerio de Trabajo se constituyó en el cuerpo de avanzada tendiente a fulminar el movimiento obrero, mutilando o cercenando sus derechos, situándolo en algunos casos por medio de sus recursos económicos, mediante el retiro de sus personerías en un intento de

someterlo a sus caprichos y al de sus mandantes, a fin de entregarlo finalmente maniatado ante el capitalismo nacional e internacional y del Fondo Monetario, que exigen hambre y necesidad a cambio de préstamos.

Los derechos de elegir y ser electos fueron doblemente burlados y escarnecidos por los grupos que gobiernan, proscribiendo arbitrariamente sectores de la vida nacional, negando primero y desconociendo después, el veredicto popular, borrándose, como consecuencia de ello, las garantías constitucionales.

Sectores militares sin consultar al pueblo y manejando a sus ciudadanos como cosa propia dispusieron el envío de soldados en naves argentinas en defensa o en ataque de intereses, a países y posiciones que no queremos entrar a juzgar en forma parcial o ligera; pero sobre las cuales la única decisión soberana y valedera es la que debe pronunciar el pueblo, a quien se lo mantuvo como mero espectador. (*El cambio total de las estructuras económicas*; enero de 1963).

Declaración de la CGT frente al paro nacional de diciembre de 1964.

La radiografía nacional es bien conocida: Miseria –desocupación– desnutrición –retroceso cultural– crisis financiera y económica –hipoteca internacional– relajamiento y limitación de nuestra soberanía –sintetiza a un gobierno incapaz, falto de visión, con crisis de fe, desmoronamiento de nuestras instituciones y desintegración de nuestro acervo nacional.

Los conflictos estudiantiles, las marchas de hambre, las fábricas cerradas, la falta de productos alimenticios, la mayor parte de la prensa con sus imprentas paralizadas, gran cantidad de gremios en huelga, el derroche de nuestras divisas, los viajes proselitistas de representantes del gobierno en actitud de derroche y mendicante, la importación de productos que pueden elaborarse en el país; son algunos de los cientos de problemas a encarar y que se acumulan a los restantes que el país tiene en lo económico, social y político. (*La Nación*; 10-dic-1964).

Declaración de la CGT al producirse el golpe de junio de 1966: La Confederación General del Trabajo, que no puede constreñirse al papel de mera espectadora de los procesos sociales, políticos y económicos de nuestro País, lo que significaría eludir la responsabilidad que su representatividad le confiere, ante un nuevo hecho que altera sustancialmente el estado de cosas imperante hasta el día lunes 27 ppdo., considera ineludible asumir y ejercer el derecho de emitir su opinión al respecto ante la clase trabajadora y ante la Nación.

En tal sentido, dos aspectos tienen que ser debidamente considerados y evaluados a fin de emitir responsablemente la opinión de esta Central Obrera: primero, por qué se produjo la crisis que suplantó al Gobierno en la noche del 27 del corriente, y luego, qué espera nuestro movimiento de esta nueva instancia de nuestra coyuntura nacional.

En el primer aspecto, bastaría con reproducir literalmente las reiteradas y expresas advertencias que públicamente formulara esta Central a los Poderes Públicos, que ejercían el gobierno nacional; ello de por sí pondría en evidencia que el estado caótico en lo social, político y económico, engendraban día a día la falencia del poder constituido, la falta de autoridad y la carencia total de representatividad.

Una vez más, el caos fagocitaba a sus responsables. Una vez más un gobierno fue víctima de sus propios actos.

La Confederación General del Trabajo no se regocija por esto. No es responsable de lo acontecido. Opinó cuantas veces fue necesario; peticionó y exigió las soluciones mínimas indispensables para los trabajadores y el País; luchó por esas soluciones en las calles y allí dejó el testimonio doloroso de las víctimas inocentes abatidas por un sistema que negó soluciones humanas e ineludibles; no colaboró en el ascenso al poder de ese gobierno.

El movimiento militar que el 27 de junio tomó el Poder, constituye un hecho nuevo e históricamente asume una gran responsabilidad, ante la atenta expectati-

va que indiscutiblemente ha concitado en el país. ¿Qué se espera de esta nueva etapa de la vida nacional? La Confederación General del Trabajo, en representación del movimiento obrero, le plantea objetivamente sus puntos de vista al respecto.

En primer lugar, sostenemos la necesidad impostergable de rehacer la unidad nacional, destruyendo para siempre el concepto antihistórico de réprobos y elegidos: la eminent condición humanista y de fuerte contenido nacional de nuestro movimiento, exige una clara y leal actitud positiva que, desterrando el odio sembrado por los ideólogos de la desunión, reivindique la dignidad de los argentinos en la comunión de los superiores intereses nacionales, dentro de un ámbito de libertad y justicia social.

En definitiva, al filo de la partida de una nueva etapa histórica nacional, la C.G.T., consciente de su responsabilidad propone soluciones y demanda la participación que le corresponde en un verdadero proceso de progreso argentino. La expectativa general intuye que es menester arrancar de esta hora cero hacia el futuro que todos ambicionamos. (*Clarín*; 30-jun-1966).

Discurso del sgral. Lanusse en el Centro de Instrucción Logística.

El hombre argentino que desea mejorar su situación económica de golpe quiere hacerse rico; es ese hombre argentino que hoy lo encontraremos manifestando en las expresiones que podemos escuchar en cualquier ámbito, ya sea en conversaciones con industriales, con financieras, con hombres de empresa, con hacendados y hasta con eclesiásticos, que al ver que el Gobierno no desarrolla la política acorde con sus propias ideas políticas, enseguida no piensa que la solución puede ser lograda por los procedimientos democráticos, sino que cae enseguida en la tentación de pensar en la necesidad de la intervención de las Fuerzas Armadas diciendo con una ligereza propia de irresponsabilidad e inconciencia que 'Esto no puede seguir así, que son las Fuerzas Armadas las que tienen que hacerse cargo de la situación para

imponer el orden, que no pueden éstas permanecer al margen de la situación'. Así, consciente e inconscientemente pretenden influir en nuestro ánimo para inducirnos a que nuevamente las Fuerzas Armadas intervengan en la vida política del país.

No tengo ninguna duda de que esto es lo peor que le puede pasar a las Fuerzas Armadas. . .

Tenemos que proceder en forma tal de que si se diera el caso de que quienes cayeron en abril del año pasado pudieran estar hoy con nosotros y preguntarnos la razón de su sacrificio debemos proceder, digo, en forma tal que sin ninguna dubitación estemos en condiciones de responderles que su sacrificio hizo posible el reencauzamiento en la vida institucional de nuestro país, que su sacrificio hizo posible que el país volviera a tener un gobierno surgido de elecciones y que su sacrificio nos sigue comprometiendo hoy, como siempre, a sostener ese orden institucional, a jugarnos cuantas veces sea necesario por el imperio de la Constitución y las leyes.

El fracaso de este régimen institucional que existe hoy en el país, que es el producto de las elecciones que se realizaron el 7 de julio de 1963, por voluntad de las Fuerzas Armadas, puede llegar a ser el fracaso de éstas; con esto va dicho en forma suficientemente clara, cómo debe y está dispuesto el Ejército a defender este régimen institucional. No deben sorprendernos ni afectarnos las versiones antojadizas que hoy corren y que hacen aparecer a determinados oficiales superiores con propósitos o intenciones no acordes con los esfuerzos que realiza la institución. Debemos tener plena conciencia de que la cohesión y la disciplina que son hoy realidad en el Ejército, molestan, son motivo de preocupación para quienes no desean que se materialicen los objetivos perseguidos durante las luchas de los recientes años. . .
(La Nación, 5-Jul-1964).

Discurso del general Onganía, Comandante en Jefe del Ejército, en West Point, EE.UU.

El sometimiento de las instituciones armadas a los poderes constituidos, hace a la esencia de la organización política americana, toda vez que sus gobiernos reposen sobre el principio de la soberanía del pueblo y que los

poderes republicanos son los únicos en que la voluntad popular ha delegado el ejercicio de la autoridad.

Las fuerzas armadas son el brazo fuerte de la Constitución y ésta sobrevive, en tanto y cuanto se desenvuelva en forma natural y pacífica, el ejercicio de los poderes de gobierno que sus normas estatuyen; no es, pues, legalmente conceible que ese brazo, creado precisamente para sostenerla, se vuelva para sustituir, injustamente, a la voluntad popular...

Es preciso hablar sin eufemismos, con el lenguaje preciso y directo que caracteriza al diálogo entre los hombres de armas.

La subordinación es debida a la autoridad del gobierno en cuanto ésta emana de la soberanía popular, en cuyo nombre la ejerce, conforme a los preceptos constitucionales. El acatamiento es debido y referido en última instancia a la Constitución y a sus leyes; nunca a los hombres o a los partidos políticos que circunstancialmente pudiesen detentar el poder público.

Si esto fuese así, quedaría trastocada la misión fundamental que compete a las Fuerzas Armadas; dejarían de ser apolíticas y se convertirían en guardias pretorianas al servicio de determinadas personas o agrupaciones políticas...

Está claro entonces, que tal deber de obediencia habrá dejado de tener vigencia absoluta, si se produce al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad que signifique la conculcación de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, o un violento trastocamiento en el equilibrio e independencia de los poderes, o un ejercicio de la potestad constitucional que presuponga la cancelación de las libertades y derechos de los ciudadanos.

En emergencias de esa índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrían, ciertamente, mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertiría en instrumentos de una autoridad no legítima, ya que es de toda evidencia el hecho de que contra el sistema de la democracia representativa, puede atentarse con menor efectividad desde el llano que desde el gobierno. (*La Nación*, Buenos Aires, 7 de agosto 1964).

Artículo del tte. cnel. Alberto Garasino:

Para la ruptura de la legalidad han intervenido siempre, en la Argentina, tres factores objetivos: Gobierno, Fuerzas Armadas y un *clima* o *ambiente* previo de agitación en la población civil, que al conjugarse en un determinado punto del proceso han precipitado la caída de las autoridades de turno. El Gobierno 'interviene' con sus errores y su apatía, galvanizando a la oposición y desalentando a sus propios partidarios; los partidos políticos y los factores de poder, auxiliados por la prensa importante, crean el clima que hace aceptable el salto en el vacío, y, finalmente, las Fuerzas Armadas actúan provocando la caída final...

Exceptuando el período presidencial frondizista, en cuyo lapso las autoridades militares abandonaron el papel tradicional de caja de resonancia, para convertirse en mayor o menor grado en partidarios definidos de la formación del clima necesario para la propia intervención....

Las Fuerzas Armadas han comenzado a ser vinculadas otra vez, en el comentario público, con un golpe de Estado. La ola de rumores, vaga y dispersa durante los últimos meses, pareció haberse afirmado con la llegada de julio, coincidiendo así con el ya clásico período anual de las grandes perturbaciones políticas...

Es la primera aparición de los primeros intentos serios de concretar el tercer elemento, el ambiente de golpe...

En la medida en que pierda prestigio por incapacidad para resolver los problemas de orden general, precipitará la creación del clima necesario para que esa legalidad fracase, o para que la opinión pública dude de la misma como elemento clave en la vida nacional....

Otra nota característica del mecanismo golpista en la Argentina es que los errores gubernamentales no logran por sí mismos producir un derrocamiento a plazo breve, y, por lo tanto, es necesario subrayarlos repetidamente con dos acusaciones que tienen una profunda repercusión en la sensibilidad general: 'infiltración comunista' y 'corrupción'. El país asiste ahora a la apertura de esos frentes, y si esa acción se consolida, las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido otras veces, serán el blanco de una intensa acción psicológica destinada a conmover sus fibras nacionalistas y su sentido moral. Luego deberán descubrir, en los momentos decisivos, cuál es la dosis de verdad que encierran campañas de ese tipo.

El panorama se complica porque existen actualmente equipos civiles autónomos que, en previsión del golpe que creen ineludible, preparan por su cuenta planes de gobierno para ser ofrecidos a las Fuerzas Armadas, a las que consideran, simultáneamente, inevitables ocupantes del poder e inhibidas de trazar sus propios programas de acción. (*Confirmado*, 23-jul-1965).

Acta de una presunta reunión del COMISE

En la ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre de 1964, siendo las 18,30 horas, se reúne el Consejo Militar Secreto (COMISE), en sesión periódica ordinaria, bajo la presidencia de S.E. el señor secretario de Guerra, general de brigada (R.E.) D. Ignacio Avalos, e integrado en la oportunidad por el señor Comandante en Jefe del Ejército, teniente general Juan Carlos Onganía; general de división D. Pascual A. Pistarini; generales de brigada Jorge Shaw, Juan N. E. Iavicoli, Osiris G. Villegas y Adolfo C. López, y coroneles Roberto M. Levingston, Edgard Sidney Collin y D. Luis A. Betti.

Considerando:

- 1) Las exposiciones realizadas por el señor general López y el señor coronel Levingston, sobre las situaciones políticas internacional e interna, de las cuales se desprenden:
 - a) Un aumento previsible, a corto plazo de la tensión entre Occidente y el mundo socialista.
 - b) La posible y rápida cubanización del proceso revolucionario boliviano.
 - c) El constante y progresivo deterioro de la situación política e institucional argentina, con las consiguientes repercusiones en los campos económicos y sociales.
 - d) La carencia evidente de un adecuado plan de gobierno por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
 - e) La aparición de síntomas de corrupción administrativa organizada, que comienzan a afectar la imagen creada en torno al Dr. Illia.
 - f) La falta de un adecuado e inteligente respaldo partidario al Poder Ejecutivo Nacional.
 - g) La vigorización del peronismo en lo que hace al

espíritu de lucha y voluntad de irrumpir en la vida cívica nacional a cualquier precio.

h) El conocimiento concreto de la voluntad de Perón de influir con su presencia en el proceso político nacional.

i) El fracaso de la solución final del caso Perón (Operación Aurora).

j) El fracaso electoral que pueden presentar para el gobierno las elecciones de marzo próximo.

k) El proceso de imprevisibles consecuencias que puede desencadenar ese fracaso.

l) El conocimiento concreto de aspiraciones en el campo 'colorado', con ramificaciones en las esferas oficiales.

m) La falta de garantías que ofrecen las negociaciones con representantes oficiosos del peronismo, respecto al condicionamiento de la actuación de este movimiento en la política interna o su no ingерencia en la política exterior del país (acápite A) del capítulo II; su actitud ante los movimientos populares (de la resolución conjunta final de la última conferencia de comandantes en jefe de ejércitos americanos).

n) La debilidad manifiesta en la conducción política superior de las otras fuerzas, circunstancia que grava desfavorablemente sobre sus respectivos cuadros y desplaza el centro de gravedad de la responsabilidad sobre la fuerza del Ejército.

o) La repercusión desfavorable en los cuadros del Ejército de todos los puntos enunciados precedentemente.

2) Los informes de los señores coronellos Collin y Betti, referentes a sus conversaciones oficiosas con los doctores Atilio Palmero y Germán López, de los cuales se desprende:

a) Existe un infundado optimismo en las esferas del Gobierno respecto a las posibilidades electorales del partido gobernante, en marzo próximo.

b) Análoga situación con respecto a la posibilidad de neutralizar a la C.G.T. y al sector denominado 'Las 62'.

c) Falta de sentido de la realidad nacional y en particular en sus campos de acción por parte de los citados funcionarios.

3) Las obligaciones que impone la resolución conjunta final de la última conferencia de comandantes en jefe de los ejércitos americanos, respecto a la necesidad de mantener, a cualquier precio, las situaciones de equilibrio interno creadas en los respectivos Estados, con el fin

de asegurar las mejores condiciones de intervención ante cualquier foco subversivo internacional.

4) La impresión recogida por los señores generales Pistrini e Iavicoli en sus recientes visitas a México y Perú respecto a los peligros de una generalización del proceso revolucionario comunista en América Latina, lo cual obliga a alertar sus propias fuerzas.

Dentro de los fines superiores de lo establecido en los acuerdos internacionales suscriptos dentro del marco de la Organización de Estados Americanos y ratificados en la última conferencia de comandantes en jefe de ejércitos americanos.

Se resuelve:

I) Hacer llegar al Poder Ejecutivo Nacional, en forma oficiosa y a título de sugerencia personal, las inquietudes que se desprenden de los acápite c), d), e), f), g), h), j), k), y o).

II) Sondear el pensamiento del Dr. Illia respecto a las posibilidades de reorganizar su gabinete conforme a las necesidades del actual momento y dentro de una línea extrapartidaria y afín con los intereses de la defensa nacional.

III) Adecuar la reorganización del ejército en cuanto hace a nombramientos y designaciones, adaptándolo a las posibilidades de tener que enfrentar y conjurar una situación de crisis total durante los primeros meses de 1965.

IV) Organizar, con carácter de primera urgencia, la operación Crepúsculo, con el fin de dar solución final e integral al problema.

V) Estimular la creación dentro del peronismo de nuevas líneas internas condicionadas a los objetivos externos del país, aprovechando para ello la influencia de personalidades dentro del propio movimiento, como las del doctor Matera y Sapag.

VI) Comenzar los contactos en forma oficiosa y reservada con las otras fuerzas, respecto al cumplimiento del punto III de esta resolución.

VII) Fijar como fecha tope para la ejecución de esta resolución el día 2 de diciembre próximo, para lo cual:
a) La ejecución de los puntos I y II resultan ser de competencia.

b) La ejecución de los puntos III y VI resultan ser de

competencia exclusiva del señor Comandante en Jefe del Ejército.

c) La ejecución de los puntos IV y V es de competencia exclusiva del señor coronel D. Roberto M. Levingston. (*Epocha*; Montevideo, 13-agosto-1964).

Informe de una presunta reunión de jefes militares en el Comando en Jefe del Ejército meses antes del golpe de 1966.

Pistarini. Se vienen las elecciones de 1967 y 1968 y los peronistas nos van a taponar a votazos. Y el gobierno anda a los tumbos, sin acertar una. Y encima de todo, exhibe falta de autoridad.

Caro. Yo he sido uno de los tres generales con Rauch y Onganía, que encabezamos el movimiento legalista azul. Entonces, en setiembre y abril, cuando presidía Guido, echamos a más de 400 oficiales por querer hacer lo mismo que ustedes pretenden ahora. Y eso que ellos tenían más argumentos, justificativos más legítimos, porque nosotros, para decir la verdad y no engañarnos con filosofías, defendíamos un gobierno endebil, que sin nosotros se caía solo, soplándole un poquito no más. ¿Qué justificaciones les daremos ahora a esos oficiales? No, señores, yo no me cambio de divisa. No pienso borrar con el codo lo que escribí con la mano y que nos costó bastante sangre. Y no era sangre de enemigos de la patria. Era sangre de hermanos nuestros, de conscriptos, suboficiales y oficiales. De modo que, señor comandante en jefe, si usted piensa dar el golpe, desde este mismo momento le pido formalmente mi retiro.

Iavicoli. Pero negro, vos entendiste todo mal. Agarraste para el lado de los tomates. Esto es sólo una conversación amistosa, para cambiar ideas, nada más. No hay nada resuelto. No hay nada inmediato. A lo mejor las cosas se arreglan y aquí no ha pasado nada. Créeme negro, estás ofuscado y no la pescaste bien. Estás totalmente erróneo (sic).

Alsogaray. Si vos me decís como paramos a los peronistas, yo te aseguro que nos quedamos quietos.

Caro. Le reitero, mi general, que en el momento que se decida a dar el golpe tendrá automáticamente mi pedido de retiro. Quiero salir por la puerta ancha... con la frente alta... Yo respeto la ley y la Constitución... Y no me olvido, vuelvo a repetírselo, que salimos con los tanques y derramamos sangre porque queríamos, de una vez por todas, la legalidad y que dejáramos de politiquear en los casinos (de oficiales)...

Pistarini. Pero Caro, terminela... ¿O usted cree que soy un golpista?

Caro. Bueno, mi general, por las cosas que usted acaba de decir, creo que se inclina por esa salida. (*Inédito*, 27-Sept-1967).

Acta del derrocamiento del Presidente Illia.

En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 5.20 horas del día 28 de junio de 1966, en el despacho del Exmo. Sr. Presidente de la Nación Argentina, doctor Arturo U. Illia, se encuentran reunidos acompañando al Primer Magistrado ministros, secretarios de Estado, secretarios de la presidencia, subsecretarios, edecanes del señor Presidente, legisladores, familiares y amigos.

El señor Presidente de la República se encuentra firmando un documento, mientras que un colaborador aguarda a su lado para hacerse dedicar una fotografía. En ese instante irrumpen en el despacho un general de la Nación, precedido por el jefe de la Casa Militar, brigadier Rodolfo Pío Otero, una persona de civil y algunas otras con uniforme militar. El mencionado general se ubica sobre el lado izquierdo del señor Presidente y pretende arrebatar una fotografía que el doctor Illia se apresta a firmar...

El Presidente de la República impide con gesto energético semejante actitud, produciéndose entonces el siguiente diálogo:

General: ¡Deje eso! ¡Permitame...!

Varias voces: ¡No interrumpa al señor Presidente!

Presidente: ¡Cállese! ¡Esto es mucho más importante que lo que ustedes acaban de hacer a la República! ¡Yo no lo reconozco! ¡Quién es usted?

General: Soy el general Alsogaray.

Presidente: ¡Espérese! Estoy atendiendo a un ciudadano. ¿Cuál es su nombre, amigo?

General: ¡Respéteme!

Colaborador: Miguel Angel López, jefe de la secretaría privada del doctor Caeiro, señor Presidente.

Presidente: Este muchacho es mucho más que usted, es un ciudadano digno y noble. ¿Qué es lo que quiere?

General: Vengo a cumplir órdenes del comandante en jefe.

Presidente: El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas soy yo; mi autoridad emana de esa Constitución, que nosotros hemos cumplido y que usted ha jurado cumplir. A lo sumo usted es un general sublevado que engaña a sus soldados y se aprovecha de la juventud que no quiere ni siente esto.

General: En representación de las Fuerzas Armadas vengo a pedirle que abandone este despacho. La escolta de granaderos lo acompañará.

Presidente: Usted no representa a las Fuerzas Armadas. Sólo representa a un grupo de insurrectos. Usted, además, es un usurpador que se vale de la fuerza de los cañones y de los soldados de la Constitución, para desatar la fuerza contra el pueblo. Usted y quienes lo acompañan actúan como salteadores nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada.

General: Señor pres. . . Dr. Illia. . .

Varias voces: ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente!

General: Con el fin de evitar actos de violencia le invito nuevamente a que haga abandono de la Casa.

Presidente: ¿De qué violencia me habla? La violencia la acaban de desatar ustedes en la República. Ustedes provocan la violencia, yo he predicado en todo el país la paz y la concordia entre los argentinos, he asegurado la libertad y ustedes no han querido hacerse eco de mi predica. Ustedes no tienen nada que ver con el ejército de San Martín y Belgrano, le han causado muchos males a la Patria y se la seguirán causando con estos actos. El país les recriminará siempre esta usurpación, y hasta dudo que sus propias conciencias puedan explicar lo hecho.

Persona de civil: ¡Hable por usted y no por mí!

Presidente: Y usted, ¿quién es, señor. . .?

Persona de civil: ¡Soy el coronel Perlinger!

Presidente: ¡Yo hablo en nombre de la Patria! ¡No estoy aquí para ocuparme de intereses personales, sino elegido por el pueblo para trabajar por él, por la grandeza del país y la defensa de la ley y de la Constitución Nacional! ¡Ustedes se escudan cómodamente en la fuerza de los cañones! ¡Usted, general, es un cobarde, que mano a mano no sería capaz de ejecutar semejante atropello!

General: Usted está llevando las cosas a un terreno que entiendo no corresponde.

Dr. Edelmiro Solari Yrigoyen: ¡Los que somos hijos y nietos de militares nos avergonzamos de su actitud!

Presidente: Con este proceder quitan ustedes a la juventud y al futuro de la República la paz, la legalidad, el bienestar...

General: Doctor Illia, le garantizamos su traslado a la residencia de Olivos. Su integridad física está asegurada.

Presidente: ¡Mi bienestar personal no me interesa! ¡Me quedo trabajando aquí, en el lugar que me indican la ley y mi deber! ¡Como comandante en Jefe le ordeno que se retire!

General: ¡Recibo órdenes de las fuerzas armadas!

Presidente: ¡El único jefe supremo de las Fuerzas Armadas soy yo! ¡Ustedes son insurectos! ¡Retírense!...

Perlinger: Señor Illia, su integridad física está plenamente asegurada, pero no puedo decir lo mismo de las personas que aquí se encuentran. Usted puede quedarse, los demás serán desalojados por la fuerza...

Presidente: Yo sé que su conciencia le va a reprochar lo que está haciendo. (Dirigiéndose a la tropa policial). A muchos de ustedes les dará vergüenza cumplir las órdenes que les imparten estos indignos, que ni siquiera son sus jefes. Algun día tendrán que contar a sus hijos estos momentos. Sentirán vergüenza. Ahora, como en la otra tiranía, cuando nos venían a buscar a nuestras casas también de madrugada, se da el mismo argumento de entonces para cometer aquellos atropellos: ¡cumplimos órdenes!

Perlinger: ¡Usaremos la fuerza!

Presidente: ¡Es lo único que tienen!

Perlinger: (Dando órdenes): ¡Dos oficiales a custodiar al doctor Illia! ¡Los demás, avancen y desalojen el salón! (*Inédito*; 21-Jun-1967).

Análisis del dirigente peronista John William Cooke del golpe de estado de 1966.

La imagen que se buscaba implantar en el pensamiento de la gente, de un gobierno al borde del abismo y las FF.AA. tratando de salvarlo de su propia locura y de salvar por sobre todo al país, hasta que al final, viendo que no había ninguna esperanza de rectificaciones, no les quedó sino proceder quirúrgicamente, es una construcción de la propaganda y además, una de las expresiones del modo de pensar, de la imagen de sí mismos y de los otros nucleamientos que tienen nuestras corporaciones militares...

La afirmación sobre la prescindencia mantenida por las FF.AA., salvo para orientar al gobierno con buenos consejos y llamados de atención sobre peligros que éste descuidaba es absolutamente falsa.

1ro.) No es verdad que las FF.AA. intervinieron en última instancia, ante una situación anárquica. Ellas eran el factor principal de esa anarquía, pues no solamente constituían una amenaza permanente para el gobierno, sino que toda la política estaba condicionada por esa circunstancia. Los partidos y grupos opositores predicaban el golpe y actuaban en una forma que trataba de aumentar las apariencias caóticas de la situación nacional, porque sabían, como todo el mundo, que se podía jugar a esa carta con muchas probabilidades de acertar.

2do.) Nadie se llama a engaño con respecto al sentido de esa "colaboración" de los hombres de armas. En todo caso, el argumento vendría a ser así: derrocaron al Presidente porque no les hizo caso; para que lo dejaras gobernar debía actuar en la forma que le indicasen. ¡Bravo! Esa es la "sincera" y "desinteresada" colaboración. Claro que ésa, como las restantes afirmaciones del documento de la Junta Revolucionaria, parten del mismo dogma: el de que las FF.AA. tienen razón, son la razón. Si hubiesen sido respetuosas de la misma legalidad que ellos impusieron, debieron haber asesorado, aconsejado y atenerse a lo que el P.E. resolviese. Para eso la Constitución ha establecido los centros de decisión, y los principios que dicen sostener las FF.AA. se basan en que no sean suplantados por otros.

3ro.) De las discrepancias que existían con la acción

del gobierno radical, la popular no tenía como expresarse. Nadie pensó, en el régimen, que valía la pena que se expresase. Pero las restantes, las que son parte del régimen, gozaban de todas las garantías y medios para hacerse conocer. Si el gobierno no les prestó atención, aparte de que no le aconsejaban nada que fuese más beneficioso para el país que lo que ya se estaba haciendo, no hizo más que acogerse a la ley. Lo que ocurre es que una cosa son las opiniones, a favor o en contra del gobierno, y otra cosa las opiniones respaldadas con cañones, tanques, soldados, aviones, submarinos y portaviones. No es la mayor dosis de verdad o de razón lo que confirió peso al asesoramiento militar, sino sus armas, que por cierto no se les han dado —y pagado— para que hagan valer sus opiniones políticas.

4to.) Ni siquiera pueden alegar —lo que sería moralmente argumentable aunque constitucionalmente la calificación no variaría— que en contronazos con el gobierno se produjeron por defender posiciones populares y de interés para la Nación. Ya hemos definido negativamente al Presidente depuesto, pero los puntos de irritación con el Ejército no demuestran que éste fuese el que sostuvo las mejores posiciones: las FF.AA. querían mandar tropas de ocupación para ayudar a Estados Unidos en el crimen contra el pueblo de la República Dominicana, Illia no; quería que se interviesen las universidades, Illia no; querían darle impulso a la Fuerza Interamericana de Paz para que existiese un guardián armado permanente que custodiase los intereses norteamericanos y de las oligarquías continentales, Illia no tenía igual entusiasmo; las FF.AA. querían medidas en Tucumán contra la “acción roja”, Illia no las tomó; en el problema limítrofe con Chile, las FF.AA. querían proceder violentamente, Illia no. Esto es suficiente y no necesitamos seguir la enumeración con asuntos menores. En todas las controversias conocidas, aún dentro de una política que estaba subordinada a los designios imperialistas, la actuación del Presidente si hubiese respondido al asesoramiento de las FF.AA. hubiese sido infinitamente peor y aún más grande el bochorno nacional. (*El Peronismo y el golpe de estado*; 1966).

Declaraciones del ex-presidente, Arturo Illia

Todo ha sido destruido. Desapareció el sistema republicano, es decir la República... Actuando como subproductos de cualquier matonismo totalitario, erigen un sistema tribal de gobierno, primitivo e infrahumano.

Y casualmente se da como una de las excusas, la de combatir al comunismo. Pero contribuyen, por el contrario, a crear la previa mentalidad totalitaria, sirviendo —como todas las dictaduras— a facilitar el advenimiento de lo que dicen combatir.

Como todos los aprendices de brujo, aparecen como mortales enemigos de las construcciones permanentes. Y así las improvisaciones, el aniquilamiento de la seguridad colectiva, la intimidación y el miedo; como su consecuencia, la reaparición de la casa de roedores donde cada uno hará su pequeña cosecha de despojos. (*Inédito*, 26-oct-1966).

Discurso del presidente Onganía.

La patria no es un conjunto de apetencias; no es una mera expresión geográfica ni es la suma de sus índices económicos y sociales. La patria es una empresa en la historia y una empresa en lo universal. La patria es una síntesis trascendente que tiene fines propios que cumplir.

Los partidos políticos algún día tendrán que ser reemplazados por otras organizaciones, igualmente políticas, basadas en el ideal antes que en el prejuicio, con lealtad primaria y viva a la Nación antes que el grupo y que miren más a la Argentina que hemos de construir que a la Argentina que hemos dejado atrás.

...La desaparición de los partidos políticos, del Congreso Nacional, etc., significa que el país no tolera formas vacías de contenido y que ha sacrificado las apariencias formales para recuperar la verdad íntima con sujeción a la cual aspira a vivir. Por ello ha sido la primera preocupación del gobierno de la Revolución echar las bases de una sana comunidad. La comunidad tiene su célula en lo que al régimen político atañe, en la municipalidad, que debió constituir siempre la piedra angular de la democracia argentina, no de la democracia hueca, sino de la que nosotros queremos, rica en contenido, construida de abajo hacia arriba.

Para que esta democracia sea auténtica, el país tiene que revitalizar la comunidad. No lo será mientras no sean representativos sus órganos básicos.

El país se encamina resueltamente a su grandeza... No permitamos que problemas materiales inmediatos ofusquen una vez más nuestra visión. La crisis del país es de carácter espiritual. Se relaciona con el descreimiento y la falta de fe en las instituciones de gobierno. (*La Nación*, 3-dic-1966).

1966-1976

Ensayo del Teniente General Benjamin Rattenbach

...nos queda por formular, no solo como argentinos, sino también como militares, que terminen de una vez las intervenciones militares en nuestro país. . . En cuanto a los militares, tendrán que convencerse que su intervención en la política interna, por lo general, no ha mejorado la situación del país; al contrario. . . más bien la han empeorado. . .

Al final, todo el conjunto de la institución armada del país se halla dividido en tendencias, trenzas o partidos que representan un verdadero cáncer en su organismo viviente. (*Primera Plana*, Nro. 243; 22-Ago-1967).

Declaraciones de Raimundo Ongaro en un diálogo con el ex presidente Illia.

Ongaro: Bueno, yo creo que el 28 de junio es un día en que recordamos muchas desgracias sucedidas en el país, desde hace dos años a esta parte. Pero desde hace dos años me animo a decir que tenemos la inmensa alegría de saber que esta desgracia ha servido para unir al pueblo argentino y comprender quiénes son sus verdade-

ros enemigos y dar esa batalla por la liberación, que individualmente hemos querido dar todos, pero que de esa forma nos ha costado a veces derrotas parciales. La desgracia del golpe del 28 de junio de 1966, tiene un sólo mérito: que unificó a los argentinos en su contra. De esto hay que sacar una conclusión. Aprendamos todas las lecciones del pasado porque todos, en alguna medida, hemos cometido algunos errores de acción o de omisión. Creo que los argentinos tenemos la virtud de no ser soberbios y saber reconocer que los males que padecemos son porque nos faltó una mejor visión de lo que había alrededor nuestro. Yo celebro que el 28 de junio de 1966 les haya permitido a las mayorías del pueblo reencontrarse con los grandes objetivos de su historia. (*Inédito*, 10-jul-1968).

Declaraciones del Secretario General de la CGT de la República Argentina, Raimundo Ongaro.

Algo, y muy grave, es lo que está fallando. Como han fallado y siguen fracasando tantas llamadas revoluciones. Para nosotros el mundo tiene arreglo, pero lo irá siendo y lo será cuando por convicción y por ideal, y agotadas otras experiencias, comprendamos que para ser felices hay que ser hermanos y vivir como hermanos. Y esa revolución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es la que proclamamos, deberá serlo de amor y solidaridad; nos parece que es la única que sobrevivirá por todos los tiempos, porque es la única donde no existirá ni tendrá razón de ser ninguna forma de explotación, donde ya no habrá opresores ni oprimidos, sin imperialismos y sin colonias, donde el trabajo creador no necesitará de mercaderes, capitales ni financieras, ni ejércitos ni armamentos, nada de aquello que signifique vivir con el sudor el prójimo...

¿A qué categoría de inferiorización subhumana se nos pretende reducir, cuando se nos impone un orden autoritario en el que solo tenemos licencia para obedecer? Y hacemos esta pregunta, muy lejos de toda ironía: ¿es que hay dioses que han bajado a esta tierra a crear algún paraíso fabuloso? Y si pudiera creerse esto: ¿qué dioses y qué paraísos son los que han implantado, por decreto,

que han comenzado por quitarnos hasta la poca cosa buena que con tanto dolor y tiempo habíamos conquistado?

¿Y qué clase de teorías se están inventando con el nombre de colaboracionismo y participaciónismo donde se nos obligaría a respetar a quien no nos respeta, a reconocer a quienes no nos reconocen, a apoyar a quienes nos destruyen, a negociar con quien nos quita todo, a dialogar con quien nos congeló voz y voto, o a consentir la ley que escriben unos pocos desconociendo la ley que hizo la voluntad de todos? . . .

Naturalmente, queremos construir y construiremos. Queremos liberarnos y nos liberaremos. Rechazamos todas las fórmulas de colaboracionismo o participaciónismo porque aparte de malas prácticas son malas palabras. Queremos ser protagonistas. De esa revolución que ha de ser del pueblo, para el pueblo y por el pueblo argentino. Los gráficos decimos que preferimos honra sin sindicatos y no sindicatos sin honra. Y como argentinos, sin más bandera que la de nuestra Patria, preferimos autodeterminación aunque nos cueste la vida, y no la vida si por conservarla perdemos la autodeterminación nacional y social. . . (*Inédito*, 3-ab-1968).

Declaraciones del Secretario General de la CGT de la República Argentina, Raimundo Ongaro.

El 28 de junio de 1966 presenté que habría de pasar. Asocie el golpe de Estado con el famoso Comunicado 150, de las Fuerzas Azules, en el que coparticipó Onganía y donde se prometía el respeto de la voluntad popular. Y me acordé de Arturo Frondizi, otro que le había presentado al pueblo un hermoso programa. La mentira de los pactistas de 1958 se transformaba en la mentira del Comunicado 150. Por eso, el 28 de junio imaginé una nueva estafa a la Nación y al pueblo, un nuevo pacto no firmado con los golpistas políticos y gremiales cuyo resultado iba a ser la anulación de todos los derechos humanos, sociales, políticos, culturales. . . Y efectivamente, jamás hemos tenido en la historia del país resultados tan desastrosos como con el gobierno de

la Revolución Argentina. Nunca se ha visto una plaga semejante...

Las palabras están todas dichas, los discursos los sabemos de memoria, los libros con las fórmulas ideales los conocemos todos, las cifras nacionales e internacionales de todos los males que padecemos no son ningún secreto. Lo único que hace falta en este momento es que cada uno demuestre y concrete con hechos positivos de qué manera enfrenta a la dictadura. Sólo esto va a hacer nacer la coordinación de esfuerzos en la oposición nacional.

Por eso, si me preguntan porqué dura 1000 días el gobierno de Onganía yo contesto: porque es la única minoría organizada que hay en el país; la única que cuenta con la violencia de la fuerza y la violencia del dinero para corromper, seducir, sobornar, dominar. Esos son los dos elementos decisivos, por lo menos circunstancialmente. Y mientras el pueblo no se arme de la fuerza y de los medios necesarios para vencer a la fuerza y el capital de la minoría organizada, no vamos a tener éxito, por más que hagamos brillantes reuniones y por más que expresemos en bellas palabras y en ardientes comunicados que no estamos de acuerdo con la dictadura. (*Inédito*, abril de 1969).

Artículo de Alfonso Carrido Lura (seudónimo de Raúl Alfonsín, dirigente radical).

Creemos que todos tienen una importante misión que cumplir. El ala derecha debe procurar convencer a los intereses que agregue, de la imposibilidad de mantener el "desorden establecido" y del peligro de una actitud miope que los hace prisioneros de la arbitrariedad. El ala izquierda debe insistir en que a través de las libertades civiles, se logrará la real liberación del pueblo.

Los partidos políticos populares –sin perjuicio de las siempre útiles manifestaciones de exigencias mínimas para un posible gobierno de transición– deben formular sus objetivos con audacia. No aceptar el papel de "moderadores" que en algún momento pretendan asignarle. Han de ser vanguardia de un proceso de cambio, al que necesariamente deben otorgar contenido democrático. Por otra parte, deben ser ejemplo en la lucha. En

todos los frentes, simplemente dónde se pueda y cómo se pueda, deben estar los hombres de la democracia. Junto al pueblo, en comunicación permanente con las conducciones gremiales y estudiantiles combativas, para defender los ideales comunes y resistir más eficazmente a la dictadura. (*Inédito*, octubre 1969).

Conferencia del dirigente sindical Agustín Tosco.

El campo de la lucha por las reivindicaciones está dado en una serie de escenas. No hay una sola escena. La lucha se plantea en el sindicalismo, se plantea en el estudiantado, se plantea por las fuerzas cívicas populares, se plantea por muchos sacerdotes del tercer mundo... Se plantea de distintas maneras, en distintas escenas, y sólo debe merecer a nuestro juicio el respeto de la identidad al menos en los objetivos de redención humana que tiene... Porque recordamos —para referirnos a ese hecho histórico del cordobazo— que cuando el compañero luchaba en la calle, que cuando el compañero acudía a las concentraciones, que cuando el compañero era reprimido, no se destacaba porque tuviera un rótulo que dijera 'el compañero es peronista', 'el compañero es radical', sino que todos, en ese momento, nos sentíamos identificados con una lucha altamente humanista, con una lucha que por ser humanista exige el sacrificio, la perseverancia, la paciencia y no la desesperación, no entrar en el aventurerismo para poder salir adelante...

De esos queremos trabajar como hermanos. Y de esos queremos que se entienda que es la unidad. Una unidad que no persigue que el compañero deje de levantar su bandera de peronista o de radical; que no persigue que se deje de ser católico o de ser musulmán; que no persigue que se deje de ser de Boca o de River. Que lo que se persigue es que se ponga —como habíamos dicho en la CGT de los Argentinos— por sobre su camiseta que es respetada, la camiseta fundamental, que es la camiseta argentina, que nos permitirá la redención y el cumplimiento de los objetivos que como movimiento obrero y como pueblo nos trazamos. (*Inédito*, set-1970).

Manifiesto de Creación de La Hora del Pueblo

El panorama nacional no puede ser más incierto, el porvenir argentino depende de la decisión política de todos los argentinos...

El tiempo de la discusión ha pasado; las fuerzas políticas son la representación natural de las masas y del ciudadano común que se expresa a través de ellas... Ahora la pacificación y la unión nacional hay que hacerlas...

Los partidos políticos como una necesidad vital deben renovarse en lo humano y estructural abriendo sus puertas para que la juventud asuma en ellos la responsabilidad que actualmente no puede canalizar por ninguna otra vía.

- La futura organización democrática de los partidos y movimientos debe encuadrarse en normas orgánicas, asegurando el poder de decisión de los ciudadanos que voluntariamente se integran en ellos...

El plan político debe formularse de inmediato y señalarse fecha cierta de elecciones generales dentro de un plazo mínimo y razonable para que se produzca una nueva selección de los dirigentes.

Las agrupaciones participantes se comprometen a proponer, instrumentar e institucionalizar un régimen de gobierno, con:

- a) la participación de los mejores hombres que tenga el país;
- b) respeto de la mayoría ocasional por las minorías circunstanciales y convivencia institucional de éstas entre sí y con aquella;
- c) responsabilidad compartida de todos los partidos que voluntariamente lo acepten en la defensa y realización de los puntos básicos de una política nacional.

El programa que los partidos políticos integrantes de la Hora del Pueblo entregamos a la ciudadanía no representa una plataforma electoral. Delinea un modelo de cambio sobre el cual hay acuerdo y propósito común de realizarlo. Constituye, pues, un compromiso para con los sectores sociales que impulsan mediante la revolución pacífica y democrática una sociedad justa, libre e igualitaria para nuestra patria...

Es necesaria la existencia de un Estado Promotor que supere las limitaciones del Estado Liberal dentro del marco de las instituciones democráticas y representati-

vas, lo que constituye la única vía de garantía para la recuperación de una auténtica autonomía y de un poder de decisión nacional. (*La Nación*, 12-nov-70).

Declaración del gral. Lanusse.

En determinadas circunstancias especiales en la vida del país, las FF.AA. han debido asumir transitoriamente el poder del Estado, pero nunca con el objeto de perpetuarse en él indefinidamente. Fieles a sus convicciones y tradición democrática, siempre han promovido y facilitado la participación activa e imprescindible de la ciudadanía que integran para, en común, realizar la tarea de resolver el futuro de la patria. En la hora presente, una vez más, anhelan y reclaman esa participación. Para hacerla efectiva es indispensable superar los prejuicios y antinomias que pertenecen al pasado y que sólo han servido para perturbar la cohesión nacional...

Todos los argentinos, con la única excepción de los muy jóvenes debemos sentirnos responsables de lo sucedido en el país en las últimas décadas. La historia pronunciará al respecto el juicio definitivo, más hoy adquiere mayor relevancia la responsabilidad que compartiremos, en el acierto o en el error, en la elección de los caminos que nos conducirán al porvenir de grandeza que nuestra dignidad exige. El Gran Acuerdo Nacional es el imperativo de la hora presente. Sólo así se podrá llevar a feliz término la gran empresa de encauzar al país en la senda de la libertad, el progreso y la justicia, como condición básica para el pleno restablecimiento de una democracia representativa, eficiente y estable...

Será necesario modernizar la actual estructura política, para adecuarla al objetivo perseguido: garantizar el ejercicio de los derechos y libertades individuales y mantener el pluralismo político, respaldado por una activa participación de la población y su representación legítima y auténtica en el Congreso, a través de los partidos políticos. (*La Nación*, 3-mar-71).

Carta de Perón a Rogelio Frigerio, abril de 1970.

A mi parecer, recién ‘comienza el baile’: hay muchas cosas en preparación que, en el desarrollo de este año,

han de irse incorporando de a poco a una lucha que ya no tiene reversión. Las noticias que me llegan, especialmente de los grupos activistas, me hacen pensar que si no es de esperar una gran batalla decisiva, son de prever miles de pequeños combates que sumados pueden tener efectos semejantes. En otras palabras, la 'guerra revolucionaria', que ya es realidad en todos los países latinoamericanos, tardará muy poco que lo sea también en la Argentina.

Esta 'guerra revolucionaria' realizada en acciones muchas veces desvinculadas entre sí, obedecen a la pérdida de confianza en los dirigentes de la conducción, que obliga a la masa a tomar sus propias medidas de defensa, organizando grupos activistas con las más variadas denominaciones, que se dedican también a las diversas acciones, pegando 'donde duele y cuando duele' y desapareciendo de inmediato. He visto ya en las noticias de los diarios que esto se ha puesto ya en marcha. En otras palabras: poco hay en el panorama nacional que no haga presagiar nuevas desgracias.

A nosotros no nos queda otro remedio que esperarlas, dado el poco espíritu de comprensión que reina en los que podrían evitarlas. (*Correspondencia Perón-Frigerio*).

Carta de Perón a Rogelio Frigerio, abril de 1972.

Me han estado presionando para que haga declaraciones contra la violencia, pero como yo estoy convencido que toda la culpa de esa violencia la tienen los de la dictadura que, comenzaron por usurpar el gobierno por la fuerza y la violencia y en diecisiete años ha muerto más gente que en todo el resto de la historia política institucional argentina. Yo opino sobre lo que creo justo: por cada uno que hayan muerto los muchachos Montoneros, la dictadura militar ha muerto cientos. (*Correspondencia Perón-Frigerio*).

Declaraciones del general Perón.

En la acción sindical hay mucha burocracia. Por otra parte, nadie tiene una experiencia más dolorosa que yo sobre eso. Porque yo los he visto defecionar a muchos

en el momento más decisivo de toda nuestra historia política, los he visto defecionar a ellos, dirigentes sindicales. Por eso, cuando organicé el movimiento, lo organicé sobre tres patas; no sobre una ni sobre dos. Nosotros manejamos la acción popular a través de la línea política, y la manejamos en la línea política por el lado masculino y femenino. ¿Por qué hice yo eso así? Porque lo que se maneja por la línea sindical y por la política es la misma gente. Sólo que los dirigentes sindicales tienen la ilusión de que manejan, y no es así. Porque el manejo es político, no sindical: el manejo sindical es solamente para la defensa de los intereses profesionales; no da para más. Ahora, políticamente... políticamente pueden manejar muy poco... ¡Qué va a manejar Coria! El manejo sindical está en la CGT y allí estamos seguros; porque lo tenemos a Rucci, que hace lo que debe hacer (...) El gobierno se equivoca dándoles plata a los dirigentes de las 62 (...) ¡Qué les va a dar Coria a ellos! (...) (*Mayoria*; 14-en-1973).

Mensaje del General Perón a los Gobernadores

Desde que caímos en 1955 he pensado en tratar de institucionalizar el Movimiento; pero no era una cosa fácil, debiendo sostener simultáneamente una lucha que imponía, precisamente, una conducción centralizada.

Pero las circunstancias actuales nos permitirán ir transformando ese gran Movimiento hasta ahora absolutamente gregario, en una verdadera institución política, que no solamente se ocupe de la lucha política, sino también, de la cultura política que nuestro país necesita.

Cultura política.

Nosotros somos un país politizado, pero sin cultura política.

Y todas las cosas que nos están ocurriendo, aún dentro de nuestro propio Movimiento, obedecen, precisamente, a esa falta de cultura política. Nuestra función dentro del Movimiento no es ya, solamente, de adoctrinamiento —en lo que hemos trabajado mucho, y eso ha traído la politización—, sino de ir cultivando las formas que lleven nuestro Movimiento al más alto grado de cultura política, lo que será un bien inmenso para el país, no sólo por lo que representa para el Movimiento

Justicialista, sino porque inducirá a las demás fuerzas políticas a que también adquieran ese grado de cultura política.

Democracia integrada.

La política, hoy, ya no son dos trincheras en cada una de las cuales está uno armado para pelear con el otro. Este mundo moderno ha creado necesidades, y los pueblos no se pueden dar el lujo ya de politiquear. Esos tiempos han pasado; vienen épocas de democracias integradas en las que todos luchan con un objetivo común, manteniendo su individualidad, sus ideas, sus doctrinas y sus ideologías, pero todos trabajando para un fin común. Ya nadie puede tratar de hacer una oposición sistemática y negativa, porque los países no pueden ya aguantar una actitud política semejante; uno ve cómo en el mundo entero esto ya está entrando.

Nosotros quizás hayamos tenido la última lucha dura y difícil en estos dieciocho años; pero se inicia para nosotros una nueva etapa, en la cual una organización y una elevación del nivel cultural político de nuestras masas nos facilitarán todos los trabajos y todos los esfuerzos que deberemos realizar. Por esa razón hemos dispuesto que se comience a estructurar el Movimiento Peronista como institución. Yo ya dejaré de ser el factótum, porque ya no es necesario que haya factotums. Ahora es necesario que haya organizaciones; crear un Consejo Superior, que será el verdadero encargado de la dirección y de la conducción del Movimiento Peronista.

Este Consejo superior será realmente representativo. Ya no seguiremos con el procedimiento del dedo, porque eso no va a ser eficaz. Ahora tenemos que empezar con el procedimiento del voto que haga verdaderamente representativo el instrumento que ha de manejar, dirigir y conducir al Movimiento Peronista. (*La Nación*, 3-agosto-1973).

Mensaje del Presidente Perón a los dirigentes de la CGT.

Es indudable, como ya lo he dicho otras veces, que el valor real de las organizaciones no se puede medir por el número de sus afiliados ni por la importancia que ellos tienen en la acción de conjunto. El verdadero valor se

mide por la clase de dirigentes que los conducen y los encuadran; vale decir, el dirigente es en la organización el alma y la inspiración de toda esa organización y su acción efectiva.

A esta altura de nuestro desarrollo, tanto agropecuario como industrial, nosotros podemos establecer un perfecto equilibrio: unos trabajando para proveer al campo de la mecanización necesaria, y al campo produciendo para que los demás puedan comer, y además, tener un saldo de exportación suficiente como para juntar un pero 'por si las moscas'.

Es precisamente para todo esto que tenemos que preparar dirigentes. El mismo consejo he dado a los empresarios y a la Confederación General de Profesionales que acaba de organizarse en el país. Ellos, también tienen un sector importantísimo que cubrir en la comunidad. Esta es la comunidad organizada con la cual he venido soñando desde hace treinta años. Las grandes organizaciones responsables que permitan la solución de todos los problemas económicos, sociales y culturales que el país necesita llevar adelante.

La política, en este aspecto, es secundaria, nosotros sabemos todo lo secundaria que es. Si las vacas paren, si tenemos buenas cosechas, la política no tiene nada que hacer. La política es sólo un medio insignificante, muchas veces para elegir entre nosotros a algunos que consideramos más capacitados, aún cuando nos equivocemos, porque los estadistas, como los dirigentes no se hacen por decreto ni por elecciones. (*La Nación*, 26-oct-1973).

Ultimo discurso público del general Perón

...sin el apoyo masivo de los que me eligieron y la complacencia de los que no lo hicieron pero luego evidenciaron una gran comprensión y sentido de responsabilidad, no sólo no deseo seguir gobernando sino que soy partidario de que lo hagan los que puedan hacerlo mejor. Como ustedes saben nosotros propiciamos que el acuerdo entre trabajadores, empresarios y Estado sirva de base para la política económica y social del gobierno

(...) Todos los que firmaron en dos oportunidades ese acuerdo sabían también que iban a ceder parte de sus pretensiones, como contribución al proceso de liberación nacional. Sin embargo, a pocos meses de asumir ese compromiso pareciera que algunos firmantes están empeñados en no cumplir el acuerdo y desean arrastrar al conjunto a que haga lo mismo (...) Frente a esos irresponsables, sean empresarios o sindicalistas, creo que es mi deber pedirle al pueblo no sólo que los identifique sino también que los castigue. (*La Razón*; 12-jun-74).

Entrevista a Ricardo Balbín, dirigente radical.

—Usted siempre dio la impresión de interpretar los hechos a través de una alianza de clases y no de la lucha de clases.

—Yo diría más bien la confusión de las clases, ¿verdad? Ahora se da el espectáculo distinto. De los más altos niveles están surgiendo algunos guerrilleros. Entonces hay una contradicción en el tiempo. Parece que se vuelve de otra manera, pero más violenta. Porque no es una protesta por lo que tienen, porque gozan de lo que tienen. No es el abandono de lo que tienen para empezar con su propio esfuerzo sino que utilizan los medios alcanzados por sus padres. Puede ser que en el fondo tengan una idea, presumo que en el fondo tienen que tenerla, pero yo creo que es lamentablemente equivocada.

—¿Cómo resolvería usted el problema de la violencia?

—¿Por qué no hubo violencia en los gobiernos radicales? Creo que fue por el modo de gobernar, de realizar. Claro que son épocas distintas y las admito. Aunque mucho de lo que ocurre en el país ahora no es natural del país sino de afuera del país. Se hace un estado de confusión. Le pondría un ejemplo que es muy gráfico. El advenimiento de Yrigoyen al gobierno puso en la escena nacional el ingrediente de la seguridad de los derechos, cosa que no existía antes en plenitud. El conocimiento real de que el Derecho era respetado hace eclosionar, por

ejemplo, el ámbito universitario de 1918. Una revolución que se adelanta a los tiempos. Pero no es sangrienta, es violenta en las ideas, violenta en la transformación, pero no arrastra el crimen, no arrastra la rivalidad grosera. Es un reclamo, una conquista, una realización. Sin embargo, usted ve ahora el espectáculo de las riñas groseras. Se ha ocultado, por ejemplo, que en la Universidad hubo estudiantes librando sus luchas internas a cadenazos. Siempre hubo una expresión de violencia que es la expresión de avance y de revolución. Pero ésta es una violencia distinta. Parece que quisiera desatar actos agresivos en una sociedad agresiva. Cada época tiene su estilo y su forma.

—Pero usted mismo admite que los tiempos han cambiado. Yo no veo todavía claros los métodos que usted utilizaría para que —por ejemplo— no haya más cadenazos en las universidades.

—Mi impresión personal es que los grandes ejemplos vienen de arriba para abajo. Creo que los reflejos de las instituciones y de quienes las integran, son como un espejo que va reflejándose en el seno del pueblo. Y creo que las grandes actitudes, los grandes gestos, también son el principio de una educación del pueblo. Lamentablemente, en el país —desde hace algunos años— se han dado muy malos ejemplos. Admito que todo eso ha repercutido en la juventud actual.

—Malos ejemplos de arriba.

—Sí, evidentemente, yo creo que las frustraciones, que las evoluciones, que los fraudes que tuvimos que soportar fueron siempre malos ejemplos, que a veces dan la consecuencia mediata. Y si estos sistemas de frustración se van repitiendo, es posible que en el ánimo de la juventud vaya naciendo la idea de que todo aquello no sirvió, entonces vamos a hacer todo nuevo.

—Su modo, entonces, de enfrentar la violencia consistiría ante todo en el ejemplo.

—A veces, el acto violento es el acto de no escuchar. Si yo quisiera que usted me atienda, le hablo y no me escucha; le hablo más fuerte, y si todavía persiste en no escucharme, pego un grito. Y si todavía no alcanza,

rompo un vidrio. Ser atendido es un derecho. Por eso, un estado social de injusticia genera algunos de los actos violentos que han ocurrido en el país. Después está la otra violencia, dirigida a cambiar el sistema por la fuerza. Es lo que está ocurriendo en la Argentina, pero en un sector minúsculo y no bien definido. Hay un grupo juvenil pequeño que actúa dentro de las universidades —no sé si dentro de los gremios—, al que no le gusta este sistema.

— ¿Podría identificar a ese grupo?

— Puede ser una extrema izquierda o una extrema derecha, como dicen ahora. A mí no me gusta hablar de las izquierdas y de las derechas, no las entiendo. Yo creo que no les gusta el sistema que tenemos y quieren cambiarlo. No definen lo que quieren. Lo grave de este país es que todo el mundo se mete dentro de la democracia, hasta sus propios enemigos. Y del propio vientre de la democracia salen a destruirla. Acá no he encontrado todavía un hombre que me diga: "Yo soy totalitario".

— ¿Ha reflexionado usted sobre ese curioso destino? (de perder tantas elecciones).

— Todas mis candidaturas han sido muy difíciles. Fui candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando estaba Mercante, a quien había que reelegir. Nosotros usábamos las candidaturas porque nos abrían tribunas. Sabíamos el resultado electoral, pero el proceso nos permitía hacer un proselitismo agudo.

— En el 51 le pasa a usted lo mismo.

— Después me toma el 51, que era la reelección del Presidente Perón, nada menos que de Perón. Después me toca el 58, con el pacto realizado por el peronismo con Frondizi. Cuando viene el 63, yo, por razones especiales, me alejé de la contingencia interna por razones muy importantes que determinaron esta actitud.

— ¿Qué razones?

—Unas se pueden conocer. Otras no se pueden. Yo tuve conversaciones muy fuertes con los que entonces estaban en el gobierno y quería demostrar que esa lucha no era con destino personal. Por otra parte se habían dado circunstancias en el partido que determinaban la necesidad de que otros fueran candidatos, sobre todo el doctor Illia, que había ganado la elección de Córdoba.

—En marzo de 1973, ¿usted advirtió que iba a perder?

—Pienso que no. Pero no era un optimista enfermizo. Tuve, sí, la sensación de que el gobierno militar hizo todo lo necesario para que nosotros no ganáramos al revés de lo que creen otros.

—¿Por qué lo dice?

—Porque en la controversia apareció el peronismo como el único enemigo de la revolución, cuando en verdad nosotros habíamos sido los iniciadores de la lucha contra la dictadura militar.

—Ciertos periódicos del peronismo de izquierda como *De Frente* o *Puro Pueblo* y aún un vocero del nacionalismo de derecha como *Cabildo* ven en usted al hombre de reserva del Sistema, o al “delfín del régimen”.

—Todos los episodios que han ocurrido en el país en los últimos tiempos han demostrado o han exhibido una no le diré descomposición pero si divergencias en lo que podríamos llamar el complejo del justicialismo, ahora acrecentado con la formación del FREJULI. A veces tienen razón, otras veces no tienen razones valederas, entonces para ubicar una posición buscan a otra y la analizan a su manera. Nada de esto es útil y nada de esto es cierto. Podríamos llegar a una conclusión: ¿No será acaso que la extrema izquierda está ayudando a la extrema derecha? ¿No será acaso que los de la extrema izquierda están sirviendo decididamente a los de la extrema derecha? Al país no hay que confundirlo. La política radical tiene ochenta y tantos años. Ha sido clara, coherente. En cada episodio jugó con limpieza, con mucha claridad. En esta oportunidad está haciendo

exactamente lo mismo. Lo que ha pasado es que el país ha madurado y las fuerzas tradicionales o no tradicionales han comprendido qué es la verdad nacional. Sin una convivencia con discrepancia que signifique la consolidación de la unión de lo argentino, no hay proceso de liberación. Esto es una verdad, nosotros servimos esta causa. No dejamos de ser lo que éramos, seguimos siendo lo que éramos, vamos a ser lo que éramos, naturalmente actualizados en el tiempo. Porque si toda esta gente que se está ocupando tanto de nosotros ahora analizara nuestras plataformas electorales a través de todos los tiempos corridos verían que siempre hubo un denominador común. Es el complejo argentino, la confusión argentina creada en torno a la vacancia de Perón la que gravita y determina todas estas circunstancias. Algunas se asomaban ya en vida de Perón. Porque incluso hubo espectáculos en las plazas públicas, ¿verdad? Creo que son teorías extrañas al justicialismo que se penetran en el justicialismo. Para hacer del justicialismo lo que ellos quieren pero no lo que es el justicialismo. Esto pudo también ocurrirle al radicalismo. Yo he conversado con alguna gente joven que quería entrar al partido, pero no por las ideas del partido sino para ver si en este partido imponían sus ideas. Y entonces yo les dije que esperaran la afiliación hasta que se hicieran radicales. Y esto es lo mismo. Además, me hacen el honor de considerarme un adversario importante. Si no lo fuera no se ocuparían tanto.

—¿Cómo fue la historia de sus encuentros y desencuentros con Perón?

—El primer encuentro fue en la casa de Gaspar Campos. Yo estaba con los miembros de la Hora del Pueblo, a quienes él quiso saludar.

—Eso ocurrió aproximadamente tres días después de la vuelta de Perón, en noviembre de 1972.

—Nunca había tenido oportunidad de conversar personalmente con él y estaban muy duras las cosas para conversar en la época de sus primeros gobiernos. Pero, en noviembre del 72 fue como si siempre hubiésemos hablado. Qué cosa curiosa, fue como dejar todo lo de

ayer para empezar un camino nuevo. Así que todo resultó fluido, fácil, cordial. Después conversé con él en vísperas de la reunión del Nino, donde en cierta manera, teníamos que informarnos mutuamente. Se trataba de conjugar propósitos comunes. Después tuve tres o cuatro conversaciones, pero siempre relacionadas con lo que podíamos llamar un diálogo a nivel institucional. Un importante y largo diálogo estuvo vinculado con la reforma de la Constitución. Perón mencionaba como un ejemplo el acuerdo de San Nicolás, es decir, una Constitución no conflictiva. Las constituciones conflictivas en los pueblos son siempre gérmenes revolucionarios, o al año o a los 2 años o a los 10 años, pero siempre sirven de pretexto para la revolución. Hablamos también en esa oportunidad de la Ley Universitaria. Le dije que era para el radicalismo una cuestión fundamental, que no podíamos ceder. Así lo comprendieron senadores y diputados. Esta ley no será perfecta, pero no es tampoco negativa en su aspecto esencial. Con respecto a la intervención de Buenos Aires le expliqué nuestro punto de vista. Creo que fui atendido. Así se fue consolidando la política de convivencia, razonamiento y diálogo. Estos diálogos determinan en el seno del pueblo un modo nuevo. Radicales y justicialistas se encuentran de una manera distinta a como se encontraban antes. Se acrecienta en el país un encuentro distinto. Eso se nota en los Concejos Deliberantes, se advierte en los cuerpos legislativos: fue como un ejemplo de arriba para abajo. Podemos, entonces, no estar de acuerdo, pero podemos conversar sin tirarnos piedras. (*La Opinión*, 31-jul-1974).

1976-1982

Discurso del Presidente Videla

Un factor había contribuido notablemente a este deterioro de nuestro estilo de vida democrático y, si hubiera que definirlo en una sola palabra, diría que es demagogia. La demagogia, agitada con fines puramente electorales a través de slogans, rótulos y frases hechas, no hizo más que enfrentarnos en antinomias estériles y confundirnos profundamente, a punto tal, que hoy es difícil distinguir dónde está el bien y dónde está el mal.

Esa demagogia, además, por ser complaciente, dio origen a la corrupción, concebida ésta en la más amplia acepción de la palabra, que llegó a generalizarse en todos los estamentos del Estado. Esa corrupción –justamente por ser generalizada– motivó el trastocamiento de los valores tradicionales, es decir, subversión. Porque subversión, no es ni más ni menos que eso: subversión de los valores esenciales del ser nacional.

Pero no todo era negativo en este proceso, había también aspectos positivos dignos de ser rescatados; uno de ellos, era un alto grado de madurez logrado en el pueblo argentino, a través de esta última frustración. El otro, era que permanecía subyacente en todos los espíritus de los argentinos un profundo sentido de unidad nacional. Con ambos factores; madurez y sentido de

unidad, es fácil pensar en la recomposición del ser argentino.

Ese ser argentino, basado en madurez y en sentido de unidad, permitirá inspirar para elevarnos por encima de la miseria que la antinomia nos ha planteado, para dejar, de una vez por todas, ese ser "anti" y ser, de una vez por todas, "pro": "Pro-argentinos".

Por eso es nuestra intención, en nuestra acción de Gobierno, afirmar los valores tradicionales que hacen a la esencia del ser nacional y ofrecer estos valores como contrapartida a toda ideología extraña que pretenda suplantar estos valores, y más aún, conculcarlos.

Es también nuestra intención erradicar la corrupción, ofreciendo como norma la honestidad, la idoneidad y la eficiencia.

Finalmente, combatir a la demagogia, anteponiendo a ella la autenticidad de nuestros actos, inspirados solamente en la verdad...

El 24 de marzo próximo pasado, los hombres de armas iniciamos este largo y difícil camino, y estamos —como dije— dispuestos a transitarlo con firmeza. Por eso solo requerimos en estos primeros momentos, comprensión. Comprensión hacia la actitud asumida por las Fuerzas Armadas; comprensión hacia el objetivo final trazado, comprensión hacia el curso de una acción elegida para el logro de ese objetivo. Habiendo comprensión, es posible que podamos concretar hechos reales, y es en función de esos hechos que recién podremos pedir adhesión. Adhesión, no a las personas sino a los hechos concretos en tanto y en cuanto estos hechos signifiquen los hitos de aproximación hacia el objetivo final.

Por cierto, que la adhesión impone como reciprocidad la participación y, a medida que logremos adhesión a los hechos, podremos ir dando gradualmente participación.

Llegará el día en que los objetivos que hoy decimos son de las Fuerzas Armadas puedan ser asumidos plenamente por la mayoría de los argentinos a través de una amplia corriente de opinión; cuando así sea, será el momento de la transferencia. La participación será plena, las Fuerzas Armadas habrán cumplido con este compromiso histórico y volverán a su función específica. (*Clarín*, 25-may-1976).

Discurso del Presidente Videla

Esta crisis estaba caracterizada fundamentalmente por las siguientes circunstancias: una marcada atomización dentro del partido gobernante, circunstancia que restaba sustento político al propio gobierno.

A falta de ese sustento político, el Gobierno recurrió a las organizaciones sindicales, única estructura organizada, para cubrir el vacío dejado por el partido político que lo sostenía. Con ello se logró un clima de indisciplina social. Los dirigentes carecieron de representatividad en lo específico y se generó una infiltración con tendencia izquierdizante desde las bases de las propias estructuras sindicales.

El aparato productor, si bien intacto por falta de estímulo, estaba detenido e incapacitado de hacer frente a una difícil crisis económica. El desorden generalizado hizo que las instituciones se canalizaran y no fueran capaces de dar respuesta a una coyuntura sumamente grave.

Las Fuerzas Armadas creían en el proceso y esperaban. Por eso, su actitud fue de prudencia y se abstuvieron tanto de interferir el desarrollo del proceso como de intervenir en su solución política.

Esta actitud prudente, estaba lejos de ser una actitud mezquina. Las Fuerzas Armadas participaron plenamente, dentro del campo específico en el sostén del proceso. La sangre generosamente vertida por sus hijos más queridos, héroes y mártires, así lo atestiguan. Pero es más, las Fuerzas Armadas también hicieron oír su voz responsable, serena, advirtiendo los riesgos que el proceso corría y reclamando prontas soluciones, profundos cambios, so pena de que el proceso pudiera llegar a interrumpirse o detenerse.

Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello y previendo la inexorabilidad de la crisis, se prepararon para hacer frente a esta situación y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional. (*Clarín*, 26-may-1976).

Videla habla al país al cumplirse el primer aniversario de su asunción como Presidente.

Nuestra Nación culminaba en marzo de 1976 una de las crisis más hondas de su existencia, y, sin duda, la más grave de su historia contemporánea.

Crisis total, cuya vertiente más aguda era la quiebra del sistema institucional, pues el poder había alcanzado una fase de disgregación que configuraba el cuadro de una Argentina feudalizada y en vías de extinción...

Conscientes de que debemos aún afirmar y perfeccionar los logros obtenidos como así mismo corregir las falencias subyacentes, iniciamos al Período de Creación, en el que, imprimiendo a los actos de Gobierno una dinámica singular, se echarán las bases de la revitalización y recomposición, institucional y política, del país. De esta forma se habrán de erigir los pilares sobre los que se asentará una Argentina renovada...

Para culminar el Período de Creación tendremos que concretar los siguientes logros:

- Plena erradicación de la subversión.
- Recomposición de las relaciones entre los habitantes a nivel individual y comunitario.
- Actualización de todos los sectores sociales tanto en el campo de las ideas como de los hombres, facilitando el acceso de nuevos dirigentes.
- Elaboración y sanción de los instrumentos legales tendientes a revitalizar las instituciones políticas de la república.
- Modificación de los hábitos políticos y los procedimientos de selección de los dirigentes.

Recién entonces podremos instaurar un régimen democrático que exprese la presencia y aspiraciones convergentes de las Fuerzas Armadas y de los sectores representativos de la civilidad. (*Clarín*, 1-ab-1977).

El Presidente Videla dirige un mensaje al País.

Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976, no materializan solamente la caída de un gobierno.

Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un

ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la Nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas...

Para nosotros, el respeto de los derechos humanos, no nace solo del mandato de la Ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental.

Y es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre, que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad; no para concultar la libertad sino para afirmarla; no para torcer la justicia, sino para imponerla. (*Clarín*, 31-mar-1976).

Afirmaciones del dirigente peronista, Italo Luder.

El parlamentarismo no es ya el 'government by discussion', como se lo ha definido, ni tampoco la ley es la síntesis dialéctica de las distintas opiniones expresadas en la discusión, sino la voluntad del grupo político con mayoría. De ahí, que conforme al funcionamiento actual del Parlamento, la responsabilidad de la función legislativa recae en el bloque mayoritario, y los bloques minoritarios tienen una función de contralor. El debate consiste en un registro de las distintas posiciones políticas expresadas por los jefes de bloques o por los representantes de éstos designados para cada caso concreto, pero se ha abandonado la discusión y la deliberación como modo de operar.

Esta situación trae aparejadas importantes consecuencias que alcanzan a principios cardinales del parlamentarismo clásico, entre ellos, la libertad de discurso que, en el Parlamento actual, se desplaza del individuo al bloque político. El fundamento de este privilegio estaba, sobre todo, en la necesidad que tenía el Parlamento de ilustrarse con respecto a todas las razones y argumentos que pudieran aportarse al debate. Pero si sus miembros no pueden apartarse de la línea y la postura señalada por cada uno de los bloques a que pertenecen es lógico que se procure limitar el número de oradores a los representantes de cada bloque legislativo. (En *El Proceso Argentino*, set. 1977).

Discurso del general Martínez Zuviría en un homenaje al teniente general José Félix Uriburu.

Desde su egreso del Colegio Militar a fines de 1888, en su deber, en su conducta —expresó— evidenció virtudes de caballero y temple de soldado. Sirvió en las más lejanas latitudes del país, haciendo la vida primitiva de los fortines, en incesante lucha con los indios. Se consustanció con la naturaleza y vibró con fuerzas telúricas, como se conmovieron sus mayores. Su contacto con los ignorantes, olvidados y pobres, acrecentó su amor al pueblo, al que más adelante tan bien habría de interpretar y conducir.”

“Al mencionar al pueblo —continuó— no es en el sentido perverso y demagógico al distorsionar el sentido de este vocablo. No me refiero a parte del pueblo, aplabeyado y subalternizado, al que se estimulan sentimientos bajos, con indignos propósitos.

“La situación política que sufria el país era insostenible y el desorden lo había llevado a profunda crisis. Las arcas estaban vacías, la autoridad en quiebra. Las perspectivas que eran cada vez más sombrías imponían rápida acción. Urgente era rescatar la Nación de la situación catastrófica en que se hallaba.”

Dijo luego que la misión del presidente provisional no fue fácil. Se refirió también a la anulación de las elecciones de 1931 en la que asumió “con entereza la grave responsabilidad” y a la serenidad evidenciada en el momento de su muerte. “Caballero por nacimiento, vocación y profesión —finalizó— siempre estuvo a la altura de su estirpe y de su cometido”. (*La Nación*, 7-sep-1980).

Declaraciones del general Ibérico Saint Jean, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Sólo quiero recordar que ahora los fiscales o los jueces no reciben como forma de intimidación una corona de flores cuando actuaban motoneros o las tres A, porque precisamente ha sido este gobierno con “pretensiones republicanas” y sus Fuerzas Armadas, los que han devuelto su majestad e independencia a la

justicia, y la paz y la tranquilidad a la República. (*La Nación*, 8 set. 1980).

Declaraciones del dirigente radical Ricardo Balbín

El Proceso de 1976 encontró, a diferencia de otras revoluciones, a un pueblo civilmente unido, había un clima de convivencia cívica que antes no existía, por eso este Proceso encontró una expectativa optimista. . .

Yo puedo asegurar que en estos momentos todo el país está en protesta, todo el país está en reclamo, pero todos están deseando que las cosas se hagan bien y si bien éste es un país enojado, no quiere pelear, sólo quiere encontrar los caminos de la paz y la convivencia.

• (*La Nación*, 14 oct. 1980).

Declaraciones del general Adolfo Sigwald, gobernador de Córdoba.

El Proceso de Reorganización Nacional no se hizo solamente para erradicar la subversión. Tiene que reorganizar la Nación, tiene que calar hondo para que en el futuro la democracia que vivamos los argentinos no sea una democracia ficticia, una democracia de fachada. Y cuando estemos convencidos de que la democracia es, en primer lugar, una forma de vida y luego un sistema político al que aspiramos, vamos a llegar, con el acompañamiento de todos los argentinos, que día tras día van comprendiendo que nos guía un espíritu de grandeza. Actuamos sin sectarismos, tratamos de que las comunidades se integren mediante la participación, mediante el diálogo, que tiende como elemento convocante el bien común. (*La Nación*, 7-oct-1980).

Comunicado de la Fuerza Federalista Popular (FUFETO) al designarse presidente al general Viola.

El nombramiento del teniente general (R) Viola ha sido legitimado por el consenso popular y abre cauces a nuevas expectativas basadas en una amplia apertura política y en diálogos fecundos. . .

Ese nombramiento ha asegurado la continuidad del Proceso de Reorganización Nacional, posibilitando el logro de los objetivos fijados, y refleja la unidad de las Fuerzas Armadas, elemento éste indispensable para ejercer una homogénea conducción... .

El Proceso era la única opción válida entre la anarquía política y el terrorismo indiscriminado, que se habían enquistado en el cuerpo vivo de la Nación. (*La Nación*; 17-oct-1980).

Declaraciones del ex presidente Arturo Frondizi

Es necesario eliminar todas las medidas excepcionales que se justificaban en la lucha antisubversiva y restablecer plenamente las garantías y libertades de nuestro ordenamiento jurídico. (*Clarín*, 24-set-1980).

Afirmaciones del dirigente radical, Raúl Alfonsín.

Probablemente en Argentina sería conveniente contar con la participación militar en diferentes consejos asesores.

No se me escapa que esto significa la presencia militar en algunos centros neurálgicos y estratégicos del gobierno, sin embargo, sostengo que esta circunstancia en vez de acrecentar un predominio militar, hace efectiva, por el contrario, la supremacía del poder civil.

En este terreno el objetivo táctico más urgente de los sectores políticos es rescatar a los hombres de armas del asedio tenaz y persistente de la oligarquía. La misión de asesorar en diversos campos, así como la vinculación con especialistas de las más distintas disciplinas, permitirán su apertura a otras zonas de influencia, al par que terminará con un simplismo ingenuo y con la sensación de marginación, que es siempre mala consejera.

Pero hay una cuestión más profunda que debe situarse en la base de toda solución permanente: el problema de la educación militar.

Sabemos que todo proyecto educativo procura una determinada formación. El de la democracia debe exaltar sus principios y valores, desarrollando las virtudes socia-

les sin las cuales no puede existir. Hemos pagado mucho por haberlo olvidado.

Sin embargo, en el caso militar no se trata de un olvido. Allí ha existido una cerrada resistencia de tipo corporativo que ha impedido la acción eficaz del Estado en este terreno. Y lo que es más grave, la oligarquía se las ha ingeniado para colocar sus hombres en los diversos institutos de perfeccionamiento.

En consecuencia, y para sintetizar mi idea, creo que la contrapartida necesaria de la participación militar debe ser la orientación democrática de la enseñanza de las fuerzas armadas. (En *La Cuestión Argentina*, set. 1980).

Declaraciones del gral. Alcides López Aufranc en una mesa redonda organizada por la revista Mercado.

La democracia es casi un lujo de los países ricos con adecuada distribución, en los cuales los ciudadanos tienen una formación cultural y cívica que les permite comprender qué conviene a la nación y rechazar los cantos de sirena de los demagogos o activistas de ideologías disolventes. La democracia necesita una élite o clase dirigente de alto nivel totalmente ajena a privilegios de cuna, pero que en cambio sean de gran calidad de conducta y de riqueza intelectual. Debe incluir a auténticos estadistas, capaces de crear un proyecto nacional con convicción para llevarlo adelante. Si esa clase dirigente no existe, o no participa de la vida política, da lugar a los profesionales en crear corrientes de opinión para ganar elecciones. Los pueblos que no tienen un adecuado nivel de preparación cívica y carecen de clases dirigentes, aunque tengan individualidades brillantes no están en condiciones de elegir correctamente, inclinándose por aquellos que prometen más con menor esfuerzo.

La formación cívica de los ciudadanos no debe limitarse a conocer las divisiones políticas del Estado, o la edad necesaria para ser diputados, sino poseer la firme convicción que sólo con la libertad política y económica se logra realizar espiritual y materialmente el hombre. De esta forma estará capacitado para rechazar las ideas marxistas y populistas que atentan contra los intereses nacionales y vulneran al documento básico de la organi-

zación del país que es la Constitución Nacional. (*Mercado*, 27-agosto-81).

Declaraciones del dirigente intransigente, Oscar Alende, en una mesa redonda.

Yo tengo una interpretación del proceso peronista pero no tengo inconveniente en reiterarla porque la he expresado públicamente. Creo que al margen de lo que Perón era o pensaba, él encontró un vacío social en la Argentina, porque el antiguo radicalismo había perdido su esencia yrigoyenista y se había limitado estrictamente a lo político sin comprender que estamos viviendo una nueva era fundamentalmente social. Y además pienso que cuando Perón llegó aquí y quizás esto lo pensó en su primer charla con Sabattini, pero no tenía suficiente confianza como para poder gobernar a su partido.

Lo que creo es que él volvió anciano y con la salud muy deteriorada comprendiendo que no podía gobernar con su partido. Y yo tengo las constancias, con respecto a su deseo de integrar la fórmula con don Ricardo Balbín. Y aquí veo que asiente el amigo Storani. Por otra parte, tengo las constancias militares que dan aprobación a esta fórmula por parte de las fuerzas armadas. Y creo que en este sentido tengo también las pruebas de que uno y otro estamento político imposibilitaron la concreción de esa fórmula. De manera que aquí hay una realidad y es la del pueblo peronista, el pueblo peronista comparte con nosotros aspiraciones nacionales, populares y sociales, y entiendo que la exhumación del pasado argentino, que tiene muchas cosas negativas sin duda, no contribuye a esta imagen de la Argentina del futuro que en este momento debemos crear. Esto lo observo porque por ejemplo yo conozco y sé que existen constancias, de las entrevistas de Aramburu con Perón en Europa; ¿qué tal? De manera que pienso que tenemos que examinar las cosas de aquí en adelante con un criterio muy positivo. (En *Ocaso del Proceso*, dic-1981).

Afirmación del dirigente peronista, José María Rosa.

Quiero contar lo que presencié en Grecia encontrán-

dome allí de embajador argentino. Gobernaban unos militares que, después de mantenerse siete años en el poder usurpado, por la imposición de militares que "no eran militaristas" debieron ceder el gobierno a los civiles. Pues bien, los civiles los llevaron a los tribunales de justicia acusándolos, no ya simplemente de "rebelión" sino de "traición", ya que el deber de un militar es usar las armas para defender a la Patria y a las autoridades constitucionales, entendieron los jueces griegos que era algo semejante a valerse de las armas para combatir a la Patria. Y se los condenó por "traición", a la pena máxima que existe en Grecia para ese delito: la pena de muerte. Yo, que era entonces Embajador, informé a mi gobierno tanto de la acusación del Fiscal como de la defensa de los abortados defensores, y finalmente de la sentencia del Superior Tribunal entendiendo que "cualesquiera fueran los motivos que llevaron a unos militares a emplear las armas griegas en derrocar al gobierno constitucional, su delito es el de traición a la Patria". Y los condenó a muerte. Bien es cierto que el gobierno conservador del señor Caramanlis les conmutó la pena por la de reclusión perpetua, debido a que "los militares obraron de buena fe". Creyeron de buena fe que el derecho de revolución estaba a la misión y esencia de las fuerzas armadas, como dijeron los militares. Pese a la oposición de casi todo el pueblo griego —y sobre todo del Partido Socialista Panhelénico que hoy gobierna en Grecia— cuyo jefe Andreas Papandreu dijo que a los veintiún comandantes que dirigieron la revolución militar debería fusilárselos "como un justo escarmiento que exige la Historia" en la Plaza Constitución, la más central de Atenas. Se les conmutó la pena por la de reclusión perpetua, y hasta hoy están en la isleta de Kea, en el mar Egeo. (En *El Ocaso del Proceso*, dic-1981).

Entrevista de la periodista italiana Oriana Fallaci al Presidente Galtieri semanas antes de que éste fuera depuesto.

Gral G. Las cosas han cambiado desde la Segunda Guerra Mundial: los imperios han caído y la mentalidad de la gente ha cambiado tanto en un sentido individual como nacional. O sea, se ha descubierto la libertad. Pero

todavía quedan restos de ese imperio y de comportamiento imperialista, trazas de colonialismo. Todo lo cual es inadmisible en una era civilizada como la nuestra. Había que rebelarse.

O.F. Santas Palabras, señor presidente, pero suenan un tanto extrañas al oírlas pronunciar por usted, el representante de un régimen que no sabe qué hacer de la libertad y además la mata. La suya es una dictadura, señor presidente, no lo olvidemos.

Gral. G. Yo no la llamaría dictadura. Aquí la gente habla más que en un régimen democrático. El régimen no es democrático, estoy de acuerdo. Pero no es ni siquiera duro como en otros países, que se definen como democráticos.

O.F. Señor presidente, dígame: ¿no le gustaría pertenecer a un país más querido, más respetado, donde existiera una democracia y la gente pensara, hablarla, viviera sin ser asesinada por cualquier capitán Astiz?

Gral. G. La democracia es la máxima aspiración del presidente Galtieri, de su familia y creo que de la mayoría de los argentinos. De hecho, la vida democrática se restablecerá pronto en Argentina: la ley sobre los partidos políticos ya ha sido promulgada por el Gobierno y saldrá el mes próximo. Será el primer paso hacia la normalidad que auspicia y en ese momento las Fuerzas Armadas no deberán ejercer más el papel que ejercen hoy. Por lo menos eso espero. Este es un país complejo, sabe. Hay que tratar de entender por qué ocurren ciertas cosas aquí y por qué los militares han debido tomar siempre las riendas. Problemas que incluyen una brusca inmigración a comienzos del siglo, realidades sociales que provocó esa inmigración y que aumentaron por la recepción mundial de 1930, el desarrollo demasiado rápido de una industrialización que nunca ha sido bien absorbida...

O.F. Si, pero, ¿cómo se hace para establecer, casi inventar una democracia después de que miles y miles de opositores han sido masacrados, es decir, después de que el país ha sido privado de tantas vidas jóvenes, de tantas mentes frescas? Y si de verdad le gusta la democracia ¿por qué sigue diciendo que las urnas electorales están a buen resguardo en el sótano?

Gral. G. Porque lo están: a buen resguardo en el sótano para ser usadas de nuevo. Si no hubiese querido

usarlas de nuevo las hubiera quemado ¿no? El error es que los periodistas toman siempre lo que les resulta más cómodo, o directamente cuentan las cosas de tal manera que el significado de una frase se trastoca totalmente. Pero déjeme responder a la pregunta acerca de las vidas jóvenes y acerca de las mentes frescas de las que se ha visto privado el país. Ellos no representaban a la oposición. No querían participar en ninguna oposición: querían el poder y punto, y querían alcanzarlo justamente con métodos que usted detesta. Pero basta con el pasado, señora periodista. Ocupémonos más bien del futuro.

O.F. Bueno... el futuro me parece bastante oscuro para usted, señor presidente. Son muchos los que dicen que a causa de esta guerra usted no continuará siendo presidente, que sus días están contados.

Gral. G. Mire, sin duda este conflicto tendrá también consecuencias internas. Para cada uno de nosotros, líderes en el poder y líderes que están naciendo, esto representa una fuente de replanteamientos que terminarán podando sus frutos. Se diría que a causa de las Malvinas la Argentina ha madurado de golpe. Muchas cosas cambiarán cuando regresen a casa los hombres que ahora están en la guerra, porque ellos están más dispuestos aún que los demás para una vida política que incluya la disidencia y la oposición. En cuanto a mí... he sido designado presidente hasta finales de marzo de 1984. Si me quedaré hasta esa fecha, no lo sé. Pero más bien creo que sí. (*Cambio 16*; 1 jun. 1982).

INDICE

Introducción	7
I. El fracaso de la “semi-democracia” y sus legados	13
II. El predominio militar y la profundización del autoritarismo	36
Notas	72
Referencias Bibliográficas	79
Apéndice documental	81
1955-1966	83
1966-1976	113
1976-1982	130



\$a 14.-

Que el período abarcado en este libro es uno de los más difíciles de la Argentina no hay quien lo ponga en duda; en él a partir de 1955, se ejercitaron por primera vez nuevas maneras de hacer política.

Esas nuevas formas conformaron una serie de ciclos de desarticulación y de equilibrios precarios alternativamente rotos y reestablecidos. Desde aquella fecha hasta 1966 cada gobierno del período se caracterizó por el hecho de que su perdurabilidad estuvo en jaque desde el momento mismo de su inauguración.

La segunda etapa, de 1966 en adelante, fue dominada, en cambio, por los sucesivos intentos de unificar el campo de la política. El fracaso de estos intentos generó un cierto equilibrio: el despliegue y el posterior bloqueo de las sucesivas iniciativas trajeron como consecuencia un desgarramiento del tejido social y el colapso de patrones básicos de organización e interacción.

La crisis de autoridad, el desorden laboral, la indisciplina coincidió en que para "curar" a esta sociedad enferma halar en ella muy profundamente. La sociedad argentina metida a tratamientos brutales, sumando fantasmas políticos ignoraron el conflicto o pretendieron resolverlo minimizando capacidad de otros sectores sociales, generalmente los opositores. Marcelo Cavarozzi analiza en este trabajo este crítico período y caracteriza los patrones de funcionamiento de la política contemporánea.

Volumen simple (S)



Centro Editor de América Latina

P8-BCK-208

